

Del estallido social a la comunidad geopolítica de pertenencia

Vol. II

JAIME A. PRECIADO CORONADO
Y JOCHEN KEMNER



**Del estallido social a la comunidad geopolítica
de pertenencia**

Vol. II

Doi: 10.54871/ca25es0b

Del estallido social a la comunidad geopolítica de
pertenencia : vol II / Jaime Antonio Preciado Coronado
... [et al.]. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
CLACSO ; Guadalajara : CALAS, 2025.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-631-308-126-4

1. Comunidades Urbanas. 2. Conflictos Sociales. I. Preciado
Coronado, Jaime Antonio

CDD 301

Otros descriptores asignados por CLACSO:
América Latina / Movimientos sociales / Protestas /
Movimientos políticos

Arte de tapa: Ezequiel Cafaro

Diseño del interior y maquetado: Eleonora Silva

Del estallido social a la comunidad geopolítica de pertenencia

Vol. II

**Jaime A. Preciado Coronado
y Jochen Kemner**



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Pablo Vommaro - Director Ejecutivo

Gloria Amézquita - Directora Académica

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory - Producción Editorial



LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES

CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital desde cualquier lugar del mundo ingresando a libreria.clacso.org

Del estallido social a la comunidad (geo)política de pertenencia. Vol. II (Buenos Aires: CLACSO, octubre de 2025).

ISBN 978-631-308-126-4



CC BY-NC-ND 4.0

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875

<clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Con el apoyo de:



Federal Ministry
of Research, Technology
and Space

Índice

Del estallido social a la comunidad (geo)política de pertenencia. América Latina y el Caribe entre 2019 y 2024.....	9
<i>Jaime A. Preciado Coronado y Jochen Kemner</i>	
Bolivia	25
<i>María Lois</i>	
Chile.....	45
<i>Claudia Zapata Silva</i>	
Colombia.....	65
<i>Axel Rojas Martínez</i>	
Ecuador	87
<i>Valeria Coronel</i>	
Haití.....	109
<i>Jefferson Junior Pierrelus</i>	
Puerto Rico	117
<i>Liliana Cotto Morales</i>	
Las caravanas migrantes	137
<i>Daniel Villafuerte</i>	
Reflexiones finales. Los estallidos sociales reconfiguran el presente.....	153
<i>Jaime Preciado Coronado</i>	
Sobre los autores y autoras.....	193

Del estallido social a la comunidad (geo)política de pertenencia

América Latina y el Caribe entre 2019 y 2024

Jaime A. Preciado Coronado y Jochen Kemner

■ Doi: 10.54871/ca25es1b

En 2019, se registran manifestaciones masivas con ciertas características compartidas en la lucha por la calle y por los territorios en distintas partes del mundo que, indefectiblemente, desembocan en luchas más o menos organizadas en torno del poder político. Ese año, estallaron protestas alrededor del planeta que toman una forma de manifestación masiva cuya novedad es la politización de las demandas dado su carácter cuestionante del gobierno y del régimen político en el que se sustenta. Algunos países donde hubo estallidos sociales con esas características fueron: Argelia, el independentismo catalán en España, Francia, Georgia, Guinea, Hong Kong en China, Irak, Irán, Líbano, Reino Unido, entre otros. En América Latina y el Caribe destacaron las revueltas sociales registradas en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití y Puerto Rico. Además, en nuestra región, se registra un estallido social transnacional único en el mundo: las caravanas migrantes que atraviesan México buscando llegar a Estados Unidos.

A esta lista se agregaron otros estallidos sociales entre 2019 y 2024, que fueron dinamizados por las respuestas sociales movilizadas frente a la pandemia del COVID-19 y las medidas

gubernamentales para combatir la crisis sanitaria (Gutiérrez Cham, Herrera, Kemner, 2021). Actualmente, crecen los focos de malestar en el mundo, sin embargo, no todas las movilizaciones sociales desembocan en el cuestionamiento de las comunidades políticas de pertenencia instituidas en gobiernos y Estados nacionales, y son menos los casos en los que surgen procesos instituyentes de comunidades políticas con sentido de pertenencia autónoma. Tal malestar crece en Nicaragua, Venezuela y Cuba, aunque la intensidad del estallido social y su repercusión sobre sus comunidades políticas instituidas en sus respectivos Estados nacionales es muy heterogénea, respecto de su masividad, permanencia y grado en el que se conforman movimientos sociales que prometen transitar hacia reivindicaciones instituyentes.

En la mayoría de los estallidos sociales se conjugan demandas antisistémicas dirigidas contra el sistema financiero internacional y su impacto en los gobiernos y sus políticas públicas en los Estados nacionales: pensiones, seguridad social, empleo, salario; también surgen ensamblajes sociales que visibilizan otras agendas que vinculan lo global y lo local, en torno del cambio climático –donde destaca el movimiento juvenil *Fridays for Future* que a nivel internacional fue el gran movimiento antisistémico en 2019, pues durante ese año convocó protestas de más de 4 millones de participantes–, la transición energética o la soberanía alimentaria, así como cuestionamientos sobre el patrón de acumulación capitalista, particularmente el extractivismo, la acumulación por despojo, la precariedad laboral.

En el fondo hay un fuerte cuestionamiento del neoliberalismo y sus “consensos” privatizadores, desreguladores de la potencia pública, punitivos con violencias selectivas, destructores de la naturaleza, que tienen raíces neocoloniales, patriarcales, supremacistas blancas racistas. Cuestiones histórico-estructurales cuya crisis detona diversas manifestaciones masivas que se han caracterizado como estallidos sociales.

En torno de tales acciones colectivas, se configuran ensamblajes sociales complejos en su tránsito de movimientos sociales hacia el campo de la y lo político, en un doble sentido: por un lado, hay confrontaciones, acuerdos y desacuerdos que son simultáneamente sociales y políticos, pues esas luchas, expresadas en el espacio público: la calle, los territorios, interrogan el papel de las instituciones públicas y privadas, así como se cuestionan las comunidades políticas realmente existentes en el gobierno y el Estado nacional, como factor decisivo ante la reproducción del régimen de acumulación capitalista.

Por otro lado, se cuestionan las prácticas patriarcales racistas, supremacistas nacionalistas blancas, colonialistas y, simultáneamente, se hacen visibles procesos políticos instituyentes que encuentran en su cima la configuración de comunidades políticas cuyo sentido de pertenencia se da en dos esferas políticas: hacia dentro y contra del gobierno y del Estado instituido, los movimientos sociales buscan superar los límites de la democracia liberal, que privilegia al ámbito electoral, procedimental y elitista, dentro de lo cual se aportan nuevos formatos de democracia participativa, que incluyan las voces excluidas, lo cual no desemboca mecánicamente en luchas antisistémicas o antineoliberales. Paralelamente, los estallidos sociales enriquecen experiencias de autogobierno y de luchas por la autogestión comunitaria, en las que su horizonte es crítico del Estado y anticapitalista.

Bajo estas premisas se ideó el estudio alrededor de la configuración de comunidades (geo)políticas de pertenencia, que fueron impulsadas al calor de los estallidos sociales surgidos en 2019 en seis países seleccionados bajo el criterio de su contenido potencialmente anticapitalista.¹ En el marco de dicho proyecto, se invitó en

¹ No se analizan los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde, si bien hubo manifestaciones masivas antes, durante y después de 2019, el carácter de las incipientes comunidades (geo)políticas de pertenencia surgidas en este periodo, corresponde a la cuestión democrática, pero escapa al marco anticapitalista por el que se opta en este libro.

mayo de 2023 a un taller con expertas y expertos de los seis países, más el caso específico de las Caravanas migrantes que se enfrentan a la “frontera vertical” representada por México, en su trayectoria hacia Estados Unidos. Agradecemos a María Lois (Bolivia), Claudia Zapata (Chile), Axel Rojas (Colombia), Valeria Coronel (Ecuador), Jefferson Pierrelus (Haití), Liliana Cotto-Morales (Puerto Rico) y Daniel Villafuerte (Caravanas de migrantes) por su disponibilidad de compartir su análisis.²

Cada especialista recibió un cuestionario detallado en el que se establecieron las categorías analíticas comunes, de manera que se permitiera un análisis comparativo y algunas líneas de reflexión, generales y particulares, con el objetivo de indagar sobre la pertinencia de ese complejo tránsito de la acción colectiva hacia la configuración comunitaria de la esfera de la política y del poder:

1) En los estallidos sociales convergen una amplia gama de movimientos sociales que tienen demandas particulares, en relación con derechos económicos, sociales culturales, ambientales, que transitan hacia el campo de la y lo político dentro de un espectro geopolítico que unifica lo particular de cada demanda colectiva, con lo general que se condensa en las diversas comunidades políticas de pertenencia; sean las instituidas en el estado nacional y sus órdenes locales de gobierno, las comunidades políticas supranacionales multilaterales y globales e, incluso, las instituciones de la comunidad política mundial que pretende convocar Naciones Unidas. Paralelamente, la acción colectiva transita hacia comunidades políticas de pertenencia de carácter instituyente, que cuestionan la matriz estadocéntrica como referencia central única de pertenencia. Sus vías son diversas en sus estrategias frente a lo instituido y registran divergencias sobre el énfasis que se otorga al proceso instituyente comunitario. En esos movimientos sociales

² Las sesiones fueron moderadas por Ulrike Capdepón, Carmen Chinas, Daniel Flores, Luis Enrique González Araiza, Celia Magaña, Nicolás Rey y Pablo Uca los cuales igualmente agradecemos.

politizados, las luchas de reivindicación se agregan en ensambles sociales complejos mediante tres procesos que están implicados entre sí:

- a. *Políticas de identidad*, donde la agrupación o agregación de demandas corresponde a la identificación de una base de intereses colectivos que están vinculados a un origen común que está amenazando lo étnico, lo religioso, la equidad de género, la diversidad sexual, cualquier comunidad de intereses que comparte un sentido de pertenencia intersubjetivo.
 - b. *Políticas de reconocimiento*: se refieren al ámbito político de la reivindicación en las diversas esferas de la vida colectiva, ante conflictos que amenazan las condiciones materiales objetivas de pertenencia a una comunidad política determinada. Aquí se pueden combinar políticas de identidad y de resistencia e incluso políticas que buscan alternativas antisistémicas en las que el Estado, la religión y la familia, cobran sentido en el plano de la convivencia-conflicto en el espacio de lo político y lo geopolítico.
 - c. *Políticas de pueblo*, más allá del debate sobre populismos, se problematiza la categoría de pueblo como la base sustantiva de la comunidad política de pertenencia, como expresión de totalidad social que sirve de base a la soberanía, que no está reducida a la soberanía nacional y que expresa la lucha por la identidad y el reconocimiento por el interés general. Estas políticas se organizan en ensamblajes sociales complejos: el pueblo impedimento-resistencia; el pueblo plebiscitario; el pueblo juicioso y crítico. Tres modos de ensamblaje que tienden a articular a la comunidad política de pertenencia instituyente como acción colectiva liberadora.
- 2) Actores portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras. Los estallidos sociales visibilizan y encarnan la crisis del régimen de acumulación capitalista, pero también dejan

ver potencialidades que están larvadas en forma de “latencias”. En la acción colectiva organizada se pueden distinguir dos grandes estrategias que son consecuencia de la tensión entre movimientos sociales y estructuración del campo (geo)político:

- a. *Las luchas antisistémicas que se dan desde dentro y contra el estado capitalista*, donde se debaten límites, obstáculos y potencialidades de las reformas frente al cambio de régimen político, económico y social. Aquí las estrategias varían entre propuestas antineoliberales y anticapitalistas, entre progresismos e izquierdas que se reclaman vinculadas con movimientos sociales transformadores, algunos de los cuales siguen enfrentando el dilema entre reforma y revolución dentro de sus estrategias organizativas. En estas luchas desde dentro y contra el Estado, el poder y la conformación de un gobierno de carácter popular, en los distintos órdenes del Estado nacional, juegan un papel central; de ahí la vigencia del imaginario contractualista y del pacto social que renueva instituciones derivadas de las constituciones políticas nacionales, que son nutridas por procesos instituyentes y con formatos democráticos participativos que incluyen, pero van más allá de los procesos electorales. Un campo político en el que se conflictúan los progresismos, cuyos organismos nacionales van planteando una escala internacional de actuación, en la Internacional Progresista, y las izquierdas articuladas con movimientos sociales antisistémicos que conforman a su vez actores red en los que se vinculan lo global y lo local. Se puede decir que estas redes comunitarias configuran lo que apunta a ser una Internacional Rebelde.
- b. *Las luchas antisistémicas por la supresión del Estado, la autonomía comunitaria bajo principios de autogestión y autogobierno*, han sido dinamizadas por los estallidos sociales. En su origen, las luchas comunitarias asumen estrategias anticapitalistas, a partir de su apego a una base social conformada

por pueblos originarios, afrodescendientes, que se articulan en “pueblos en movimiento”, los cuales practican un marcado énfasis en experiencias locales de lucha y resistencia que buscan crear alternativas sustentadas en ensamblajes comunitarios de pertenencia. Tales comunidades, confrontan la colonialidad del poder mediante ensamblajes sociales organizados que trascienden la autarquía localista de la escala comunitaria. En ese camino, se proyecta un imaginario internacionalista que propicia una ecología de saberes compartidos entre diversas experiencias comunitarias en América Latina, como son la del EZLN, del wallmapu chileno y argentino, del cauca colombiano, de las comunidades indígenas de Bolivia, Perú, Ecuador, entre otras y, en el mundo destacan: la Rojava kurda, la Cooperativa Integral Catalana, o los movimientos Ubuntu, en África, Satyagraha en la India y de la Vía Campesina a escala del Sur Global.

Tal constitución de poder comunitario sin Estado, presenta varias interrogantes en torno de la relación con las comunidades políticas de pertenencia instituidas, su posible coexistencia, o negación, o destrucción intencionada. La interfaz entre las luchas desde dentro y contra el Estado, versus las luchas por suprimir al Estado, plantea interrogantes sobre las diferencias entre gobierno y estado, entre pueblo y nación, entre la gestión de las agendas globales y locales, así como sobre el campo contradictorio entre procesos electorales, reforma y cambio radical, demandas sociales y demandas comunitarias. Habría que preguntarse si los estallidos sociales están contribuyendo a la formulación de las relativamente novedosas demandas sobre bienes públicos globales relativas al agua y la tierra, a la defensa de la biodiversidad, contra el calentamiento climático y todas las formas de contaminación. Asimismo, cuestionarse sobre las diferencias entre la agenda global de los bienes públicos y la agenda local, territorializada, que plantean las demandas sobre los bienes comunitarios. Una tensión que se proyecta en la comunidad

política de pertenencia instituyente, que se conoce como *Abya Yala/Afro/Latino-América*, o como *Afroamérica Ladina*.

3) Actores portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras. Los estallidos sociales visibilizan y encarnan la crisis del régimen de acumulación capitalista, pero también dejan ver potencialidades que están larvadas en forma de “latencias”. En la acción colectiva organizada, se pueden distinguir dos grandes estrategias que son consecuencia de la tensión entre movimientos sociales y estructuración del campo (geo)político:

- a. La politización de los estallidos sociales detona cuestionamientos antisistémicos relacionados con el régimen de acumulación capitalista, que critican a la “Trinidad del Maldesarrollo” (FMI-BM-OMC) por sus políticas de ajuste y austeridad que provocan mayor desigualdad social a escala mundial, supranacional regional y en los Estados nacionales, que también critican los efectos perversos del cambio climático, la dominación patriarcal, la violencia sistémica estructural, el racismo, la violación de derechos humanos. Todo lo cual se acentuó por la pandemia del coronavirus. Desde los estallidos sociales –revueltas, insurgencias– se cuestiona el patrón extractivista, los consensos neoliberales sobre privatización-desregulación de la potencia pública, la miniaturización del Estado, la necropolítica demográfica y ambiental, la narrativa del Green New Deal, el Estado punitivo asociado con el crimen organizado. Todo lo cual configura las agendas geopolíticas en las comunidades políticas de pertenencia.
- b. En el debate sobre la democracia, el autoritarismo y la emergencia neoconservadora, se cuestiona especialmente al neoliberalismo que caracteriza al régimen político y al sistema de partidos, que se apoyan en una democracia elitista, procedimentalista, minimalista, cada vez más contaminada por la judicialización de la política. Ante el desencanto y la desconfianza

de cara a los regímenes políticos, las luchas que contienen los estallidos sociales se vinculan con políticas de ciudadanía, con prácticas comunitaristas, y con la lucha por los derechos humanos frente a la desigualdad social, la pobreza, la exclusión racista y la opresión patriarcal de género. Entre la crisis global y sistémica los conflictos se acentúan en torno de luchas por el horizonte histórico de sentido sobre valores culturales civilizatorios, derechos y poder de la naturaleza.

En las revueltas sociales masivas del periodo entre 2019 y 2024, se conjugan la lucha por la calle y la lucha por los territorios, las narrativas e interpretaciones sobre las megatendencias del proceso de globalización (actualmente una desglobalización impulsada por la crisis del llamado Orden Mundial), las luchas contra el extractivismo, el “capitalismo de plataformas”, los complejos militar-industrial-farmacéutico-mediático, y la economía digital, la inteligencia artificial y las supercomputadoras. Además, existe un amplio debate sobre los alcances de la idea de bien público y de bien comunitario a escala global, impulsado por las demandas antiprivatizadoras del agua, de la transición energética y de la soberanía alimentaria, y, también, propiciado por las demandas sobre bienestar y lo que se conoce como sociedad de los cuidados.

A partir de estos tres grandes temas, cada especialista respondió a las siguientes preguntas que ayudaron a detonar el debate. Durante dos días estuvimos reunidos para escuchar y debatir cada una de las siete presentaciones. Posteriormente, cada especialista presentó un texto sobre el caso abordado a partir de los debates transcritos, el cual fue revisado por los coordinadores de este libro, para lo que contaron con el apoyo de Dafne Elizondo, Daniel Flores y Cristina Fuentes, a quienes agradecemos su cuidadoso trabajo. El texto final, que aparece aquí publicado, fue revisado minuciosamente por los coordinadores de esta obra. Preferimos mantener el carácter de las intervenciones de debate que les pedimos inicialmente. Por esto son textos sin referencias ni bibliografías.

A continuación, las tres preguntas generadoras del debate:

1) ¿Qué procesos sociopolíticos convergen en la formación de las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno, los Estados nacionales y en los procesos comunitarios instituyentes?

- Políticas de identidad.
- Políticas de reconocimiento.
- Políticas de pueblo (“pueblos en movimiento”).

2) ¿Cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras?

- Desde dentro y contra el Estado.
- Autonomías comunitarias sin estado.

3) Modos bajo los que se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia.

- Anticapitalismo que cuestiona el orden internacional, nacional y “glocal”.
- Lucha contra el enfoque estado céntrico desde movimientos sociales “politizados”.
- Democracia y procesos electorales en torno de las comunidades políticas instituidas; tensiones entre gobiernos progresistas e izquierda social.
- Violencia sistémica, procesos de paz, derechos humanos, agenda antipatriarcal.
- Luchas contra el racismo y diversas formas de discriminación de las minorías y de las disidencias.

En cuanto a la primera pregunta, María Lois destacó que, entre 2019 y 2022, Bolivia fue escenario de momentos cruciales que marcaron

el panorama sociopolítico. De acuerdo con la especialista en el tema, el primero de estos eventos en el orden cronológico fue la denuncia de un supuesto fraude electoral, por parte de amplios sectores de la oposición y de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA). Este evento desencadenó una ola de protestas y tensiones que cuestionaron la estabilidad del sistema político y culminaron en el Golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. El segundo evento, en agosto de 2020, consistió en un bloqueo masivo que demandaba la realización de elecciones democráticas y una mejor gestión de la pandemia. Esta movilización, de gran alcance y participación, se convirtió en un punto de inflexión para reactivar la comunidad política instituyente del proceso de cambio iniciado en 2005. Finalmente, en 2022, el paro de 36 días en Santa Cruz por el censo reflejó las persistentes divisiones y tensiones entre visiones centralistas y comunitarias dentro del Estado Plurinacional. Para María Lois, estos eventos son ejemplos claros de cómo la diversidad étnica y las demandas populares siguen siendo un eje estructurante en el panorama político boliviano.

En Chile, uno de los casos que más llamó la atención a escala regional e internacional por haber sido considerado un caso ejemplar de neoliberalismo, Claudia Zapata considera que el estallido social de octubre de 2019, conocido como el 18-O, fue mucho más que un estallido: se trató de una revuelta popular de una magnitud inédita en la historia reciente del país. Este momento condensó años de conflictos sociales acumulados, incluyendo las luchas estudiantiles, feministas, ambientales e indígenas. La consigna “No son 30 pesos, son 30 años” capturó el sentimiento colectivo de rechazo al modelo neoliberal y al orden constitucional heredado de la dictadura de Pinochet. Pese a ello, aunque este estallido abrió la puerta a la posibilidad de una nueva Constitución, y llevó al poder a un gobierno de izquierda como comunidad política instituida, las tensiones entre los movimientos sociales y los partidos políticos,

sumadas al impacto de la pandemia, complicaron el avance hacia un proyecto cohesivo de transformación sociopolítica.

En Colombia, un país que se resistió a la llamada “marea rosa” de inicios del siglo XXI y que, de hecho, se posicionó durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) como uno de sus grandes opositores y el más importante aliado de Estados Unidos en la región, Axel Rojas se refiere a 2018 y 2019 como manifestaciones y solamente a 2021 como estallido social. Aunque es polémico, estos tres momentos de movilizaciones colectivas masivas fueron la culminación de décadas de desigualdades estructurales, violencia estatal y exclusión social, exacerbadas por los efectos de la pandemia. Estas movilizaciones lograron articular demandas de justicia social y derechos básicos, desafiando el modelo neoliberal imperante.

Por su parte, en Ecuador, un país que pasó del progresismo de Rafael Correa (2007-2017) al neoliberalismo conservador de Lenín Moreno (2017-2021) con todo lo que ello implica, Valeria Coronel explica que las movilizaciones sociales de 2019 y 2022, lideradas por el movimiento indígena de la CONAIE, y acompañado siempre por organizaciones populares urbanas, barriales y el movimiento de mujeres, cuestionaron en el marco del giro hacia el neoliberalismo y de desmantelamiento de la institucionalidad, las políticas de austeridad y el extractivismo exacerbado por el banquero Guillermo Lasso (2021-2023), consolidándose, así, como una respuesta organizada, no sin fisuras, respecto de la lucha contra la exclusión económica. En estos países, Chile, Colombia y Ecuador, las protestas reflejaron una capacidad notable de vincular lo local con lo nacional, y lo nacional con lo global, permitiendo que las críticas al neoliberalismo se posicionaran como eje central del debate público regional.

En Puerto Rico, Liliana Cotto analiza cómo el “Verano del 2019” representó un momento de resistencia colectiva conformado por una amplia gama de actores, cada uno con sus reclamos propios, contra la corrupción gubernamental y las políticas neoliberales impuestas por la Junta de Control Fiscal, creada en 2016. De acuerdo

con la especialista, este contexto permitió a las comunidades aprovechar la crisis política y de legitimidad, para fortalecer alternativas centradas en la justicia social y la autonomía.

En Haití, por su parte, Jefferson Pierrelus describe una realidad distinta a todas las demás, pero igualmente intensa: desde 2018, las movilizaciones sociales han estado marcadas por la lucha por la supervivencia en medio de un colapso estatal y una pobreza extrema en lo que llega a definir como un “Estado fallido”. Según Pierrelus, estas movilizaciones, aunque profundamente condicionadas por la injerencia externa, el colonialismo interno y la violencia estructural, han encontrado en las redes comunitarias un pilar fundamental para la organización y la resistencia.

En cuanto a los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras, Lois destaca el papel central de los movimientos indígenas en Bolivia, en particular su relación con el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), el partido liderado por Evo Morales (2006-2019). Estas comunidades enfrentan una constante tensión entre sus aspiraciones de autonomía y las dinámicas centralizadoras del Estado; entre lo social instituyente y lo político instituido, como sucede en otros países con experiencias progresistas. De forma paralela, en Chile, Colombia y Ecuador, movimientos feministas, estudiantiles, indígenas y afrodescendientes emergieron como actores clave en la lucha por los derechos fundamentales y la justicia social, a pesar de enfrentarse a la estigmatización social y a la represión estatal. En el caso ecuatoriano, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) destaca no solo por su capacidad de movilización, sino también por su habilidad para articular demandas locales con escenarios internacionales. En el Caribe, tanto en Puerto Rico como en Haití, las comunidades autónomas han liderado esfuerzos por resistir al colonialismo y la colonialidad del poder, y construir alternativas políticas basadas en el arraigo territorial.

Respecto a las agendas (geo)políticas, en Bolivia se han priorizado las demandas de soberanía indígena, antiextractivismo y democratización del Estado Plurinacional, aunque estas tensiones revelan divisiones entre visiones centralistas y comunitarias. Lo mismo sucede en otros países de la región como México, donde el gobierno de la llamada Cuarta Transformación encuentra en los zapatistas una de sus mayores críticas y resistencias. En Chile, la búsqueda de justicia social a través del proceso constituyente evidenció limitaciones en la articulación de un proyecto inclusivo, especialmente tras el rechazo final de la propuesta constitucional y el empoderamiento de las fuerzas políticas reaccionarias en el segundo proceso constituyente que también fracasó.

En Colombia, las agendas se centraron en la justicia social y la equidad, enfrentando como principales obstáculos la fragmentación política y la represión estatal. A pesar de ello, la movilización y el descontento popular fueron clave para construir consensos transformadores, lo que permitió la llegada al poder de la coalición de izquierda encabezada por Gustavo Petro y Francia Márquez. En Ecuador, en cambio, sin posibilidades de llegar al gobierno y en un estado de inseguridad perpetuo, las agendas se enfocaron en la defensa de los derechos colectivos, la soberanía territorial y la crítica al extractivismo, articulando lo local con lo nacional en una visión de justicia económica y ambiental.

En Puerto Rico, un claro ejemplo de colonialismo en pleno siglo XXI, las agendas se centraron en resistir tanto el colonialismo como la colonialidad, y en rechazar la privatización mediante el fortalecimiento de iniciativas comunitarias que cuestionan el bipartidismo dominante y las estructuras coloniales. A diferencia de Haití, donde las agendas se enfocan en la construcción de alternativas comunitarias frente al colapso estatal, con un enfoque en la justicia social y la defensa de los derechos humanos en un contexto de violencia estructural, en Puerto Rico las agendas se centran en la defensa de los derechos colectivos y la soberanía territorial, vinculando lo local con lo nacional.

Ahora bien, al tratarse de un fenómeno transnacional único que cuestiona las fronteras estatales y los marcos tradicionales de soberanía, es fundamental destacar el análisis que Daniel Villafuerte hace sobre las caravanas migrantes de manera integral, por tratarse de un caso paradigmático de comunidades políticas de pertenencia con características muy particulares. Daniel Villafuerte analiza las caravanas migrantes como una expresión única de comunidades políticas transitorias. Estas caravanas, compuestas por migrantes que huyen de crisis económicas, políticas y sociales, desafían no solo las políticas migratorias restrictivas de México y Estados Unidos, sino también las nociones tradicionales de pertenencia e identidad. Los migrantes que las integran, unidos en una búsqueda colectiva de derechos, dignidad y reconocimiento, incluyen a grupos particularmente vulnerables como mujeres y personas LGBTQ+, quienes enfrentan múltiples capas de violencia y exclusión. A lo largo de su trayecto, las caravanas han articulado una agenda que prioriza los derechos humanos y la libertad de tránsito, confrontando las tensiones entre el control migratorio global y las demandas de justicia y Derechos Humanos.

En el seminario y en los debates que siguieron a las intervenciones de las personas invitadas, surgieron otros temas, como la viabilidad de la categoría del estallido social para describir los fenómenos analizados o el papel de las violencias ejecutadas en el transcurso de las movilizaciones. Es también importante resaltar cómo en varios casos, se contextualizan los procesos sociopolíticos que convergieron en las manifestaciones y protestas que ocurren a partir de 2019 en un marco histórico muy amplio, especialmente en los casos caribeños, pero también en Chile, Colombia y Ecuador. Esperamos que esta obra y el análisis situacional y coyuntural que aquí proponen las y los expertos invitados, ayuden a entender mejor la coyuntura de las luchas sociales en América Latina en los últimos cinco años con sus particulares constelaciones de actores, trayectorias y respuestas organizadas bajo diversos formatos de pertenencia comunitaria.

Bolivia

María Lois

■ Doi: 10.54871/ca25es2b

Primer interrogante: ¿Qué procesos sociopolíticos cuestionan a las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno y los Estados nacionales, en este caso en el Estado Plurinacional de Bolivia? ¿Y qué aportaciones instituyentes refuerzan políticas de pertenencia comunitarias?

María Lois: Cuando me invitaron a participar en este evento, me sorprendió bastante porque me costaba relacionar los estallidos sociales con otros casos. En el caso de Bolivia, entre 2019 y 2022, hubo movilizaciones de destitución tanto en el espacio público, en general, como específicamente en el departamento de Santa Cruz. También se observaron movilizaciones de resistencia. Lo que sucedió en 2019 con el golpe de Estado me resultaba un tanto difícil de comprender. Por eso digo que tengo más preguntas que respuestas; intento mostrar la coexistencia de diferentes sentidos de pertenencia, algunos autoritarios, otros democráticos y otros comunitarios. Realmente, la situación me parecía bastante compleja. Por eso quiero destacar que, entre 2019 y 2022, hubo varios momentos de movilización en Bolivia que no se pueden entender sin tener en cuenta la influencia del coronavirus, que creo que tuvo un gran impacto en la disciplina de los estallidos y en la forma en que se organizaron y llevaron a cabo.

Resaltaría al menos tres momentos que considero cruciales para abordar la cuestión de las comunidades políticas de pertenencia y los procesos que convergen en ellas. Uno de ellos sería sin duda el año 2019, en el que se inició una movilización de 21 días en protesta contra resultados electorales no oficiales, los cuales fueron denunciados como fraude y sirvieron de base para una escalada de sucesos y movilizaciones que perdieron su carácter democrático; no todas las movilizaciones sociales son democráticas necesariamente. Es fundamental destacar este punto. A partir de la protesta popular, se llegó a momentos en los que esta movilización social terminó respaldando e incluso relacionándose con la interrupción del orden constitucional en Bolivia. Este sería el primer momento crucial a considerar. No estoy segura si podríamos denominarlo como un estallido social, pero ciertamente fue una movilización importante que debe ser analizada no solo por su propia naturaleza, sino también por las consecuencias que generó posteriormente, transformando una protesta que inicialmente tenía un carácter democrático, al menos en teoría.

En el año 2020, considero que hubo un estallido social que ha pasado desapercibido, pero que para mí es crucial, no solo para comprender lo que estaba sucediendo en Bolivia entre 2019 y 2020, sino también para entender todo lo ocurrido desde 2005 y la naturaleza del propio proceso de cambio. ¿Qué ocurrió en agosto de 2020? Desde el 4 de agosto hasta finales del mes, se produjo un bloqueo masivo en Bolivia en demanda de elecciones democráticas y una gestión adecuada del coronavirus. Este bloqueo fue de gran magnitud, casi alcanzando el número de puntos de bloqueo del año 2003. Es importante resaltar que esta movilización tuvo una amplitud significativa y en algunos momentos llegó a afectar a seis millones de personas. Considerando la población total de Bolivia, esta movilización resulta fundamental para comprender la celebración posterior de elecciones democráticas.

Aquí surgen nuevamente algunos interrogantes para mí. Esta movilización está pidiendo la celebración de elecciones

democráticas, lo cual contradice en muchos aspectos la pauta seguida por otras movilizaciones o estallidos sociales ocurridos en América Latina durante este período. Aunque ha pasado relativamente desapercibida, considero que es fundamental, especialmente porque de alguna manera recupera la comunidad política de pertenencia que inició el proceso de cambio en 2005. Este momento de recuperación es fundamental, ya que esta movilización no es partidista, sino radicalmente social.

Otra movilización relevante ocurrida recientemente fue el paro de treinta y seis días en 2022, que exigía la celebración del censo en una fecha específica, principalmente en el departamento de Santa Cruz. Hubo intentos de ampliar este paro al resto del país, pero no tuvo mucho eco y finalmente se disolvió en noviembre de 2022. Estos tres eventos plantean interrogantes sobre las diversas comunidades sociopolíticas presentes en el escenario boliviano, cada una con visiones diferentes sobre el carácter de esa comunidad política.

En todas estas movilizaciones, la cuestión de la pandemia es crucial, no solo en el caso de 2020, sino también porque la pandemia se ha convertido en una especie de momento liminal, por decirlo así, o de un momento más que se añade a una crisis más amplia de ciertas certezas que ya estaban en tela de juicio desde hace algún tiempo, tanto a nivel global como regional. La gestión de la pandemia ha generado un fuerte cuestionamiento sobre estas comunidades y ha impulsado un retorno al reclamo del Estado como actor fundamental en la gestión de la crisis, tanto en América Latina como a nivel mundial.

Otro aspecto relevante que me gustaría abordar, además de estos tres momentos, es la importancia de reflexionar sobre el disciplinamiento de los estallidos sociales y su duración. ¿Cómo se desarrollan estos estallidos? ¿Qué factores influyen en su duración? ¿Cómo son disciplinados? Es decir, ¿qué papel juegan las leyes, las asambleas constituyentes o las elecciones en este proceso de disciplinamiento y cómo esto puede influir en el carácter específico de los estallidos? ¿Por qué terminan de maneras tan diversas? ¿Pueden

conducir a un golpe de Estado o culminar en la celebración de elecciones democráticas?

Por eso mismo surge tanta complejidad y me planteo tantos interrogantes. Sin embargo, considero que es importante, especialmente al hablar de políticas de identidad, destacar que, en el caso de Bolivia, es fundamental analizar todas estas confrontaciones y movilizaciones desde la perspectiva de un aspecto estructurante e instituyente que sigue siendo fundamental para comprender Bolivia en su conjunto: la cuestión de la diversidad étnica y racializada, particularmente la presencia indígena.

En cada uno de estos momentos que he mencionado, las referencias racializadas y racistas hacia la conjunción de esa diversidad étnica son aspectos fundamentales que debemos considerar, no sólo en los repertorios de acción durante las movilizaciones, sino también en las repercusiones posteriores. Es decir, es crucial analizar cómo se vuelve a plantear la cuestión de cómo las mayorías populares se integran en un proceso político y cómo el reconocimiento de la igualdad de estas comunidades también genera resistencia. Se han publicado numerosos trabajos sobre este tema, incluyendo análisis de periódicos en 2019 y 2020, que abordan cuestiones como los términos despectivos, las rupturas de la wiphala y el cuestionamiento de la diversidad étnica. Lamentablemente, este tema sigue siendo de gran relevancia y es esencial abordarlo, ya que está profundamente arraigado y forma parte integral de las políticas de reconocimiento de las mayorías populares, sobre las cuales se construye la comunidad de pertenencia del Estado Plurinacional.

Este reconocimiento, es decir, esta importancia o esta centralidad del sujeto indígena como sujeto de soberanía de esa nueva comunidad política que se refunda a partir de 2005 también tiene sus contrapartidas y, desde luego, es algo que reaparece constantemente y se cuestiona cada vez que hay algún tipo de movilización social. Todas esas matrices de pertenencia que mencionaba en esos tres momentos también muestran, al mismo tiempo, la reacción. Cuando observamos la respuesta a esa institucionalización de un

nuevo sujeto de soberanía, que es lo que de alguna forma se establece en la Constitución de 2009, lo que evidencian son las reacciones ante esa institucionalidad del sujeto. Al hablar de este nuevo sujeto de soberanía, es importante también considerar cómo se construye esa comunidad de pertenencia, cómo esa comunidad de pertenencia central se convierte en gobierno, en el sujeto central de un Estado y cómo se transforman las expectativas generadas sobre sujetos de soberanía que han estado excluidos y que luego pasan a ser parte central de lo político y de la política.

También es importante considerar cómo se cuestiona posteriormente esa centralidad. A menudo, me lleva a reflexionar sobre las paradojas de generar expectativas políticas basadas en ciertas comunidades, asumiendo que poseen cualidades esenciales que las distinguen de otros sujetos políticos, lo cual, en mi opinión, es sumamente peligroso. Las personas de otras comunidades que pasan a formar parte de esos Estados no son ni mejores ni peores; poseen las mismas capacidades, agencia y potencial que otros sujetos políticos. Este tema está siempre presente y podemos observarlo en otros casos de América Latina, donde a veces hay una línea muy delgada entre el racismo y el paternalismo.

Entonces, esos tres momentos, esos tres pequeños momentos que he señalado entre 2019 y 2022 en Bolivia, muestran de alguna manera que en los procesos sociopolíticos que nos encontramos en el país es central, desde luego, acercarnos a la manera en la cual se construye política, discursiva y colectivamente, el papel del sujeto indígena originario campesino en toda la conformación del Estado Plurinacional.

Segundo interrogante: ¿Quiénes son los sujetos portadores de esas comunidades de pertenencia?

María Lois: Son preguntas muy complicadas de cerrar y yo intento darlas de una manera un poco abierta, porque entiendo que el objetivo es fomentar la discusión y desde luego no hay una respuesta

fácil. Sin embargo, considero que también es importante ahondar en algunas cuestiones y no dejar de abordarlas, precisamente por la polémica y porque muchas veces como académicos y académicas rehuimos tratar ciertas cuestiones. Creo que eso fue lo que sucedió en Bolivia en 2019.

Retomando esos tres momentos que mencioné anteriormente, desde luego, en 2005, 2008, 2014 y 2019, el sujeto portador político de la emancipación, aquel que llevaba consigo alguna forma de proyecto emancipatorio para el país, un proyecto de reconstrucción no solo en términos electorales, sino también en el ámbito de los espacios públicos, las calles y el sentido común, ha sido, sin lugar a dudas, el Movimiento al Socialismo–Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP). Creo que esto es importante, ya que ese sentido común contribuía a normalizar y naturalizar la idea de que los sectores indígenas o campesinos eran ahora parte fundamental y muy relevante de ese Estado Plurinacional.

El generar un andamiaje institucional para todo esto, que es ese proceso que aparece con el Estado constituyente y que luego va dando forma a través de la historia, es parte de una narrativa en la que no podemos ignorar, por supuesto, a otras comunidades que realmente comienzan a cuestionar de alguna manera, no tanto al Estado en sí, sino más bien la forma que adopta el Estado, es decir, no tanto el concepto de Estado en sí mismo, sino más bien la configuración que asume, que es la de un Estado Plurinacional. También es importante considerar algunas de las formas en que este Estado Plurinacional va evolucionando desde el inicio del proceso en 2005 hasta 2019.

La cuestión de los recursos naturales se volvía fundamental para gestionar de manera soberana la redistribución del ingreso y construir así una democracia social, no solo como un tipo de gobierno o política, sino como una forma de Estado, es decir, un Estado Plurinacional con democracia social. Esta no es solo una cuestión de gobierno, sino también una cuestión de Estado, y el sujeto central de este proceso histórico, en un sentido un tanto

clásico, es la población indígena originaria campesina. Entonces, no estamos hablando solo de un tren, por así decirlo, sino de una amplia comunidad política de excluidos, organizaciones sociales y clases subalternas, con diferentes denominaciones.

Y entonces tenemos un maquinista que aparece contextualmente al frente de ese tren, que es el MAS, y que muchas veces se confunde, pero que no necesariamente es lo mismo. No hay que confundir el tren con el maquinista. La práctica de todo ese proceso amplio revela situaciones donde los acuerdos mínimos se tensionan, se cuestionan, etcétera, porque hay una relación muy específica entre el Estado y la sociedad, que en el caso de Bolivia va más allá de las formas de partido, movimiento o sindicato, y desde mi punto de vista tiene una centralidad en las tramas comunitarias, de las que estamos hablando, las articulaciones colectivas donde el Estado es un elemento clave. Esta articulación también es relativamente propia de este contexto. Es decir, los sectores populares están en el centro, no se habla de sociedad civil, ciudadanía o clases medias, sino que lo que vemos es una compleja amalgama entre Estado y sociedad, y los derechos sociales se establecen desde la frontalidad. La cuestión es que cuando ciertas condiciones objetivas de exclusión se revierten, se produce un repliegue, tanto interno como externo. Internamente, esto se refleja en los liderazgos y las dirigencias de las organizaciones, pero también en la arremetida de quienes se sienten excluidos de esa comunidad. Por lo tanto, me parece muy interesante seguir reflexionando sobre las posibles confrontaciones y las comunidades que se enfrentan.

Se puede abordar esta discusión desde dos perspectivas: dentro del Estado o contra el Estado. Desde la perspectiva de contra el Estado, además de lo que ya hemos mencionado, especialmente en el contexto de un Estado Plurinacional y de democracia social, es importante señalar lo que ha estado sucediendo y sigue ocurriendo en el caso de Santa Cruz, donde se ha producido una protesta contra la forma territorial del Estado. Esta protesta va más allá de la simple demanda de autonomía que se planteaba en 2005, ya

que la autonomía departamental puede tener diferentes implicaciones según el contexto. Históricamente, la demanda de autonomía departamental ha sido parte de las demandas constituyentes, pero otras cuestiones se politizan y se convierten en demandas que a menudo trascienden el marco democrático. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, la utilización de la cuestión de las autonomías departamentales como un frente contra el Estado ha sido especialmente cuestionadora y ha sacudido los cimientos del Estado, como ocurrió en 2008.

Luego tenemos otras comunidades y sujetos que representan otro tipo de autonomías presentes en la Constitución boliviana, como las autonomías indígenas originario-campesinas. Estas autonomías son formas comunitarias que están reguladas tanto por la Constitución como por la legislación estatal. Son una de las expresiones más interesantes para reflexionar sobre cómo se pueden construir enfoques alternativos que puedan desafiar –o no– la estructura del Estado, al incluir otras perspectivas sobre la política y diferentes formas de ejercerla.

En Bolivia, actualmente contamos con varias autonomías indígena originario campesinas, con al menos treinta y cinco áreas que en algún momento están en proceso de reconocimiento como tales. Este proceso es controvertido, ya que, si consideramos que el sujeto indígena originario campesino es central en la configuración del proceso de cambio, también nos damos cuenta de que las autonomías indígenas originario campesinas están en un proceso de mejora y necesitan ser profundizadas. Se requiere convertir este proceso en algo menos burocrático, posiblemente con menos referéndums y otros trámites, para facilitar el reconocimiento de estas autonomías indígenas originarias y campesinas.

En cualquier caso, quiero destacar que esta construcción territorial no es algo nuevo en Bolivia. Históricamente, hemos visto reclamaciones similares de reconocimiento de comunidades y autonomías, como en el caso del Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Guerrillero Túpac Katari. Si bien estas reclamaciones

no son nuevas, es interesante cómo su formulación específica en términos de la Constitución, nos lleva a reflexionar sobre la política de la ancestralidad y su reconocimiento en el contexto de las autonomías indígenas originarias y campesinas. Esto nos lleva a una paradoja, donde la visión antropológica puede resultar colonial al reproducir las características de resistencia y agencia de los más débiles, en este caso, de las autonomías indígenas originario campesinas, y cuyos sujetos terminan apropiándose de lo que James Scott llama “la gramática de los débiles”.

También sería muy interesante dejar sobre la mesa el tema de la cuestión territorial, que es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho. El tema de la necesidad de demandar un reconocimiento territorial para esos sujetos portadores de la emancipación o esas posibilidades de emancipación. Este es un debate complejo y extenso: ¿es siempre necesario el reconocimiento territorial para constituir una comunidad emancipatoria? Ya sea en forma de Estado, autonomía indígena originaria, campesina, o como un Estado independiente, las estrategias decoloniales para comunidades sin Estado deben considerar siempre este reconocimiento territorial.

Es importante reconocer que existen otras formas de autonomía que no se basan necesariamente en estructuras territoriales. Este tema no es exclusivo de Bolivia, sino que se extiende a toda América Latina y a contextos postcoloniales en general. En muchos casos, el reconocimiento de la demanda de emancipación a través de la territorialidad puede llevarnos a reproducir las mismas estructuras que ya existen en el Estado territorial mayor, pero en una escala más pequeña en las autonomías indígenas originarias campesinas. Esto nos lleva a cuestionar si lo territorial es realmente un fin en sí mismo o más bien un medio para la emancipación. Es una pregunta compleja que requiere discusión y debate, ya que el recurso a lo territorial, ya sea a través de autonomías, Estados federales u otras formas, puede terminar reproduciendo las mismas instituciones, desigualdades y opresiones que caracterizan a los Estados existentes.

Tercer interrogante: ¿Cuál es tu lectura geopolítica de lo que ocurre en Bolivia en esta coyuntura que nos planteaste derivada de tres momentos cruciales?

María Lois: Precisamente ponía un poco este tema sobre la mesa de las cuestiones territoriales y la relación entre lo territorial y lo político, así como la construcción de una agenda geopolítica que trascienda las particularidades locales y se inscriba en un contexto global. Eso nos ayuda de alguna manera a intentar, sin dejar de ver las particularidades de Bolivia y de América Latina, a poner un poco las discusiones en una perspectiva más amplia, porque el momento en el que estamos amerita un tipo de perspectiva que nos lleve más allá de los casos concretos. Por ejemplo, ciertamente el papel de las mujeres y los movimientos feministas en las movilizaciones a nivel mundial es fundamental. En mi país, hemos sido testigos de cómo se han convertido en ejes centrales para la reconstrucción de la política pública y han provocado reacciones significativas en la agenda pública. En el caso de Bolivia, también desempeñan un papel importante. Se han forjado alianzas a nivel global que luchan desde una perspectiva antipatriarcal para constituir y reconstituir comunidades de pertenencia. Es importante situar estas dinámicas dentro de un contexto más amplio y comprender su influencia en la configuración de las políticas y movimientos a nivel internacional.

También es interesante ver las alianzas que se tejen desde esos movimientos, cómo se desarrollan y qué impacto tienen. Hay que poner sobre la mesa que hay movilizaciones distintas y que no todas las movilizaciones son democráticas y no plantean avances en derechos, avances en agendas amplias de justicia social. Incluso, en muchos casos, precisamente lo que intentan es frenarlos. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta. En esas tres movilizaciones, las mujeres tienen un papel importante, pero porque son de los sujetos más castigados en esas movilizaciones. Recuerdo, por ejemplo, las represalias que se le hicieron a una persona, una mujer que era alcaldesa de Vinto, un municipio de Cochabamba. Hay

mucha más presencia, pero también hay mucha más reacción, porque ya se van convirtiendo en sujetos interseccionales, que son indígenas, que son mujeres, que participan de una manera o de otra. La reacción a eso también es importante ponerla sobre la mesa.

Ya he hablado un poco de la cuestión de las autonomías, porque me interesaba poner sobre la mesa el tema de otras alianzas. Hay muchos lugares en los cuales la palabra autonomía y un cuestionamiento de las formas clásicas del Estado es importante. Es una de las estrategias discutibles, pero que, desde luego, forma parte de los cuestionamientos al Estado a nivel global. De nuevo, es interesante pensar cómo eso se politiza. La forma de autonomía en sí misma no tiene un carácter determinado. Hay que ver de qué manera se construye y qué significado político se le da. No tiene por qué tener necesariamente esas características.

Creo que es algo que merece la pena que se ponga sobre la mesa, hablar de agendas geopolíticas y de comunidades de pertenencia. Las tensiones –que además venía en la pregunta– que se han generado en torno a las cuestiones de la “democracia”. Y digo democracia entre comillas, porque en muchos momentos se convierte en una disputa en sí misma el término democracia, cosa que parece increíble en el siglo XXI. Y también las tensiones entre los gobiernos progresistas y la izquierda social.

Creo además que nos podemos entender cuando hablamos de la tensión entre los gobiernos progresistas y la izquierda social. Eso lo voy a intentar traer al caso de Bolivia. También sería interesante definir a qué nos referimos por izquierda social. Podríamos dejarlo en izquierdas porque todas las izquierdas son sociales y las reclamaciones también son sociales. Hay personas de izquierdas que participan de unas comunidades y otras no. Entonces, lo de izquierda social supongo que tiene un contexto en el cual hay esa definición, pero entenderé que se refiere a las izquierdas que cuestionan ciertas fórmulas de desarrollo. El caso de Bolivia me parece muy interesante por ser un tema muy controvertido y que necesita mucha discusión. Es importante exponer momentos específicos y en

el caso de Bolivia, el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) se ha convertido en un referente, como en Ecuador y otros en los que se ven los límites, las capacidades y los cuestionamientos de determinadas comunidades, los modelos de desarrollo y los procesos de desarrollo que se realizan en función de esa justicia social o de esa reconstrucción del Estado. El caso del TIPNIS no lo voy a profundizar porque estoy segura de que se conoce perfectamente.

Voy a traer otro ejemplo a colación, que es el gasolinazo que se produce en 2010 en Bolivia, cuando se intentan transparentar las subvenciones a la gasolina que se daban en el país y hubo que dar marcha atrás en ese decreto, porque realmente muchas veces no coincide lo político y lo social a la hora de acompañar determinadas construcciones de Estado. Me parece que esas tensiones entre gobiernos progresistas y de izquierda social, tienen una importancia fundamental. Es importante volver a leerlas desde la lente geopolítica más amplia, la lente geopolítica global, en perspectiva. ¿Cómo ingresan los Estados de América Latina y del resto del mundo a la economía-mundo? ¿Cómo se insertan en ella? ¿Se insertan como sujetos creadores de Estados nacionales capitalistas o se insertan como donadores de materias primas? ¿Cuál es la forma de su inserción en la economía-mundo que, además, se reproduce todo el tiempo y profundiza más todavía esa dependencia de las materias primas y, en este caso, de los recursos naturales?

Si nos olvidamos de que del Cerro de Potosí nace toda la construcción de los Estados europeos, nos estamos olvidando también de hacer una lectura material necesaria de las cuestiones medioambientales en América Latina, porque no se pueden separar. Ni en América Latina ni, desde luego, en el resto del mundo. Pero en el caso de Bolivia y en otros casos, insisto, esto no es en absoluto defender ningún modelo de desarrollo, pero sí es importante –cuando se producen esas tensiones– intentar entender también que hay cuestiones que están ligadas específicamente a esa historia, a la geopolítica amplia, es decir, a la economía mundo, a los ciclos de

Kondratieff, a los ciclos de las *commodities*, a las maneras posibles de construir modelos industriales. Eso es muy importante y debería de ser un ejercicio para ver las dificultades de emancipación en términos de economía política de América Latina. Es una lectura que nos muestra los límites de esas construcciones y que muchas veces se convierte también en una lectura que lo que hace es condenar precisamente los intentos. Con muchos defectos, desde luego, pero los intentos de construir Estados que tengan una forma distinta, que no sean democracia liberal, formal, procedimental, sino también democracia social como forma de Estado y como forma de redistribuir los ingresos para las mejoras de las mayorías y digamos, alcance de una justicia social.

Este es un debate muy largo, pero importante, porque muchas veces acabamos haciendo una geopolítica reducida a la interpretación de un contexto determinado en función de clasificar qué es lo que es de izquierda o de derecha; esto sí es de izquierda, esto no lo es. Además, es un momento en el que estamos en una transición a un capitalismo verde, pero capitalismo a nivel global; una transición energética en la cual se sustituye un capitalismo por el otro. Es muy importante plantearse ese tipo de cuestiones, porque finalmente acabamos comprando lecturas absolutamente inmateriales de las cuestiones sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, sobre la economía-mundo, etcétera.

Para terminar, sería interesante también abordar la tensión en Bolivia en torno al significado de la “democracia”, que refleja una dinámica global relacionada con el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como con otros actores globales. Esta tensión plantea la pregunta de cómo se entiende la democracia, si como algo formal y liberal, o como algo social. Es importante tener en cuenta que, en Bolivia, desde 2019, se ha demandado principalmente una democracia formal, es decir, la celebración de elecciones y el ejercicio del voto. No es que la democracia formal esté fuera del proceso, sino que es una amalgama más compleja. Hay también una disputa en términos del maquinista del que hablaba antes, que ha sido el que ha llevado a

cabo el proceso de cambio en los últimos años, que es el MAS-IPSP y que, desde luego, es un sujeto de una comunidad de pertenencia –históricamente hablando– muy importante por su relación instituyente con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales de base, con la soberanía de los pueblos en este momento.

Esa tensión también es interesante dejarla sobre la mesa a nivel geopolítico. Plantearnos también quiénes son los sujetos centrales para generar esas agendas geopolíticas de las comunidades de pertenencia, es decir, las organizaciones sociales. Este debate es antiquísimo, tiene sus raíces en el marxismo clásico de las décadas del ochenta y noventa, con figuras como David Slater, que buscaba entender las tensiones y las diferencias, así como identificar las bases que sustentan los procesos políticos y las comunidades de pertenencia.

A menudo nos enfocamos en la estructura del partido político o en el liderazgo, así como en movimientos y politizaciones específicas que a veces representan mayorías y a veces minorías, pero no siempre. Sería interesante considerar las agendas específicas que contribuyen a la formación de comunidades que trascienden las formas partidistas. Esto es común en los estallidos sociales de América Latina, donde los movimientos y organizaciones sociales son la base de estos procesos, y a menudo van más allá de nuestros marcos de análisis y reflexión habituales. ¿Por qué hablamos de crisis –que la hay– en una organización partidaria? ¿Por qué eso tiene que ser una crisis de la potencia social? ¿Por qué tiene que ser necesario suponer una crisis de lo social que sostiene los procesos emancipatorios? A veces caemos en esta lógica porque pensamos dentro de marcos que se centran en agendas políticas y geopolíticas ligadas estrechamente a partidos políticos, líderes y la democracia formal. Me gustaría pensar que hay otras maneras en este seminario, sobre todo con este título tan atrayente de pensar los estallidos y las movilizaciones sociales.

Debate

Pregunta: ¿Cuál es el papel del Grupo Comuna, de las organizaciones mineras, de los recursos como el gas? ¿Se aprecian tensiones y conflictividades en esas formas de relación de comunidades y Estado?

María Lois: El grupo Comuna me parece un grupo fundamental en la época del ciclo de protestas y, sobre todo, entre 2000 y 2005, porque articularon una lectura de horizontes de filosofía y teoría política desde los que ir construyendo y cuestionando lo que se estaba dando en ese momento. Tienen todo mi respeto y admiración intelectual, sin ninguna duda. Todos ellos. De alguno mantenemos el contacto y creo que son personas importantes para saber qué se movía en Bolivia entonces.

Creo que el Grupo Comuna, con todo el respeto intelectual, es una de las manifestaciones más evidentes de las contradicciones y dificultades de llevar a cabo los proyectos políticos en contextos complicados y complejos. Considero que el salto a la política fue con mayores aciertos y menores errores, pero yo creo que el que hace cosas se equivoca. Quien no hace nada, el que no participa en una construcción política determinada, pues obviamente no comete errores o, al menos, no errores de ese nivel. Creo que eso, lo que hizo básicamente, fue precipitar la separación o la ruptura del grupo. Había más gente, por cierto. Farit Rojas también estaba, bueno, había gente joven también. Me refiero a que era un grupo relativamente amplio. También había cuestiones personales que creo que son importantes. En definitiva, me parece un grupo fundamental para entender el momento intelectual y creo que también el propio desarrollo del grupo. Las posiciones de algunos de los miembros de la comuna con lo que ocurrió en 2019 son, por decirlo suave, complicadas de asumir. Digamos que me parece un grupo fundamental para entender cómo en un momento de acumulación de luchas históricas se rompería con lo que pasaba en Bolivia y creo que es

fundamental entenderlo así. Después, como ocurre en otros contextos, participar en una construcción desde el Estado, que a mí es lo que me parece complicado y complejo o participar en otras formas políticas, acabó decantando también la propia evolución del grupo.

Las organizaciones mineras en Bolivia tienen una importancia fundamental que no voy a describir precisamente por la conformación del Estado boliviano, por cómo se construye, por la importancia de la minería y las cooperativas mineras. Creo que es necesario siempre pensar en lo que les decía un poco antes, no en cómo rescatar las lecturas materiales para muchas de las cosas que ocurren. Las identitarias son absolutamente importantes, pero las politizaciones de la identidad no se producen en el aire, se producen en contextos determinados. Las organizaciones mineras siguen siendo importantes, pero ahora es quizá una rama de esas organizaciones mineras, los cooperativistas, que siguen siendo fundamentales. Sí, hay una tensión entre las organizaciones sociales y el Estado en el caso de Bolivia. Pero esa tensión es la base que construye el proceso de cambio. Quiero decir, es esa tensión entre organizaciones sociales y Estado lo que hace que el proceso avance o no.

Cuando la tensión se agranda, hay que buscar otras posibilidades de resolver esa tensión de una manera creativa, por decirlo así, para que siga avanzando –o no– ese proceso. La tensión puede adoptar diferentes formas. Yo mencionaba el caso del TIPNIS porque es el caso más conocido. Por supuesto, también hay tensiones con los pueblos del Oriente. Hay tensiones con comunidades muy específicas, con maestros, con sindicatos. Con la cuestión económica también ha habido tensiones con determinadas características que al final se han resuelto, pero con determinados colectivos. Entonces creo que esa tensión está ahí y que cuando no haya esa tensión en Bolivia, se habrá perdido parte de lo que era clave intentar fundar: un Estado con organizaciones sociales y comunidades como pilares fundamentales. Y creo que esa tensión, en el caso de Bolivia, es de alguna manera lo que puede mantener –o mantiene– el proceso

vivo. El día en que se resuelva esa tensión es cuando esa amalgama entre Estado y sociedad, de alguna manera se convierte en una y entonces, bueno, pues cambiaría un poco el propio carácter del proceso de cambio. Creo fundamental mantener esa tensión, pero siempre hablando en cuestiones políticas también, es decir, repolitizar esa tensión.

Lo que decía antes, los derechos sociales en Bolivia siempre se han hecho de manera confrontacional, se han nacionalizado. Ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales para entender lo que les decía antes, un poco de los maquinistas y de los trenes. Creo que de lo que se trata es de pensar en que detrás de cualquier maquinista hay un tren, y esa tensión, ese tren que va avanzando, permite revertir hasta cierto punto las condiciones estructurales de desigualdad en un país como Bolivia.

Pregunta: En Bolivia ahora quizás no se percibe que hay una demanda de una nueva construcción de Estado, porque el Estado Plurinacional persiste hasta el momento. Pero, ¿qué estallido ve que desencadenará ahora esta crisis económica? Sobre todo, porque creo que el componente étnico está superado respecto a lo que generó en su momento las protestas contra la clase política boliviana que estuvo por casi 20 o 25 años en el poder. Ahora es otro tipo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estallido nos espera en Bolivia ahora? Me interesaría saber cuál es tu opinión respecto a ello, sabiendo la lectura que hay de la sociedad boliviana, ahora frente a este escenario que se viene.

María Lois: Como saben, estos días se ha aprobado una ley específica, la Ley del Oro, para poder recuperar la falta de liquidez en el Banco Central. En el caso de Bolivia, en términos económicos, frente a otros países de América Latina durante todos estos años, incluyendo la crisis post ciclo de las *commodities*, ha sido un país que ha seguido creciendo económicamente. No ha dejado de hacerlo. Creo que la crisis, que la cuestión económica, como se dio en 2019, no es

la cuestión con la que se ganan las elecciones en Bolivia, porque si hubiera sido esa la cuestión, no habría ocurrido lo que ocurrió en 2019.

La protesta no se produjo por una cuestión económica en ningún caso; yo no creo que la cuestión indígena haya desaparecido para nada del escenario. En el caso de Bolivia, insisto, el modelo económico en 2019 no tenía ningún problema. Las protestas venían por otras cuestiones. Ahora mismo creo que hay un momento con ciertas dificultades, pero creo que es un momento que también es global. No creo que sea una cosa exclusiva de Bolivia, creo que efectivamente hay tensiones entre recurrir a los préstamos como han recurrido otros países; recurrir a ajustes. Yo creo que en Bolivia eso todavía no está sobre la mesa, aunque no descarto que haya habido, desde luego, posibilidades de imaginárselo. Yo lo digo por las encuestas que salen en los periódicos, por los titulares de los periódicos, por lo que se dice en la calle, por lo que ha sido la celebración del 1 de mayo con la Central Obrera Boliviana, el aumento de un 5 % del salario mínimo.

¿Hay crisis económica? Sí. ¿Hay crisis del modelo económico? Yo tengo mis dudas. Es decir, creo que hay un momento de reajustes, pero no sé si hay una crisis del modelo económico. Lo que se está apostando es por una industrialización, que es lo mismo por lo que se apostaba en el proceso de cambio e industrialización. Antes era el gas, el petróleo, ahora será el litio, que es el mismo modelo, por desgracia o no, de extracción de los recursos naturales. Yo no creo que haya diferencias significativas. Creo que, entre esos modelos económicos, la tensión a la que usted alude entre el anterior presidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce no es la única. Existe una tensión política que tiene diferencias de visiones. El otro día, como dije, se aprobó la Ley del Oro en el Parlamento. Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta, y decir dentro de todo, que al final se llegó a un acuerdo y se aprobó la Ley del Oro por todos, por la mayoría de las y los asambleístas, incluyendo los asambleístas del MAS. Entonces, yo creo que también esas

tensiones son importantes, quiero pensar que lo social puede ir más allá de todo eso.

Finalmente, sin intentar defender quién o qué causa las cosas o no, yo no creo que una persona sola sea la causante de las crisis políticas. Las crisis políticas son amplias, se causan a partir de varios actores y creo que suscribirlas a una persona determinada es una forma de entender la política muy de la ciencia política tradicional. Evidentemente, hay líderes que hacen cosas, pero, normalmente, hay un contexto en el cual el significado de ese comportamiento tiene repercusiones. También hay grupos que apoyan, es decir, no se dan en el aire; hay personas que tienen un apoyo mayoritario, hay organizaciones internacionales que apoyan a ese líder en un momento determinado y luego contribuyen. Es como cuando en España hablamos del franquismo. No era solo Franco quien sostenía las cosas. No es una persona, es un contexto más amplio y no le puedo decir cómo estallará, porque yo creo que no será por cuestiones económicas. Creo que el clímax más importante sigue siendo la cuestión indígena.

Chile

Claudia Zapata Silva

■ Doi: 10.54871/ca25es3b

Primer interrogante: ¿Qué procesos sociopolíticos cuestionan a las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno y los Estados nacionales, y qué aportaciones instituyentes refuerzan políticas de pertenencia comunitarias?

Claudia Zapata: Esta primera pregunta aborda el tema de qué ocurre con los procesos sociopolíticos que convergen en la formación de comunidades políticas de pertenencia, su relación con el gobierno, con los Estados nacionales, y su relación con procesos comunitarios instituyentes. En este contexto, surge el tema de la formulación de políticas de la identidad, de reconocimiento y del pueblo. Se trata de una cuestión bien interesante que nos permite pensar *in situ* y en procesos políticos donde una participa como ciudadana, como académica, como investigadora o como intelectual, pero fundamentalmente como ciudadana. Permite probar los bagajes teóricos, porque la teoría sirve para interpretar los procesos que ocurren o lo que ha ocurrido, lo que se está desarrollando, y ahí han existido colisiones entre marcos teóricos previos en nuestro entorno, que tienen que ver con las discusiones que damos en investigación.

Parto siempre con la precaución de que, para mí, con una formación de historiadora, se me hace complejo pensar y analizar procesos en curso. Creo que las constataciones y reflexiones que pueda

desarrollar aquí, están sujetas a una inestabilidad y una precariedad de un proceso que todavía se encuentra abierto. Pero me imagino que para cualquiera ha sido particularmente sorpresivo en cada momento, y también nos ha mostrado que los procesos de cambio o las coyunturas y los escenarios que se abren a partir de estallidos sociales de la envergadura que tuvo en Chile, no son lineales.

Tal vez en algún momento pecamos de ingenuidad al pensar que era un camino lineal, cuando en realidad ha habido altibajos. En este momento, nos encontramos en un punto bajo en términos de ánimo y perspectivas. Nos preguntamos si este ciclo llegó a su fin o si continuará de alguna manera, aunque sea transformado. Para partir ya con este primer interrogante, haciendo una síntesis de esto, este estallido social que emerge en Chile en octubre del 2019 ya ha tenido cierta trayectoria. Respecto al debate sobre cómo denominarlo, yo tiendo a inclinarme por llamarlo revuelta popular, porque me parece que estallido resulta ser insuficiente.

Es una revuelta popular en términos de su amplitud, de su masividad y de su alcance. Tiene un alcance nacional importante. Creo que no había existido algo con ese nivel de envergadura en la historia de Chile. Incluso en Santiago, ciudad donde han existido estallidos populares de gran envergadura a partir de temas relacionados con la calidad de vida, la vivienda, el transporte. Y hay que recordar que esto parte en Santiago y con un tema de transporte. Es una coyuntura que rápidamente, de manera muy sorpresiva para todas y todos nosotros, se agranda y se hace nacional.

Una primera cuestión que hay que señalar aquí es que esto es un momento de convergencia, de algo que es un ciclo de conflictividad social bastante largo. No es una cuestión que se pueda explicar con un escenario inmediatamente anterior a ese octubre del 2019. Este ciclo de conflictividad y de malestar ha sido protagonizado por diversos actores. Se suele decir que el antecedente de octubre del 2019 fue el movimiento estudiantil, del cual emerge la dirigencia que tenemos ahora en el gobierno con personajes como Camila Vallejo y el presidente Gabriel Boric. Fue un movimiento muy importante,

de mucha envergadura, que al momento del estallido estaba totalmente a la baja. Y, sin embargo, uno tiene que entrar a matizar, porque la verdad es que ya existían luchas previas por las pensiones, luchas medioambientales, la oleada feminista, pero también un movimiento indígena fuerte desde fines de los noventa, fundamentalmente el movimiento mapuche, que marcó un quiebre con el consenso democrático de ese periodo y el inicio de un camino de confrontación con el Estado.

Además, se trata de un movimiento muy heterogéneo. Esa vertiente que confronta al Estado es una, hay otras, pero todas interpelean fuertemente al Estado. Yo diría que hay que construir un pacto político y social distinto. Tiene que haber una nueva Constitución Política. Yo lo empiezo a ver primeramente allí, en el movimiento indígena. Para discutir una primera cuestión de si los movimientos de mujeres o indígenas podemos reducirlos a movimientos “identitarios”, como si carecieran de una dimensión nacional o de una dimensión económica, como si lo identitario se restringiera a cuestiones de reconocimiento cultural, la verdad es que yo no lo veo así, no lo veo además en ninguna parte, pero especialmente no lo veo en la coyuntura chilena.

Para discutir una lectura que construyó una genealogía urbana y centralista del estallido social en Chile, otro elemento a considerar es que abre una coyuntura de crisis política durante un gobierno de derecha, que es el de Sebastián Piñera. En el punto donde convergen masas movilizadas, resulta difícil afirmar que todos esos participantes, en su mayoría, eran parte de movimientos o actores organizados. Por otro lado, se encuentran diversas organizaciones, movimientos sociales y partidos políticos de izquierda, muchos de ellos recién formados. Había una clase política que ya se había transformado bastante respecto de lo que había sido el mapa político más convencional de la transición democrática. Es un bloque o un campo popular por la transformación en ciernes, en el sentido de que le faltaba, por ejemplo, una conducción política más evidente. Insisto en que todos los movimientos sociales estaban en

un momento de baja energía y de baja presencia pública. En este contexto se produce en noviembre del 2019 el llamado Acuerdo por la Paz. Este acuerdo, elaborado por la clase política en el Parlamento, define una salida institucional a la revuelta popular.

¿Cómo se sale de un momento así? ¿Cómo se encauza? Es algo que se va produciendo *in situ*, y aquí se propone una salida institucional desde el Parlamento, centrada en la cuestión constitucional. Para eso se definió un itinerario constituyente con un plebiscito de entrada, elección de constituyentes y un plebiscito de salida. Eso generó confusión y mucha desorientación, porque no hubo diálogo entre la clase política, con los partidos de izquierda y los actores sociales, o si lo hubo, fue muy escaso y no vinculante. No hubo consulta sobre la agenda y sobre la forma de encauzar el proceso. Yo fui bastante crítica en lo público también de ese acuerdo pero, al mismo tiempo, valoré su existencia. Esto lo firmó la derecha y la ultraderecha en Chile, a regañadientes. No querían. Le temen a la política popular, le temen a un proceso para definir las cosas y que los marcos que nos regulan sean participativos, porque tenemos una trayectoria autoritaria en materia constitucional y porque la Constitución de 1980 es uno de sus baluartes ideológicos más poderosos respecto al modelo neoliberal y del proyecto que instalaron desde el golpe de 1973. Por su parte, los actores y los movimientos se embarcan de manera subordinada en este proceso constituyente.

Una cuestión importante es: ¿por qué tenía que ser solo un itinerario constituyente? ¿por qué no se negociaron más cosas en un momento de particular debilidad política de los poderes fácticos? En el plebiscito triunfa de la opción “Sí”. Se conforma una convención constitucional con mayoría abrumadora de centroizquierda, con fuerte presencia de actores sociales y de independientes, características que son absolutamente inéditas para nuestra historia política. Fue como si de la noche a la mañana todo esto se volviera tan relevante que de repente nos encontramos abordando temas que parecían imposibles de discutir en la esfera pública en Chile. Y no solo eso, sino que también lo estábamos haciendo de manera

bastante vanguardista en algunos aspectos. Por un lado, con escaños reservados para indígenas en esta Convención. Por otro, si no me equivoco, es el primer órgano donde se establece como condición de entrada la paridad de género. Insisto en que el valor de esta instancia es que se instala en un país con una tradición constitucional autoritaria, con una “estabilidad” que pasa por la profesionalización de la política, y que podría haber asumido una forma burguesa clásica, pero que en su lugar asumió una forma muy plebeya y popular.

En el plebiscito de salida va a ocurrir el triunfo contundente del rechazo a la propuesta de una nueva Constitución. Una nueva Constitución que al leerla era efectivamente un “deber ser”, una declaración de principios muy inspiradora, emancipadora. Esto hacía que uno se preguntara ¿somos tan espectaculares? Definitivamente no, no lo éramos. Se rechaza esa propuesta de Constitución y ahí el análisis que se puede hacer a ese triunfo tan contundente de la opción del rechazo es complejo en el que intervienen muchos factores y motivaciones. Hay mucho rechazo allí. Lo digo porque una primera respuesta, no errada pero simplificadora, es decir que se nos despertó el racismo y la xenofobia. Lo que uno observa, al menos desde mi perspectiva como historiadora, es que a lo largo de la historia las sociedades que han llevado a cabo revoluciones también han sido racistas, misóginas y patriarcales. El punto es ¿por qué ese sector de la población encuentra tanto espacio? Como digo, hay muchos tipos de rechazos allí. Fue una cuestión bastante heterogénea y tendremos que seguirlo analizando, pero es importante mencionar que se enmarca en una embestida brutal de los poderes fácticos. Esto hace que me pregunte, ¿por qué combatieron con tanta brutalidad esto que fue un aparataje prácticamente incontrarrestable? ¿por qué lo embisten con tanta brutalidad?

No veo la respuesta únicamente en el texto constitucional y los derechos consagrados allí, ni en el marco del pacto establecido. Yo creo que siempre existe la posibilidad de aprobar para después dejar como letra muerta. Pero me parece que aquí lo que se advirtió, y esto

ya ha ocurrido en el pasado, fue el peligro de la política con pueblo. Y por eso usaron con tanto ahínco la táctica del desprestigio, de la ridiculización y la activación de un fascismo popular desde arriba, en un contexto duro como fue el de la pandemia, que también intercedió aquí para torcer un poco el curso de las cosas. De hecho, con la pandemia se alteró el calendario del proceso, aplazándose seis meses. Eso significó que el plebiscito de salida, que tendría que haber sido en el gobierno de derecha de Piñera, ocurre en el gobierno de izquierda o de coalición de izquierda. Hay que ver ahí también cuánto pesa en términos coyunturales, una cuestión que está en el estallido muy fuerte y que en este contexto nos puede haber jugado en contra, que es el estar en oposición a quien gobierna.

Habrá que observar cómo van adquiriendo peso los diferentes elementos. Estoy señalando aspectos que no necesariamente se están construyendo como cierto consenso de este análisis. De hecho, en el análisis de la derrota aparecen varias de las inquietudes que se nos propone reflexionar. De partida, surge en el debate público la discusión en torno a cómo hacer política transformadora por parte de distintos actores. Me parece que esta reflexión, en última instancia, intenta ser optimista y señala una ganancia que, aunque no resuelve por completo el problema, es un paso adelante. Todos los actores están considerando cómo llevar a cabo una política transformadora en un escenario que, en principio, es favorable debido a un estallido social de esa magnitud. Por ejemplo, para los partidos de izquierda, surge la disyuntiva de cómo relacionarse con los actores y movimientos sociales, muchos de los cuales han surgido de este contexto. Esto ha generado muchas discusiones internas que incluso han llevado a rupturas significativas o a consensos precarios.

Por ejemplo, cuando se firmó el llamado Acuerdo por la Paz, varios de estos nuevos partidos de izquierda tuvieron fugas de militantes porque no estuvieron de acuerdo con firmar sin un diálogo social más amplio. También está el tema de cómo hacer política con pueblos desde la izquierda. No necesariamente ser de izquierda

implica tener base popular. De hecho, aquí lo que se mostró es que nuestros partidos de centro y de izquierda carecen de bases populares importantes y también carecen de arraigo territorial.

Por otro lado, para las organizaciones y movimientos sociales la pregunta –y el desafío, también– es por la política desde los espacios institucionales, sobre todo cuando surge la necesidad de incidir en los debates nacionales y en la disputa por el Estado. Porque también son movimientos y son signos de época que se alimentan en algún punto del discurso anti Estado o de un discurso por la autogestión y la autonomía que pasa por descalificar el espacio del Estado. Me parece que una cuestión que también es relevante destacar es que todos los actores mueven sus convicciones políticas iniciales. Tanto la esfera institucional partidista como la de los movimientos y organizaciones están considerando la transformación y reflexionando sobre la relación entre lo particular y lo general. Reconocen la necesidad de establecer vínculos diferentes con la esfera estatal y con la de los movimientos sociales.

Esa relación entre lo particular y lo general es uno de los temas que se nos propone reflexionar aquí y que es absolutamente neurálgico. Me parece que hay un sesgo en la dicotomía que a menudo se plantea en los debates teóricos, y que ahora vemos también en el discurso público al interpretar el proceso chileno, especialmente la derrota en el plebiscito. Allí reaparece de manera poco productiva una dicotomía entre lo particular, asociado a la identidad, y lo general. Esta lectura se ha arraigado en el análisis del proceso constituyente, donde prácticamente todos los “nuevos temas” que surgieron allí fueron etiquetados como política identitaria. Se percibía esa política identitaria como algo específico y particularista, sin visión general ni articulación más allá de intereses propios. Parecía carecer de un análisis de clase social y de una dimensión económica, aunque se reconocía como legítima.

Me parece que esta perspectiva es reduccionista respecto a los movimientos sociales y sus causas, que no son contemporáneas en absoluto. La diversificación de la emancipación, más allá de la

categoría exclusiva de clase social, es un tema que ha sido discutido por las mujeres desde el principio, también por los movimientos de sectores racializados, que tienen más de un siglo de historia. Esto no es algo exclusivo de la globalización actual ni contemporáneo. Aquí se está operando un reduccionismo en el análisis que, aunque seductor, es equívoco y, finalmente, cae en ingenuidades, lo cual no es necesariamente malo, pero es interesante cómo en esta esfera pública se replican debates que tienen una trayectoria en el ámbito teórico y una larga data como problema histórico.

También se observa en el ámbito de los desarrollos teóricos una crítica a la política democrática burguesa y liberal, así como una crítica a la reducción exclusiva a la dimensión de clase. Desde este último enfoque, se critica a aquellos que son acusados de adoptar un enfoque culturalista, aunque en ocasiones las cosas no funcionen de esa manera necesariamente. Me parece que hay explicaciones políticas sobre por qué en este momento ciertas luchas, demandas y discursos emancipadores están siendo descalificados de manera bastante peyorativa como “política identitaria”. El problema radica en que esto, inicialmente, fue propuesto por la derecha. Parte de la izquierda partidista e intelectual, que tiene una mayor presencia en la esfera pública burguesa, suscribe este análisis lanzado por los *think tanks* de la derecha.

La agenda de esos *think tanks* busca reducir y desacreditar todas las demandas sociales, tachándolas de “populistas” y calificándolas como identitarias. Por ejemplo, desde el Centro de Estudios Públicos (CEP), se afirmó que la Convención estaba dominada por la izquierda decolonial y académica, lo cual es extraño porque el enfoque decolonial suele rechazar las categorías de izquierda y derecha. Lo preocupante es que una parte importante de la izquierda partidista, académica y crítica, suscribió este enfoque. Esto no significa que no se deba revisar críticamente la política desplegada por el conjunto de actores, incluidos los partidos políticos. Creo que es necesario revisar todo esto para aprender y acumular conocimiento sobre cómo enfrentar situaciones similares en el futuro.

Sin embargo, esta crítica debe tener como objetivo principal la articulación del campo popular y construirse con aparatos conceptuales propios, no con los que provienen del campo oligárquico, como parece estar ocurriendo actualmente en Chile.

Segundo y tercer interrogantes: ¿cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadora y a qué reacciones se enfrentan?, y ¿cuáles son los modos bajo los que se forman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertinencia?

Claudia Zapata: Sobre ese tema, que ya he abordado de algún modo en esta primera parte, siento la necesidad de profundizar en dos cuestiones. La primera se refiere a los actores y las comunidades políticas emancipadoras, y la segunda a la cuestión de la relación con el Estado, que estaba presente en la formulación del tema propuesto.

En primer lugar, respecto a los actores y comunidades emancipadoras, creo que es crucial historizar, contextualizar y humanizar la idea de emancipación. ¿Qué quiero decir con esto? La historia de los pensamientos emancipadores y de sus prácticas políticas tiende a iluminar un aspecto de la opresión mientras deja otros en las sombras. En la coyuntura chilena actual, que todavía está en desarrollo, observamos que la emancipación es un proyecto y un desafío constante que también interpela a los propios sectores que la buscan. Por un lado, pueden estar impulsando los límites del pensamiento sobre la transformación, pero por otro, pueden estar reproduciendo dinámicas que no son necesariamente democráticas.

El campo popular, que se visibilizó durante la revuelta popular en Chile, indudablemente tiene un horizonte emancipador, pero al mismo tiempo ha mostrado limitaciones. Se observó la exclusión de ciertos actores sociales del proceso constituyente, y los movimientos, actores y partidos no mostraron la contundencia necesaria para autocriticarse y abordar esta situación. Por ejemplo, no se

discutió de manera suficiente la xenofobia y el creciente racismo que dejaron fuera del proceso a los afrochilenos y a los migrantes. Hubo una clara falta de solidaridad con estos sectores dentro del propio campo popular. Además, en este momento, algunos sectores de izquierda están participando de la denostación del movimiento feminista y del movimiento indígena. Estos sectores son los más ridiculizados por el relato predominante de la derecha, pero también cuentan con el respaldo de algunos sectores de izquierda.

En segundo lugar, el tema de las autonomías comunitarias y su relación con el Estado no puede reducirse a la dicotomía entre autonomistas y “estatistas”, como a menudo se plantea en los debates dentro de los propios circuitos políticos y activistas. Me parece que esa dicotomía entraña riesgos, ya que el valor de cada enfoque depende del contexto histórico. Por ejemplo, en Chile, en esta coyuntura, existe una clara pulsión y necesidad de recuperar el papel del Estado y su función social. Si bien algunos sectores de los movimientos sociales pueden tener otras perspectivas, en general están demandando una mayor intervención estatal y vieron en esta coyuntura la posibilidad de incidir en una reingeniería del Estado. Eso estará por verse a futuro.

Sin embargo, esto no significa necesariamente que no se cuestione la existencia de un Estado poderoso que es cooptado por los poderes fácticos. En esta coyuntura, se ha debatido profundamente sobre este tema, así como sobre el centralismo imperante en el país. Considerando nuestro contexto histórico en Chile, la cuestión del Estado es central en la lucha contra un proyecto neoliberal radical y de largo aliento.

Lo que más nos desafía en Chile en este momento, es el sentimiento de pesimismo en los ambientes activistas, en las organizaciones sociales y también en los partidos y la coalición gobernante. Sin embargo, creo que es importante hacer un análisis de los logros y avances para poder enfrentar los desafíos que se nos presentan ahora, a pesar de que estemos en una situación de desventaja tras la derrota en el plebiscito.

Es fundamental reflexionar sobre cuáles han sido las ganancias, incluso si son pequeñas y aunque todavía no hayamos logrado transformar materialmente nada. En esta coyuntura, se ha hecho posible cuestionar el modelo de acumulación, para rechazarlo y proponer alternativas. En este sentido, creo que toda esta diversidad de la coyuntura muestra una clara pulsión antineoliberal. En algunos aspectos, se manifiesta inclusive una tendencia anticapitalista, aunque no necesariamente sean lo mismo. Creo que esto también nos permite repensar las tradiciones de la izquierda.

Una lección que podríamos extraer de este plebiscito y del triunfo de la opción del rechazo, donde proliferaron muchas *fake news* de la derecha, es que la izquierda también debe ser más eficiente en su reflexión, sistematización y en mostrar que una izquierda contemporánea no implica la disolución del individuo al mismo tiempo que no se descuida, la dimensión colectiva. En este sentido, nos faltó construir consignas que apunten en esa dirección. Por lo tanto, creo que la pulsión antineoliberal sigue siendo relevante, incluso si el resultado del plebiscito fue el rechazo.

Otra ganancia es que esta coyuntura ha creado un escenario propicio para visibilizar actores, movimientos sociales y partidos que anteriormente no tenían posibilidad de acceder al Gobierno, por ejemplo. Es una situación sin precedentes que ha permitido poner de manifiesto los logros teóricos de todos estos movimientos, los cuales son acumulativos y tienen un alcance transnacional. Por ejemplo, ¿cómo podríamos negar la dimensión transnacional, global y universal del movimiento feminista, así como de los movimientos indígenas, entre otros? En este sentido, se ha destacado la importancia de los constructos teóricos que han sido desarrollados a lo largo de varias décadas y que no se limitan únicamente a lo local.

Para ir cerrando, considero que el principal logro de este espacio “institucional”, transformado en una especie de escenario político plebeyo, es la creación de un espacio de encuentro que no existía anteriormente. Aquí se han reunido sectores que solían seguir

caminos separados, sin dialogar ni negociar en condiciones de igualdad. En este espacio se encuentran feministas, representantes indígenas, nuevos y antiguos partidos de izquierda. Creo que este es un logro tremendamente positivo que debemos valorar.

Debate

Pregunta: ¿Cómo valoras la cuestión del voto obligatorio? Aunque puede parecer un tema procedimental, desde mi perspectiva como politóloga y también socióloga, creo que tiene una gran importancia política. Vengo de un país con un pasado similar al chileno y con características específicas en cuanto a las formas de manifestación electoral, como votos ocultos, entre otras. Pienso que el voto obligatorio es un factor importante a tener en cuenta. Quizás en los resultados de las constituyentes. No sé qué es lo que planteas tú, porque si ves los porcentajes que suben y bajan, sí, realmente, parece que hay ahí como un 18 % que ya no hubiese votado de ninguna forma, ni apoyado ningún tipo de concentración constituyente.

Claudia Zapata: Yo creo que el voto voluntario en sociedades tan desiguales como la nuestra deja totalmente fuera a los pobres de ese tipo de decisiones. En Chile, hace aproximadamente 20 años se aprobó el voto voluntario, absolutamente voluntario, y eso bajó los niveles de participación de manera catastrófica. Entonces veníamos de 20 años donde esta cuestión ya era así, estaba esa práctica, con un montón de gente desafectada de la política, al menos de la política electoral.

Entonces, ¿qué sucede con este proceso constituyente? Creo que es una pregunta crucial que debemos abordar ahora. No pretendo hablar desde una posición de clarividencia, ya que en su momento no lo hicimos, simplemente no nos dimos cuenta. Pero es importante analizar los sectores políticos que negociaron este camino constituyente.

Negociaron en condiciones de disparidad absoluta, lo que hacía imposible prever el resultado. El proceso constitucional comenzó con voto voluntario y terminó con voto obligatorio. En un contexto de pandemia y miedo generalizado, especialmente al cambio, esta situación se vio exacerbada. Más del 80 % del padrón votó en el plebiscito de salida, incluyendo a aquellos que se vieron obligados a hacerlo. Mucho de ese voto popular por el Rechazo fue descalificado al día siguiente con calificativos como “desclasados”, sin embargo, el problema de fondo es otro, es cómo hacer política en contexto de voto voluntario, que en términos sociales es más democrático. La izquierda debe estar del lado de los menos privilegiados, sin importar su voto.

Sin embargo, esta población, cuyo acceso a información de calidad es limitado, tiende a basar sus decisiones en lo que ven en la televisión. Este es un problema arraigado que no se resolverá fácilmente. Carecemos de medios de comunicación éticos y democráticos. Entonces, con esa información fueron a votar. Me parece que el voto obligatorio es un factor procedimental, pero procedimental histórico. Así que te lo agradezco, porque es un tema que tenemos que pensar y también tenemos que pensar la política del voto obligatorio. Mi postura no es volver al voto voluntario debido a que esto termina siendo una política aplicable a muy pocos. Por lo tanto, el desafío es aún mayor. Se trata de cómo abordar el hecho de que el 62 % que votó por el rechazo no sea calificado de fascista en su totalidad, sino de cómo podemos trabajar para construir el voto popular en ese sector.

Pregunta: Otro aspecto bastante formal es el tema del tiempo. ¿Cómo ves tú la disciplina en una asamblea constituyente con un límite de tiempo tan marcado? Lo digo pensando en otras experiencias. Por ejemplo, en Bolivia, cuando se inició la Asamblea Constituyente, se estableció un plazo de tres años. Quizás no eran necesarios los tres años, ya que habían sido cinco años de protestas y tres de asamblea constituyente. En Chile, a pesar de la intensidad

de las protestas, el tiempo para la asamblea constituyente parece bastante limitado. Creo que, dada la importancia de abrir un espacio para el diálogo y la confrontación, quizás limitar tanto ese tiempo puede dificultar la tarea de reconstruir y reformular. No sé, me parece que intentar encorsetar este tipo de procesos podría ser un factor para considerar.

Además, está la cuestión de la organización misma de la asamblea constituyente. Hablando de otros ejemplos, como el caso de Bolivia, los constituyentes iban a diferentes lugares para recoger sugerencias, o al menos se celebraban foros territoriales cada dos meses. Es interesante notar que en la Comisión de Economía no había representantes ni del Frente Amplio ni del colectivo socialista. Esto plantea la pregunta de cómo se puede poner en práctica un esquema nuevo si no se consideran adecuadamente las cuestiones materiales. Es fundamental tener en cuenta la diversidad de perspectivas y enfoques en la formulación de políticas económicas. ¿Cómo lo ves tú?

Claudia Zapata: No lo sé. Creo que hay varios elementos que me hacen pensar que sí y otros elementos que me hacen pensar que no. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, duró menos de un año. Por eso yo tiendo a pensar que los factores de coyuntura tuvieron mucho peso en el caso chileno. Por un lado, el paso del voto voluntario al voto obligatorio en un pestaño. Por otro lado, si uno hace la comparación con otras situaciones cercanas, con temas parecidos en una propuesta de texto constitucional, como fue el proceso boliviano y el ecuatoriano en esta trayectoria de constitucionalismo latinoamericano o popular, me parece que un factor tal vez más gravitante, fue que en ambos casos los gobiernos no fueron imparciales, sino que salieron a hacer campaña, tuvieron medios de comunicación, salieron a disputar el voto. En cambio, en nuestro caso, aunque era evidente que el gobierno estaba de acuerdo, no ingirió, tampoco tuvo las herramientas para disputar el voto. No nos movilizó. Es una izquierda burguesa que desde que llegó al gobierno no nos

movilizó nunca más y que hasta el día de hoy nos teme. Además, cabe destacar que hubo una orden de Contraloría para evitar que los gobiernos en funciones influyeran en las elecciones. Sin embargo, paradójicamente, esta normativa beneficia principalmente a la derecha, que cuenta con amplios recursos mediáticos. Eso también nos estalló en la cara. Estos factores, junto con la debilidad generalizada que experimentamos todos los sectores para crear consignas que conectaran los temas jurídicos generales con la calidad de vida cotidiana, representan nuestra falla.

Pregunta: ¿Podrías hacer algún comentario adicional sobre este tema que mencionaste relacionado con las cuestiones de género? Es interesante observar cómo, tanto en el referéndum o plebiscito en Chile, que resultó en un “no”, como en el caso de Colombia durante las negociaciones de paz, también hubo un resultado negativo. Ambos eventos compartieron algunos argumentos comunes, como el temor de que un “sí” implicara la aplicación de una paz con perspectiva de género, que la derecha denomina como “ideología de género”. La pregunta concreta aquí sería: ¿Qué tan grande es el riesgo de que este pensamiento conservador o de derecha, que ataca directamente la perspectiva de género, se imponga en otros procesos similares?

Claudia Zapata: Bueno, ese es uno de los elementos de la política de la ultraderecha transnacional, ya que también se articulan a nivel global. Además, no es solo un uso tendencioso, sino que también lo creen fervientemente. A mí me parece preocupante que, en este momento, la ultraderecha también esté renovando algunos de sus puntos. Ahora tiene nuevos enemigos: los movimientos indígenas y los movimientos de mujeres. Además, los movimientos feministas nunca antes habían sido movimientos de masas. Esta es la primera vez que son movimientos masivos, al menos en la historia latinoamericana, pero imagino que es más o menos similar en todas partes. Siempre han sido movimientos importantes, pero el hecho de

que ahora sean de masas es probablemente la primera vez. Y bueno, lo preocupante para mí, y lo dejo ahí porque no tengo ninguna respuesta ni solución, por supuesto, es que esa política de la ultraderecha encuentre aliados en el campo popular. Ese es el problema.

Pregunta: ¿Cómo estos procesos y métodos de desarticulación del discurso popular y de la razón, relacionados con los estallidos, terminan provocando políticas identitarias y diferencias dentro de la misma población? Comienza a haber pleitos y los puntos comunes, que muchas veces son económicos, como la explotación, el trabajo y la pobreza, pasan a segundo plano. Entonces, ¿cómo estos métodos discursivos de la derecha para desarmar las demandas populares acaban enfriando y desarticulando políticamente todo?

Claudia Zapata: Sobre el tema de la desarticulación de la razón de los estallidos, como tú lo llamaste, dijiste una cosa que a mí efectivamente me parece preocupante y que tiene que ver también con cierta estrategia de dividirnos, porque esto de que los temas identitarios dividen a la ciudadanía y que hace que los temas económicos y sociales pasen a segundo plano, me parece discutible, pero precisamente desde los mismos sectores por la transformación fuimos poco eficientes en discutir eso. Por ejemplo, las temáticas de derechos de los pueblos indígenas no se entienden sin la redistribución del ingreso económico, no se entienden sin la descentralización territorial y la descentralización de la toma de decisiones políticas. Y, además, otra cosa que se nos olvida acá en Chile, cuando están echándole la culpa a los constituyentes indígenas y a las feministas, es que tanto indígenas como feministas tomaron la estrategia de estar presentes en todas las comisiones de la Convención y no trabajaron solamente para aprobar artículos relacionados con sus causas. Hay una perspectiva transversal allí, creo yo. Si los movimientos hubieran sido identitarios o culturalistas, no hubieran sido un problema, especialmente si se tratara de movimientos indígenas. Si se hubieran centrado exclusivamente en derechos

culturales, eso no habría molestado a nadie. El tema es que tocaba la distribución del territorio, de recursos económicos y del poder político, precisamente por no estar restringidos a lo identitario, eso fue lo que causó el escozor.

Pregunta: Me gustaría saber el papel –tanto dentro como fuera de las instituciones, así como dentro de las organizaciones políticas tradicionales de izquierda–, que desempeña la educación popular. ¿Cuál es su papel en términos de convertirse en una estrategia para los grupos políticos? Porque yo creo que, a través de la educación popular, su conexión con la teología de la Liberación y su contexto de la liberación como filosofía, juega un papel importante en el debate sobre la relación entre lo particular y lo general, los sujetos y los colectivos. ¿Qué papel desempeña principalmente en Chile, donde Freire publicó su *Pedagogía del Oprimido*?

Claudia Zapata: Yo te diría que, en cuanto al método y al tema de la conversación, no lo veo tan presente. Puedo estar equivocada, pero no lo percibo tan presente en este momento. Sin embargo, lo veo como una práctica presente en ciertos círculos. Por ejemplo, cuando me llaman para participar en espacios culturales o activistas, si me llaman, voy sin dudar, porque hay una gran necesidad de autoformación. Entonces, para mí también es una oportunidad de aprendizaje: ¿qué están discutiendo?, ¿qué están leyendo en los espacios de las organizaciones sociales?, ¿qué temas se abordan en sus talleres de lectura? A veces me invitan a conversar sobre un tema específico y comparto lo que sé, lo que observamos y cómo podemos abordarlo juntos. Hay una actividad muy intensa en estos espacios de autoformación. He observado esto tanto en los espacios feministas como en los del movimiento indígena, así como en los partidos políticos. Existe una necesidad de informarse y aprender, una curiosidad por entender hacia dónde se dirigen los desarrollos teóricos y políticos en ciertas áreas, reconociendo que puede haber deficiencias en ese conocimiento.

Pregunta: ¿Cuándo o cuál acto marca el inicio de un estallido social o determina que estamos ante ello, y qué diferencia existe entre una movilización, manifestación y el estallido?

Claudia Zapata: Yo creo que llamamos estallido a una gran explosión y yo creo que ocurrió, no digo que eso esté errado. El tema es que la continuidad y la envergadura lo hizo insuficiente y por eso algunos preferimos hablar de revuelta popular, también para rescatar acervos teóricos, de larga data en el campo de la izquierda. Ahora, respecto a cuándo empieza y cuándo termina. Para nosotros fue súper evidente que inició –con sus antecedentes entre todo este ciclo de conflictividad– el 19 de octubre; es un consenso que nadie puede discutir. El 19 de octubre del 2019 fue un gran estallido que rápidamente pasó a ser una revuelta popular. Ahora, si el ciclo está cerrado o no, no lo sé. Eso no tenemos cómo intuirlo. No tenemos cómo saber si una nueva revuelta popular de estas características va a ocurrir en un año más, en tres años más, en cincuenta años o nunca más. Eso es imposible. Yo soy historiadora, y los historiadores somos bastante malos para predecir el futuro, cuando lo hacemos nos va muy mal. Así que no me voy a meter en ese terreno. Pero sí me preocupa la construcción de memorias populares que nos puedan servir como herramienta por si eso se produce alguna vez, porque había temas en los que no operó el acumulado histórico y en otros sí. Entonces, si esto se cerró o no, tal vez se cerró un camino constituyente popular, pero a lo mejor no se ha cerrado la informalidad y una nueva forma en que esto se exprese. El problema es que, si no aprendemos a encauzarlo de manera emancipadora, vamos a seguir acumulando muertos y no necesariamente transformaciones reales. Esa es mi preocupación real.

Pregunta: ¿Los destrozos y perjuicios a bienes o propiedades son un componente elemental o convergente en un estadillo social?

Claudia Zapata: Sobre si los destrozos son inherentes o no a un estallido. Voy a decirlo sin una perspectiva moralista, que también a veces pesa bastante en estos debates. Para mí, la violencia política es un proceso histórico. La violencia política popular la tengo que entender como lo que le queda a los desempoderados para manifestarse. Había un debate en torno a cómo se expresó esto. La primera discusión era “no es la forma, las cosas no se hacen así. Si usted quiere pedir algo, venga, tóquenos la puerta o mándenos una carta”. Bueno, ya sabemos que eso es ilusorio, que no funciona. Es terrible porque los que viven el mayor costo de esa violencia política popular son los propios sectores populares. Porque a ti te reprimen, te matan, te mutilan. La cantidad de mutilados oculares en Chile hasta el día de hoy es terrible. En fin, me parece que la violencia política hay que entenderla como un elemento constitutivo o como una parte del repertorio posible de los sectores desempoderados. Así lo entiendo yo. Y además un tema que no hemos tocado, me parece notable cómo se repitieron en esta coyuntura los actos de iconoclasia. Esta palabra puede sonar un poco rebuscada, pero se refiere a intervenir la estatuaría y la esfera pública. Es parte de ese repertorio de acción directa.

Pregunta: ¿Cómo explica el hecho de que el rechazo a la propuesta constitucional alcanzó entre 70 % y 80 % en las zonas mapuches del país?

Claudia Zapata: Es un tema complejo que ha servido también para descalificar las demandas del movimiento indígena, porque se llega a decir “los mapuche votan por la derecha siempre”. Pero ¿quiénes son realmente los mapuches? Estos cálculos generalizados no tienen en cuenta la diversidad de la población mapuche. Pues bien, la gran mayoría de la población mapuche no vive en esos territorios, vive en las ciudades. Y en esas comunidades de mayoría mapuche, efectivamente un gran porcentaje votó por el rechazo. Pero también se vota generalmente allí por la derecha, pues pareciera

pervivir cierta memoria de negociación con una antigua derecha hacendal. Se trata de esa antigua derecha donde los patrones de la hacienda se sabían tu nombre e iban al bautizo de tu hijo. Una derecha con la que el pueblo mapuche consiguió ciertas conquistas, y no necesariamente con los gobiernos posteriores. Esto puede ayudar a entender la votación de algunos sectores, pero no representa el voto mapuche en su totalidad. Para nada. Insisto, creo que el 70 % vive en las ciudades, así que hay que tener cuidado con esos juicios.

Colombia

Axel Rojas Martínez

■ Doi: 10.54871/ca25es4b

Primer interrogante: ¿Qué procesos sociopolíticos convergen en la formación de las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno de los Estados nacionales y en los procesos comunitarios instituyentes, teniendo como tres vertientes más importantes las políticas de identidad, las políticas de reconocimiento y las políticas de pueblo o pueblos en movimiento?

Axel Rojas Martínez: Para comenzar, creo que, en el caso colombiano, como en todos los casos nacionales, enfrentamos dificultades particulares para hacer un análisis como el que se nos propone. Quiero mencionar dos asuntos para comenzar. El primero, que ya fue tocado inicialmente por las colegas que me precedieron, es el uso de la noción misma de “estallido” para pensar estos fenómenos, estos procesos de movilización, estas dinámicas políticas recientes, en el contexto latinoamericano, por varias razones. Esta metáfora del estallido muchas veces da la idea de algo que con mucha fuerza aparece en un momento determinado y luego pareciera ser que se reduce a cenizas o que, digamos, podría dejar incluso destrucción. No sabemos cómo esa fuerza transformadora repercute hacia otros fenómenos nuevos y cuáles son sus incidencias hacia el futuro. En Colombia, de manera más común, se le llama estallido no a las

movilizaciones de 2018 y 2019, sino a las de 2021, lo cual muestra algunas de las particularidades del caso colombiano.

Lo segundo está relacionado con lo anterior. Estos fenómenos, esta emergencia de procesos de movilización, si se quiere llamar de otra manera, nos obliga a pensar en coyunturas que normalmente son de más larga duración. Y entonces también tenemos la dificultad de establecer los criterios con los que fijaremos la coyuntura. Yo voy a empezar un poco por el presente y voy a tratar de ir hacia una coyuntura de mediano plazo ubicada en los noventa, para mirar lo que está sucediendo o por lo menos la interpretación que puedo hacer en este momento de lo que ha sucedido en el caso colombiano.

Hace tres días, en el marco de la conmemoración del 1 de mayo, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo un saludo a la primera línea, que es, digamos, la manera como se conoce a algunos de los sectores movilizados en el contexto de la movilización de 2021, que tiene que ver con grupos mayoritariamente de jóvenes, pero no exclusivamente, que se organizaron, en términos logísticos y en términos políticos, para responder sobre todo a la fuerte represión estatal que se dio a la movilización de ese momento. Las primeras líneas fueron rápidamente estigmatizadas, señaladas de ser infiltradas o conformadas por grupos armados, resultados de parte de las guerrillas o resultados de quienes no se acogieron a los procesos de negociación en el acuerdo de paz de 2016. Se puede decir que se utilizaron como un signifiante bastante flexible para estigmatizar, a su vez, otras fuerzas u otras posturas políticas.

Lo que quiero señalar es que uno de los efectos de estos estallidos de 2021 sigue siendo el debate sobre el lugar de la movilización ocurrida en el contexto actual, en el que Colombia tiene por primera vez un gobierno al que se llama de izquierda. Insisto en esta precisión de que “se llama de izquierda”, ya que gran parte del proyecto político de Gustavo Petro, como él mismo ha expresado en algunas ocasiones, se inclina más hacia un modelo de capitalismo progresista o algo similar, que está más cerca de las ideas liberales de la segunda mitad del siglo XX, que de ser estrictamente un proyecto de

izquierda. Podríamos decir que es la izquierda realmente existente en un contexto como el colombiano.

Ese es el momento en el que estamos, un momento en el que, además, la semana anterior el gobierno –o el presidente– dio por rota la coalición que es el Pacto Histórico que lo llevó a la presidencia, y de la cual participaron varios partidos políticos más tradicionales. Y además de eso muchos de ellos cercanos al centro, pero algunos de ellos bastante de derecha, como el Partido Conservador, uno de los partidos más tradicionales y más de derecha en la historia política nacional. Estamos en un momento muy particular en el que la política se centra en la discusión sobre la participación y la representación electoral. El nuevo gobierno, considerado de izquierda, está a punto de cumplir un año, y el estallido social es un elemento que se utiliza para legitimar su llegada al poder. Se están buscando políticas que puedan ser gestionadas ante el Congreso de la República e incorporadas en el Plan de Desarrollo.

A partir de esta breve descripción del contexto actual, quiero mencionar que, a mi juicio, para entender lo que sucedió en 2021, es necesario ir más atrás. En primer lugar, en 2021, y casi durante un año, esto es muy interesante, hubo un conjunto de movilizaciones en la calle, algunas de ellas, en vías, entre ciudades aquí llamadas intermunicipales o interdepartamentales. Una serie de movilizaciones numerosas que pocas veces, o tal vez como nunca, habían sucedido en el país. Esas movilizaciones llegaron a ser cerca de mil movilizaciones en la mayor parte de los departamentos y municipios del país, y duraron casi un año. Algunas de ellas fueron movilizaciones que duraban uno o dos días; otras llevaron a la conformación de lo que se llamó “Puntos de resistencia”, una especie de barricadas localizadas en ciertos sectores de la ciudad, teniendo en Cali una de las expresiones más radicales y fuertes. Entonces, ¿qué características tenían estas movilizaciones? En primer lugar, fueron numerosas y masivas. Unas movilizaciones con una muy alta participación de jóvenes. Esto tiene un antecedente que mencionaré después, relacionado con las movilizaciones de 2018

y 2019 en Colombia que fueron fundamentalmente movilizaciones estudiantiles, no exclusivamente, pero las más masivas y notorias sí lo fueron.

Aunque el proceso de movilización ha estado presente a lo largo de la historia, al menos de parte del movimiento indígena desde finales de los años noventa hasta la actualidad, la participación de los jóvenes está vinculada a esta juventud que ya se movilizó en 2018 y 2019. Esta juventud, principalmente universitaria, estaba haciendo demandas relacionadas mayormente con la educación superior, pero también atrajo a otros sectores de jóvenes urbanos, especialmente a aquellos marginados y empobrecidos, de los cuales gran parte no estaban vinculados a organizaciones formales.

Entonces, esto presentó un gran desafío para la movilización: la posibilidad de construir un “nosotros”, ya que este no estaba predefinido. Se trataba de una movilización en la que no todos necesariamente estaban representados por organizaciones establecidas, sino que en algunos casos eran agrupaciones ya existentes, como organizaciones sociales, comunitarias, colectivos de género, de derechos humanos, entre otros. También por organizaciones campesinas, organizaciones sindicales y organizaciones indígenas. Pero un sector muy amplio de quienes se movilaron no pertenecía formalmente a ninguna de estas organizaciones. En muchos casos hubo intentos de construir un “nosotros”, pero no siempre fue claro que se lograra. Otro desafío era la posibilidad de construir algún tipo de forma. En este caso, pensamos en la forma del partido como la opción más común. Sin embargo, considerábamos la necesidad de una forma que pudiera aglutinar a todas las fuerzas en movimiento, tanto aquellas ya organizadas alrededor de una estructura previa como aquellas que no lo estaban.

En ese contexto fue fundamental algo que llama mucho la atención y que considero solamente se puede entender bien si miramos el contexto de más larga duración. Se trata de los intentos y avances significativos de hegemonización de la Minga Indígena en todo este proceso. El papel protagónico que tuvieron las organizaciones

indígenas, particularmente el Consejo Regional Indígena del Cauca, en liderar algunos de los procesos de movilización, fue contundente. Tanto así que generó otra reacción muy fuerte dentro del contexto de movilización del año 2021, que fue una reacción armada muy fuerte por parte de civiles que se identificaron a sí mismos como “gente de bien”, es decir, personas de los estratos medios y altos de la población.

Particularmente en ciudades como Cali, estos grupos salieron a la calle armados, muchas veces en asociación con la policía, para reprimir las manifestaciones. Entonces, digamos, eso es lo que se da en 2021, una movilización masiva, no siempre compuesta por organizaciones ya preexistentes, con algunos intentos de liderazgo y de hegemonización por parte de algunos de los actores allí participantes, en ese caso con una visibilidad importante de la Minga Indígena, pero con muchas dificultades para construir un discurso común.

Y eso representa uno de los desafíos para comprender lo que ocurrió en 2021: las movilizaciones. Constantemente se mencionaban nuevas protestas y manifestaciones. Pero no siempre estaba claro cuál era el propósito de esa indignación y esa movilización constante. Entonces, al reflexionar sobre esto, considero necesario abordar varios elementos sobre cómo se desarrolló la coyuntura. La fuerte reacción de la derecha estigmatizó las movilizaciones, tildándolas de estar infiltradas por la guerrilla o por nuevos grupos armados. Esta respuesta armada creó una imagen del enemigo interno personificado en el “vándalo”, un joven anónimo que actuaba colectivamente en forma de hordas. Este lenguaje, aunque no lo considero el más adecuado, reflejaba la narrativa predominante en ese momento, en la que se atacaba a representantes del Estado, policía y funcionarios públicos. Se manifestó también en la demolición de monumentos, estatuas y otros símbolos materiales que representaban el proyecto hegemónico de una burguesía tradicional. Esto incluía héroes coloniales y figuras políticas de la época republicana, entre otros.

Durante este período en 2021, se acercaba el final del mandato presidencial de Iván Duque, que culminaría en 2022. Duque representó el último presidente de un período de giro hacia la derecha radical en Colombia, conocido como el proyecto uribista. Esta radicalización de la derecha no comenzó en 2002 con el gobierno de Uribe, sino que tuvo sus raíces en expresiones armadas como el paramilitarismo desde los años ochenta. Sin embargo, alcanzó su punto álgido con la presidencia de Uribe, que abarcó desde 2002 hasta 2010. Luego viene un gobierno de uno de sus aliados históricos o de sus principales figuras políticas que fue Juan Manuel Santos (2010-2018), pero que orienta, digamos, su gobierno en una dirección distinta, que lleva al acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Este giro a la derecha del uribismo es un asunto muy interesante porque muestra cómo se construyen las disputas en torno a varios asuntos. Uno de ellos es el papel del conflicto político armado en Colombia desde los años sesenta, que tuvo una característica particular a partir de 1991 con la hegemonía o el protagonismo destacado de uno de los grupos armados, las FARC. Estas fuerzas guerrilleras fueron el principal referente y el enemigo interno principal, según el discurso de la extrema derecha liderada por Uribe.

El año 1991 marcó una serie de eventos significativos, entre ellos, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que condujo a un cambio constitucional. Además, varios grupos armados activos en ese momento firmaron un acuerdo de paz, lo que resultó en la predominancia de dos grupos principales: las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Las FARC emergieron como protagonistas en las disputas políticas armadas. Esta situación plantea una aparente paradoja. Por un lado, se llevó a cabo un proceso constitucional profundamente democrático, al menos en teoría, con la convocatoria de la Asamblea Constituyente en 1991. Por otro lado, el gobierno de ese entonces, encabezado por César Gaviria, adoptó políticas profundamente neoliberales, transformando el accionar del Estado y sentando las bases para una reestructuración de la

institucionalidad estatal. Así, mientras se observaba un giro hacia la derecha en el ámbito económico, simultáneamente se promovía un giro hacia la democracia en lo político.

A partir de la nueva Constitución, se observa un giro hacia la derecha radical con el gobierno de Gaviria. La presencia de las FARC es central, porque le permite a esta derecha radical respaldar este discurso profundamente antiizquierda, que a largo plazo comienza a incorporar algunos referentes latinoamericanos como Venezuela, como parte de esa amenaza, no solo a nivel interno sino también externo. Se combinan diversos elementos. En 2001, se observa una profundización del modelo extractivista, que gana fuerza en la segunda década del siglo XXI. Para 2011, cuando se inician las negociaciones de paz con las FARC, parece ser un alivio para ese proceso de radicalización de derecha. En 2016, se firma el acuerdo de paz, y el gobierno de Juan Manuel Santos propone un plebiscito para darle mayor legitimidad a los acuerdos firmados con el grupo guerrillero. El resultado es un desenlace que no se esperaba ni siquiera la derecha que estaba promoviendo el “No” en el plebiscito.

Después de sesenta años de conflicto político armado con las FARC, que en ese momento se consideraba un actor militar muy fuerte, la respuesta de la ciudadanía es no avalar los acuerdos alcanzados en La Habana. A partir de ese momento, en 2016, parece fortalecerse simultáneamente un proyecto electoral de izquierda por primera vez en el país. Lo que uno podría pensar es que el fin de ese enemigo interno, entendido como un grupo armado ilegal asociado tradicionalmente con las luchas de izquierda y que permite la estigmatización de organizaciones sociales que se apartan del centro y de la derecha, abre el campo político. Es decir, la ausencia de las FARC, a pesar del triunfo del “No” en el plebiscito, abre el campo político, permite incorporar ciertas discusiones e incluso permite que se constituyan nuevas subjetividades políticas en torno al reclamo de la izquierda.

Petro no se declara claramente de izquierda o extrema izquierda; nunca se presenta como comunista y rara vez habla de socialismo.

Es más bien un liberal. Sin embargo, dentro del espectro político colombiano, se le considera de izquierda, casi extrema izquierda. Entonces, al abrirse este escenario, también surge un nuevo terreno de discusión. Cuando comienza el gobierno de Duque en 2018, hay condiciones que parecen ofrecer un escenario pesimista. Sin embargo, en el primer año de su mandato, surge una gran movilización estudiantil que logra una adición presupuestal en el Plan de Desarrollo para la Educación Superior. Posteriormente, en 2019, otra gran movilización estudiantil reafirma estas luchas. Esto, antes de la pandemia, genera una renovación dentro de la cultura política nacional. El escenario de la calle, especialmente la lucha urbana, vuelve a ser un escenario posible y asociado a reclamos ubicados en el espectro de la izquierda.

A esto habría que sumar el proceso de crecimiento de una iniciativa indígena que es la minga indígena, que se ha venido transformando como un intento de articulación que tuvo otras iniciativas como el Congreso de los Pueblos, pero que empieza a plantearse ya no solo como minga indígena, sino como minga indígena, social y popular o minga indígena-comunitaria. Lo interesante es que se plantea como un intento de articulación de diferentes sectores sociales en proceso de lucha y que, a mi juicio, ayuda mucho a entender lo que sucedió con el estallido de 2021. Y es que la minga había logrado trasladar la ruralidad indígena a las ciudades a través de diferentes marchas que empezaron a comienzos de 2000 y que se ubicaron en las universidades públicas, sobre todo en Bogotá y Cali, así como en otros lugares del país.

La minga abrió espacios para la discusión con estudiantes y otros sectores, generando condiciones para una importante politización en medio de un contexto profundamente represivo. También generó algunos elementos discursivos. Luego, en el estallido de 2021, emergieron ciertas formas discursivas que incluyen el reclamo por la defensa del territorio, de la vida y una abierta oposición a ciertas posturas de derecha. Incluso se incorporaron algunos elementos de género que no habían sido centrales en las

movilizaciones indígenas históricamente. Creo que estos elementos son fundamentales para entender lo que sucedió en el año 2021, con estos jóvenes urbanos que salieron a la calle. Aunque no pertenecen a la movilización indígena, han aprendido y se han forjado en una cultura política particular, en parte gracias a esas movilizaciones indígenas que ganaron legitimidad después de 1991, con ese giro multiculturalista.

Segundo interrogante: ¿Cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras? ¿Cuáles se pueden encontrar desde dentro y contra el Estado?

Axel Rojas Martínez: Dado que el panorama es tan heterogéneo, es difícil abarcar esa complejidad. Pero digamos que, si uno toma la pregunta y se ubica en esta posibilidad de lucha dentro de y desde el Estado, pues claramente sería la conformación de un proyecto político, que es esta coalición que en 2022 llega como Pacto Histórico y que lleva a la presidencia a Gustavo Petro, y que tiene unos antecedentes desde 2011 aproximadamente. Allí hay un ejemplo claro que logra convocar a una serie de organismos y organizaciones electorales pequeñas, medianas y grandes, unas más cerca del espectro de la izquierda, otras más conservadoras, algunas de centro. Eso es interesante. Se logra aglutinar allí la construcción de una hegemonía en el plano electoral que lleva a la Presidencia a este candidato que se dice de izquierda. Esto es bastante complejo, pero ayuda a responder rápidamente a la pregunta.

Respecto a lo segundo, hay un conjunto de actores que se debaten entre la participación más institucionalizada de la forma partido y otras formas más autónomas de participación. Ahí tenemos el caso de los feminismos, muy heterogéneos y diversos, pero también con mucha fuerza. Hay unas actoras importantes a las que hay que prestarles mucha atención.

Luego están las movilizaciones estudiantiles, que yo creo que son un escenario interesante que no se restringe a los intereses

propiamente del ámbito escolarizado y de la educación, sino que están más conectadas con fuerzas sociales por fuera de la universidad. Eso puede ser tanto bueno como malo. Así lo moralizamos un poco y es en el sentido de que no siempre hay un debate fuerte sobre el papel de la educación y su lugar en el ejercicio de la política o un horizonte crítico desde allí o cosas por el estilo. Pero digamos que es una realidad en términos de cómo veo yo lo que está sucediendo.

Otro fenómeno que es mucho más difícil de analizar porque podría llamarse como una apuesta por la autonomía, es el caso indígena y afrodescendiente, que en alguna medida se viene gestando también dentro de lo campesino por construir formas de gobierno territorializadas. En el caso indígena, con un antecedente que son los territorios de resguardo, que son tierras que fueron delimitadas y asignadas desde la época colonial, al frente de las cuales se encuentra un cabildo indígena que es una figura de autoridad tradicional. A partir de 1991, con el cambio constitucional, estas autoridades indígenas tienen reconocimiento jurídico, constitucional y legal. Reciben recursos del presupuesto nacional, administran justicia, administran territorio y ejercen control sobre el territorio, de tal manera que en la práctica son gobierno. Son una forma de autonomía con una institucionalidad que podríamos llamar de características estatales, una nueva forma de estatalidad si se quiere. Sin embargo, todavía está en proceso y, a veces, encarna esta contradicción de estar en la calle como movimiento social y, al mismo tiempo, ser Estado.

En el caso particular de las poblaciones afrodescendientes del pueblo negro, el tratamiento constitucional y jurídico es distinto, no tiene los mismos alcances, por lo cual no hay territorios legalmente reconocidos, excepto en una región del país. El resto es muy difícil que la ley permita que esto se haga. Además, no reciben recursos del Estado central, por lo que su ejercicio de gobierno tiene características distintas y más limitadas. Por otro lado, en el caso campesino, siguiendo este molde étnico, hay un reclamo en proceso que ha venido avanzando.

Esta heterogeneidad, cuando se junta, constituye una fuerza popular muy importante. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrenta es que no logra siempre construir un horizonte común. Estamos en un momento en el que uno podría arriesgarse y decir que es posible que estemos en marcha hacia la construcción de un nuevo sujeto popular que aglutine a todas estas fuerzas. Pero también es muy probable que al final haya una profunda fragmentación. Entonces, mejor no hacer futurología con esto.

Tercer interrogante: ¿Bajo qué modos se conforman las agendas geopolíticas en las comunidades políticas de pertenencia, teniendo en cuenta, por ejemplo, el anticapitalismo que cuestiona el orden internacional, nacional y local, la lucha contra el enfoque estado-céntrico desde movimientos sociales politizados, la democracia y los procesos electorales en torno de las comunidades políticas instituidas? Se refiere a las tensiones entre gobiernos progresistas o que se denominan progresistas y la izquierda social, que podría traducirse como lo político instituido y lo social instituyente.

Axel Rojas Martínez: He pensado mucho en esta pregunta porque me parece muy difícil. A riesgo de parecer o de ser políticamente incorrecto, yo creo que la mayor parte de las luchas en Colombia en este momento podrían ser pensadas como luchas liberales y estadocéntricas. Dicho esto, habría que entender que, en el contexto también nacional, ese es el espectro político de izquierda. Las luchas liberales en Colombia son consideradas de izquierda y en algunos casos incluso radicales. Hay que entender que se producen en esa particular relación de fuerzas y con esos significados. Ese es un asunto fundamental.

¿Cómo se articulan estas luchas? A nivel de lo indígena, para retomar algunos de los sujetos ya mencionados, encontramos que hay organizaciones regionales y nacionales, y que las organizaciones regionales, a su vez, tienen subdivisiones que suelen ser zonales. Estas organizaciones tienen un elemento muy interesante, y es

que son asociaciones de autoridades tradicionales, una figura híbrida que, además de eso, se articula fuertemente a los escenarios internacionales de organismos de derechos humanos, sobre todo del ámbito de Naciones Unidas y en redes transnacionales de organizaciones indígenas en el continente y a nivel global. Entonces, eso hace que a veces estos discursos vayan y vengan y que la forma como se configura a nivel nacional tenga unos componentes muy ligados a tradiciones históricas muy propias del contexto colombiano, como la figura del resguardo en términos territoriales y del cabildo en términos de autoridad, pero también al mismo tiempo ciertos discursos sobre calentamiento global y temas ambientales muy de la esfera global de discusión.

Digamos que en el caso indígena y para ir muy rápido en el caso, por ejemplo, también en los debates de género, hay una configuración de las luchas en redes globales, con un peso muy importante de las redes sociales y bastante heterogéneas por ahora. Es decir, no hay un movimiento unificado de género, sino un conjunto de luchas alrededor del género y las diversidades sexuales, etcétera. Pero con articulaciones todavía no del todo sólidas. Bueno, tampoco se sabe si buscan serlo, pero sí, todavía con pocas expresiones aglutinadoras a nivel nacional. Entonces, más bien hay una presencia transversal en relación con otros grupos, en proceso de movilización con otras luchas de otros sectores y en algunos casos luchas específicas planteadas desde el género. Yo creo que, en el caso, por ejemplo, del campesinado, yo veo, tal vez sea desconocimiento, menos articulaciones amplias a nivel internacional, aun cuando sí hay cada vez más intentos de aglutinar las fuerzas campesinas en organizaciones regionales y nacionales.

Ahora, en cuanto a cómo se piensa en términos de pueblo y su relación con la nación, creo que quien logra ese aglutinamiento o articulación sería principalmente el escenario político-electoral. En este caso, el Pacto Histórico ha desempeñado un papel importante como posibilidad de articular estas diversas fuerzas, manteniendo un escenario bastante plural. Sin embargo, hay una cuestión

metodológica que habría que abordar con cuidado, y aún no tengo suficientes elementos para llegar a una conclusión contundente. Se refiere a los discursos y retóricas con los que se constituyen estos procesos de movilización y organizaciones políticas y sociales, y cómo se traducen en prácticas concretas. Desde un punto de vista analítico, podemos entender que no siempre hay una correspondencia directa entre las retóricas y las prácticas políticas de estas fuerzas. Muchas de ellas se declaran contra el neoliberalismo y la globalización, pero en la mayoría de los casos, en la práctica, siguen adoptando posturas inscritas en el campo político que podríamos considerar como liberal o centrista. A pesar de que en el contexto colombiano esto pueda parecer ubicarlo en el extremo izquierdo.

Debate

Pregunta: Con toda esta creatividad, desde la movilización y la generación de estos espacios de pertenencia para no hablar así de identidades esencialistas, una pregunta muy específica: ¿qué tanto de lo que se fundó en términos de la Constituyente abrió el espacio de representación para indígenas? ¿En la actualidad, qué tanto se está conformando esta representación indígena y afrodescendiente? La presencia de Francia Márquez en el gobierno, ¿qué apelación o interpelación tiene frente a las comunidades políticas de pertenencia?

Axel Rojas Martínez: Es bastante interesante, porque fui al 91 para señalarlo como un marcador, un hito para pensar la coyuntura actual. Y es que la Constitución del 91 fue clave para transformar la posibilidad de participación política indígena. El movimiento indígena puede ubicarse mucho más atrás, la conformación de organizaciones contemporáneas inicia en 1971 con antecedentes en momentos históricos anteriores, hasta la colonia. Pero en 1971 comienza ese proceso de movilización y en el 91 se logra una

participación muy fuerte en la Asamblea Nacional Constituyente. Sobre todo, en términos efectivos, no tanto numéricos, pero sí en términos del espíritu de la Constitución que se plantea allí. Una cosa que garantiza la Constitución es el reconocimiento de las autoridades indígenas, es decir, de los cabildos como autoridades en sus territorios, les asigna recursos y permite un nuevo estatus que se venía ya reclamando por parte de algunos sectores, que era el de ser gobierno y poder hablar con el Gobierno nacional, con el Estado central, de gobierno a gobierno, de autoridad a autoridad, como se ha planteado. En ese sentido, los últimos treinta años, es decir, los posteriores a la Constitución del 91, transforman las posibilidades de participación y fortalecen el sujeto indígena y el imaginario, permean el imaginario político nacional.

Pienso que ese imaginario multiculturalista que se institucionalizó con la Constitución del 91 es fundamental en la política nacional. A partir de entonces, es importante tener en cuenta una cuestión: la población indígena en Colombia es más o menos del 3,5 %. Y el control territorial de ese 3,5 % de la población es de cerca del 25-30 % del territorio nacional. Entonces estamos hablando de un sujeto político que, si lo miramos numéricamente, parecería ser minoritario y por eso sería problemático pensarlo como minoría, porque no reconocería su peso político en el escenario nacional. Ha logrado en los últimos treinta años disputar la hegemonía en el escenario popular. La política popular en Colombia, en gran medida, está siendo hegemonizada por el movimiento indígena que ha logrado construir unos imaginarios, unas retóricas, unas demandas, incluso unas simbologías muy particulares que gozan de amplia legitimidad y que han empezado a ser acogidas por otros sectores políticos organizados. Entonces, creo que es un actor al que debemos tener en mente claramente.

Ahora, por otro lado, estamos hablando en este momento, pareciera paradójico porque quienes tienen una vicepresidenta son los pueblos negros de Colombia, los afrodescendientes. Entonces lo que pasa es que las formas de participación política en ambos casos

han sido distintas. Francia llega a ese lugar de la vicepresidencia por la vía de la participación electoral, en la cual todavía, a nivel nacional, es difícil encontrar una o lograr una amplia legitimidad, un amplio respaldo para los candidatos indígenas. Esto se debe a que, al mismo tiempo que tienen este protagonismo, siguen siendo profundamente estigmatizados como los responsables de prácticas políticas que gran parte de la población, incluidos algunos sectores populares, consideran como nocivas para sus intereses. Por ejemplo, los bloqueos de vías a veces dificultan el transporte, la comunicación, dificultan el abastecimiento de alimentos y otros servicios en las ciudades, etcétera. Entonces, hay una posición ambigua frente a las candidaturas indígenas que no logran encarnar un lugar de lo popular en el sentido electoral. En las luchas populares, el proceso de movilización ocurre de manera distinta y esto es algo que puedo decir aquí, pero de lo cual no tengo muchas más respuestas por el momento. Son dos procesos distintos.

La población indígena en Colombia es alrededor del 3,5 %. La población afrodescendiente está entre el diez y el 20 %, pero su participación política y su visibilidad en el escenario de lo popular es distinta y está más ligada a mecanismos tradicionales como la participación electoral. Entonces son dos tradiciones culturales, dos formas, digamos, de praxis o de cultura política diferentes. Esto tiene que ver con el hecho de que hayan ocupado dos lugares distintos en el diagrama racial de la sociedad colombiana y que están relacionados con las lógicas de la discriminación, el racismo y otras expresiones de subalternización. Para cerrar, considero que es necesario rastrear ambos sectores de manera comparativa, ya que normalmente realizamos ejercicios o estudios centrados en la población indígena o afrodescendiente, o a veces borramos su heterogeneidad. Esto también es un problema al agruparlos bajo la misma categoría étnica y suponer que, debido a su clasificación jurídica en el Estado nacional colombiano, son idénticos. Sin embargo, ninguna de estas suposiciones es correcta. Por lo tanto, sigue

siendo necesario explorar y comprender qué ocurre en ambos casos.

Pregunta: ¿Cómo evalúa usted las prácticas de organización comunitaria de base en la población indígena y en la afrodescendiente? Ya nos ha hablado de la diferencia en la participación electoral. La impresión que nos ha dado y por la vitalidad que tiene en este decenio el movimiento afrodescendiente, es que había un alto nivel organizativo en los sectores afrodescendientes, que, aunque quizás no se expresa tanto de otras maneras, al menos ahí existía. Entonces, quisiera saber si eso es cierto o es una percepción incorrecta.

Axel Rojas Martínez: Creo que estamos en un momento de especial fortalecimiento de las luchas afrodescendientes o del pueblo negro o los pueblos negros, como están reclamando algunos sectores hoy en día ser reconocidos. Tienen una expresión fuerte en lo electoral y avanzan en los procesos más de organización de base, de manera diferencial. Esto tiene que ver con factores históricos y quiero hacer nuevamente un puente con lo indígena. Históricamente, la población indígena fue sujeto de atención jurídica desde el mismo comienzo del proceso de colonización y ha sido objeto de atención académica desde hace mucho tiempo, con institucionalidades específicas como el indigenismo interamericano a partir de los años cuarenta y, en el caso colombiano, con recursos económicos del Estado nacional a partir de los años noventa.

Lo que quiero decir es que esa fortaleza de este sector de la población no se ha construido en aislamiento, sino que se ha construido en un entramado institucional de luchas y acompañamientos académicos, de producción de una intelectualidad propia y de movilización bastante compleja. En el caso de la población afrodescendiente, hay una cuestión que no se puede olvidar, y es que en Colombia la abolición jurídica de la esclavitud es efectiva a partir del 1 de enero de 1852, es decir, hace apenas un poco más de 170 años. Eso implica que, a partir de ese momento, la población afro

puede empezar a acumular capitales en términos económicos, de propiedad de la tierra, de acceso a la educación, de participación política, lo que implica hacer en un periodo de tiempo, mucho más corto, una larga carrera para posicionar un proyecto político propio en condiciones de libertad. No es que antes no hubiera expresiones de libertad, que las hubo desde el mismo momento de la trata de esclavos, sino en el sentido de construir un proyecto político desde unos intereses propios en una sociedad profundamente racista y excluyente.

Entonces, eso implica la vinculación a partidos políticos a comienzos del siglo XX, la compra y el acceso a las tierras a lo largo de lo que fue la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, pero también enfrentando profundos procesos de despojo en regiones como la costa continental del Caribe colombiano o en los valles Interandinos, como en el caso del valle del río Cauca. Entonces, en esas condiciones, las posibilidades de construir un proyecto político propio han sido bastante complejas y es allí donde empieza a gestarse en los años ochenta de manera muy fuerte una lucha antirracista que permite, en los años noventa, apuntalar un nuevo proyecto en el que se hace un reclamo de reconocimiento como sujeto étnico.

Y esto no es común en todos los países de la región. A partir de 1991, y luego reglamentado en 1993 con la Ley 70, la población afrodescendiente es reconocida como grupo étnico, aunque con muchas limitaciones. La forma en que se diseñó la ley solo permite que un sector de la población haga reclamos de estos derechos de manera efectiva, mientras que para el otro sector es mucho más difícil. Pero sin entrar en estos detalles jurídicos, lo interesante es que la posibilidad de construir procesos de organización de base ha sido muy compleja, pasando por diferentes momentos y actualmente se encuentra en un proceso de organización alrededor de lo étnico, después de este giro multicultural de los noventa. Esto significa que es una lucha con menos tradición en el tiempo y menos recursos y acompañamiento por parte de instituciones estatales y académicas.

Es difícil establecer una comparación con lo que quería decir ahora. Aun así, en esas condiciones, hay una vicepresidenta negra, lo que muestra que, a pesar de la adversidad, se han logrado consolidar liderazgos y procesos de movilización importantes.

Pregunta: Quiero referirme a un tema muy específico que es el tema de la violencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se abordó este tema en Colombia? Recuerdo una carta donde los estudiantes universitarios condenaban absolutamente la violencia y rechazaban su uso como instrumento de transformación política. Mientras veía esta diferencia con Chile, donde se estaba justificando la violencia, los estudiantes colombianos estaban tomando distancia y rechazando esa vía. Sin embargo, al considerar el contexto colombiano, uno se pregunta de qué estado de derecho estamos hablando, donde el monopolio fáctico y exclusivo de la violencia por parte del Estado no existe. Quizás estoy siendo un poco exagerado, pero en Chile sí existe, al menos hasta el día de hoy, lo que lo hace más problemático. ¿Cómo se abordó el tema de la violencia en Colombia cuando comenzó el estallido social?

Axel Rojas Martínez: Es un tema que fue discutido en algunas ocasiones; en muchos casos, se usó la violencia como una forma de estigmatizar estas movilizaciones populares que ocurrieron en ese momento. La figura del vándalo y la amenaza hacia las instituciones del Estado, las autoridades e incluso la propiedad privada, se convirtió en un eje central del discurso de la derecha, buscando deslegitimar la movilización. Ese fue un elemento central. También hubo reclamos de defensores de derechos humanos y de muchas organizaciones y personas en proceso de movilización en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. Hubo desapariciones, muertes y heridos a manos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el ESMAD, que es el escuadrón antidisturbios de la Policía. Eso también fue otro elemento central. Entonces, aparece el tema, que es el ejercicio de la violencia por parte de la

población movilizaba, y en algunos casos, fue objeto de discusión. Porque hubo sectores que argumentaron que no podíamos reclamar el derecho a la vida y al libre ejercicio de la movilización y el respeto de los derechos humanos si nosotros mismos no éramos capaces de respetar ese derecho a la vida. Sin embargo, así como hubo estas posturas, también hubo casos en los que se planteó que la violencia era el último recurso para quienes se estaban movilizaba frente al uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado. Eso también fue parte de las discusiones.

No creo que se haya logrado posicionar del todo y establecer un cierto consenso en relación con el respeto a la vida, tristemente. Es decir, pienso que habría sido importante y se habrían evitado muchas muertes, heridos y desapariciones de personas, tanto de manifestantes como de quienes representan a la institucionalidad del Estado. Se podrían haber evitado si hubiera existido un cierto acuerdo en torno al respeto y protección de la vida. Sin embargo, eso no sucedió. Fue un tema de disputa constante, ya que se observaron numerosos ejemplos de uso excesivo de la fuerza, principalmente por parte del Estado. Esto es especialmente preocupante, dado que se espera que el Estado garantice la institucionalidad, el orden y el respeto a los derechos. Sin embargo, eso no significa que, en mi opinión, estén justificadas otras formas de violencia, como las que se produjeron en el contexto de las movilizaciones en muchos casos. Pero eso es lo que puedo decir: no hubo un consenso al respecto.

Pregunta: ¿Podrías abundar un poco más sobre el rol de las guardias de la Guardia Indígena cimarrona y campesina como una expresión de control territorial muy concreta para interpretar la conciencia autonómica en Colombia de tales comunidades?

Axel Rojas Martínez: Es importante mencionar que las guardias son cuerpos civiles no armados que actúan en defensa de las poblaciones, ya sean indígenas, campesinas o afro. Inicialmente, la

primera vez que aparece una figura similar, o al menos según nuestro conocimiento hasta ahora, fue en los años setenta en el contexto de las movilizaciones campesinas. Luego, se conforma con base en ese modelo dentro de las organizaciones indígenas, unos grupos de alguaciles, una figura dentro del cabildo indígena. Esta estructura de gobierno indígena se encargaba de apoyar procesos de organización, incluyendo asuntos logísticos, pero también algunos asuntos de seguridad.

Sin embargo, debo aclarar que, para algunas personas, esto podría desconocer la ancestralidad de las formas de defensa del territorio. No quiero entrar en ese terreno, pero sí debo señalar que, aunque han existido múltiples formas de defensa del territorio, la forma de las guardias es una forma contemporánea que surge en los setenta. Me refiero no a todas las luchas de defensa territorial, sino a las luchas de defensa territorial bajo el formato de guardia. A finales de los noventa y comienzos de los 2000, se institucionaliza la Guardia Indígena en un contexto en el que la dinámica del conflicto armado estaba generando muchas muertes y agresiones hacia poblaciones indígenas. Entonces, las guardias se constituyen como este cuerpo que busca defender a la población civil, en este caso indígena, frente a los actores armados y, sobre todo, garantizar aspectos como la circulación por los territorios indígenas, evitar la presencia de actores armados, y actuar frente a algunas acciones de agresión, además de acompañar procesos de movilización.

La Guardia tiene un lugar muy importante, no solo en términos del control territorial *in situ* en los territorios indígenas, sino también en las dinámicas de movilización. Es un cuerpo que acompaña las movilizaciones y que defiende a la población y enfrenta a otros actores que intentan agredir en esos espacios. Más adelante, hacia 2013, si ahora no me falla la memoria, hay una primera experiencia de organización afro que se crea en el palenque de San Basilio, un pueblo que conserva una de las dos lenguas criollas, la única basada en lenguas africanas en Colombia, ubicado al norte del país. Este pueblo descende de un antiguo palenque de la época colonial.

Se creó una guardia también con una dinámica similar de protección del territorio en un contexto de violencia ligada al conflicto armado. Posteriormente, se fortalecen las guardias campesinas que fueron las primeras que hubo en términos formales en los años setenta. Empiezan a retomarse dentro de las organizaciones campesinas con misiones similares.

A medida que van consolidándose, se convierten en cuerpos muy fuertes y organizados que mantienen una presencia en los territorios, evitando que ingresen personas con intereses contrarios al bienestar de la comunidad. Acompañan las acciones de las autoridades, los procesos de movilización y en general cuidan estos territorios estableciendo retenes para controlar la circulación o el ingreso de quienes representan una amenaza. Actúan en defensa de la población en caso de agresiones por parte de actores armados, ya sean guerrillas, paramilitares o fuerzas del Estado. Eso sería un resumen rápido de sus funciones.

Ahora, si nos fijamos, están en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, acompañando el proceso de aprobación del Plan de Desarrollo Nacional del Gobierno de Gustavo Petro. Esto también tiene un fuerte valor simbólico dentro de las luchas populares, siendo considerados como una encarnación de la resistencia. Han logrado obtener un gran respaldo popular y su himno, una canción con un ritmo bastante pegajoso, ha sido apropiado y reconocido dentro de la política popular de manera amplia.

Ecuador

Valeria Coronel

■ Doi: 10.54871/ca25es5b

Primer interrogante: ¿Qué procesos sociopolíticos cuestionan a las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno y los Estados nacionales, y qué aportaciones instituyentes refuerzan políticas de pertenencia comunitarias?

Valeria Coronel: Me voy a referir a una periodización que nos permite comprender cómo la relación entre etnicidad, o grupos identificados como indígenas o afrodescendientes, denominados contemporáneamente “eticidades”, ha evolucionado con el Estado nacional. Esta relación no surge únicamente en el contexto de los movimientos sociales de la última parte del siglo XX e inicios del siglo XXI. En el marco del multiculturalismo existe una larga historia y proceso de interlocución, e incluso, de formación mutuamente constitutiva entre la organización identitaria y política de grupos indígenas y grupos afrodescendientes. El tratamiento del problema de la clase y la raza surgieron conjuntamente a inicios del siglo XX y fueron parte del proceso de formación del Estado Nacional en el Ecuador.

Para abordar la primera pregunta, es importante distanciarse de la noción de que la etnicidad fue reprimida durante el siglo XIX y XX, emergiendo únicamente en el contexto de la crítica y el escepticismo hacia los procesos democráticos y la formación de los

Estados nacionales mestizos. Es solo cuando éstos son criticados en el contexto de la política del reconocimiento, la política identitaria y el discurso filosófico posmoderno, que la etnicidad se vuelve visible. Es decir, es en el momento en que el Estado nacional es cuestionado que la etnicidad emerge como un tema destacado.

De hecho, esta perspectiva plantea un desafío al pensar en sociedades donde, según Zavaleta Mercado, existe una relación compleja y entrelazada entre los grupos étnicos. No se trata simplemente de sociedades donde hay intercambio profundo, sino también donde la identidad misma es estratégica. Un actor puede identificarse con genealogías étnicas en ciertos contextos y territorios, pero asumir otras identidades estratégicas en otros. Las identidades son flexibles y las sociedades son inherentemente heterogéneas y complejas en su estructura. Además, Zavaleta Mercado plantea el concepto del “poder dual”, que es relevante no solo para entender Bolivia, sino también para la región andina en su conjunto. Este concepto refleja la coexistencia de diferentes nociones y acumulaciones de poder.

Tanto la presencia de las comunidades indígenas en el marco del desarrollo capitalista como sus redes de parentesco han sido fundamentales. No solo han actuado como entidades subsidiarias de la economía capitalista, sino que también han logrado articular sus redes en diferentes niveles ecológicos, políticos y económicos. Estas comunidades han acumulado recursos dentro de sus territorios y han establecido liderazgos políticos para coordinar extensas redes poblacionales, enfrentando desigualdades sociales y constituyendo economías colectivas. La noción de identidad estratégica, ampliamente discutida en la Academia Andina y especialmente ejemplificada en Ecuador, refleja cómo estas comunidades, lejos de estar apartadas del mercado, desarrollan estrategias de asentamiento en diversos entornos ecológicos y económicos. Lo notable es cómo han logrado coordinar políticamente estas redes, acumular recursos económicos y competir en el mercado, convirtiéndose así en importantes fuerzas políticas.

Entonces, para trazar la relación entre etnicidad, las comunidades políticas y los Estados nacionales, es necesario reconocer la complejidad de las estrategias de resistencia, adaptación e incluso competencia en el proceso histórico de formación del capitalismo. Estas redes de desigualdad social, asentadas en múltiples escenarios estratégicos, también funcionan como redes de acumulación política y han tenido un impacto significativo en los procesos históricos.

Ahora, para ser más concisa, en el proceso de formación de los Estados nacionales, las guerras interpartidistas, la formación de milicias y las luchas internas dentro de los partidos políticos han sido partes integrales de las identidades políticas. Estas dinámicas han impulsado agendas particulares dentro de los partidos políticos, tanto en el marco de las guerras republicanas como en el proceso de reforma del Estado, lo que en México se conoce como el segundo ciclo de la Revolución. En la región Andina, especialmente en el caso ecuatoriano, hubo un segundo ciclo relevante durante las crisis mundiales entre los años veinte y el inicio de la Guerra Fría. Durante este período, las izquierdas y los liberalismos sociales jugaron un papel crucial en la reforma del Estado.

El hoy –mal conocido– Partido Comunista, durante el periodo de entreguerras, desempeñó un papel fundamental en la articulación de las comunidades indígenas con la formación de los derechos sociales. En el caso ecuatoriano, este partido influyó en los tres poderes del Estado, especialmente en el Parlamento, donde predominaba un bloque más democrático y de izquierda. Se promovió la representación de liderazgos étnicos, sindicales y de clase. El concepto de “voto funcional” incorporó la problemática étnica en la formación de los derechos sociales y en el nuevo tipo de democracia. Además, se transformó la noción cultural de la nación, que ya no se veía como un mestizaje homogeneizador, sino como una cultura de tensiones donde lo étnico y lo indígena no eran concepciones impuestas por intelectuales, sino emergentes de procesos de organización política popular.

Entonces, considero necesario alejarse un poco de la culpa que a menudo se instala en el pensamiento posmoderno y, sobre todo, en ciertas variantes del giro decolonial. Se cuestiona la idea de que los procesos de negociación política entre comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes, así como la negociación de la clase dentro de la nación, constituyan simplemente una imitación o una forma de opresión del mestizaje y la etnicidad. Es importante reconocer los procesos de democratización y lucha social que han tenido éxito e incidencia en la incorporación de ciertos elementos dentro del Estado, los cuales pueden ser activados en defensa de sus propios derechos.

Quisiera destacar la experiencia sumamente interesante de las décadas de los treinta y cuarenta, cuando se formó la Federación Ecuatoriana de Indios y, al mismo tiempo, se llevaron a cabo tres reformas constitucionales que tornaron al Estado más democrático y redistributivo. Se trató de un Estado regulacionista que gravaba impuestos a las transnacionales, reconocía el sindicalismo agrario y consideraba a las comunas como sujetos de derecho. Sin embargo, este proceso llegó a su fin, aunque más tarde se retoma con la Guerra Fría, que también trajo consigo golpes de Estado en países como Costa Rica, exterminio en Guatemala e intervenciones en Ecuador.

Estas nuevas fuerzas globales tuvieron impactos brutales en el sentido de negar la relación entre izquierda y democracia en los procesos latinoamericanos. Es decir, negaron el papel de las izquierdas en la formación de los Estados nacionales, los regímenes de bienestar y las formas de negociar la entrada de lo popular, la raza, la clase, el cuestionamiento al colonialismo interno, al imperialismo, al capital transnacional y al fascismo; negaron eso y plantearon, una versión recortada y reducida de democracia en la que se separaba el trabajo de las izquierdas y, por tanto, también el trabajo de las comunidades étnicas y de clase con la historia partidista, tanto el republicanismo radical, el Partido Rojo, el Partido Socialista, el liberalismo social y el Partido Comunista, fuerzas políticas en las que participaron, se integraron y se organizaron,

pero sobre todo dialogaron desde sus propias contradicciones. Sin embargo, esta historia fue sometida a una amnesia a partir de la Guerra Fría, y más aún durante este periodo. Esto no ocurrió por casualidad; al mismo tiempo que se planteaba una relación tutelada de las democracias latinoamericanas y un escepticismo sobre la existencia de una matriz de democracia o de socialismo democrático propios en América Latina, se promovió no solo la separación de las izquierdas, sino también un programa cultural asociado a la folklorización de la etnicidad. El relativismo cultural, como paradigma de la antropología, no solo fue un enfoque académico antirracista, como lo fue en su momento Franz Boas frente al racismo eugenésico del fascismo, sino que también sirvió como instrumento para que los aparatos que acompañaron a la institucionalidad del fomento y del desarrollo del tutelaje democrático a partir de la organización de 1948, como la formación de la Organización de Estados Americanos en Bogotá, llevaran a cabo una campaña para separar la cultura étnica de la política.

Entonces, el relativismo cultural contribuyó a producir una visión exotizada y despolitizada de comunidades que habían sido parte de la historia política en la formación de los Estados nacionales. Las izquierdas de los años setenta, como el marxismo estructuralista, hicieron un gran aporte académico que no podemos discutir ahora. Sin embargo, insistieron en la idea de que las relaciones de clase y etnicidad eran colaboracionistas, lo cual llevó a considerar a las izquierdas de los años veinte, treinta y cuarenta como colaboracionistas. Tanto el relativismo cultural de la Guerra Fría como las izquierdas estructuralistas, no ayudaron a comprender la profunda relación entre etnias, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y el problema de las clases organizadas en la constitución de los Estados nacionales, que habían sido parte de nuestra historia.

En el contexto del neoliberalismo, sobre esa amnesia, se construyó la noción de que el Estado nacional había surgido en contra y a espaldas de las comunidades, y que estas no habían contribuido

en nada hasta que empezaron a hablar por sí mismas. Se propuso una política de identidad más particularista, mientras se desmantelaba la educación pública y se entregaba parte de ella a liderazgos apoyados transnacionalmente. Esto generó una lucha importante contra el efecto devastador del neoliberalismo, pero también condujo a negociaciones problemáticas con regímenes liberales que ofrecían parcelas del Estado en contextos de desmantelamiento de lo público.

El movimiento indígena ecuatoriano tiene dos elementos sustanciales. Por un lado, una trayectoria ligada a la noción de lo popular y de la clase social, que articula la disputa contra el colonialismo interno y el racismo, reconociendo una trayectoria política indígena. Por otro lado, hay un sector que negocia incluso en este contexto contemporáneo, en el que se está llevando a cabo un juicio político en Ecuador. Existe un debate significativo sobre si negociar adecuadamente con un gobierno que ha desmantelado todo es lo correcto para un movimiento popular. Estos dos elementos representan una trayectoria radical de izquierda, reformista, transformadora y revolucionaria en un sentido histórico, que aún persiste en el movimiento indígena, y su negociación tensa con los procesos de formación estatal contemporáneos, así como un sector que negocia fragmentos del Estado desde la apuesta y la hegemonía neoliberal, influenciado por el relativismo cultural y el multiculturalismo.

Segundo interrogante: ¿Cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras y a qué reacciones se enfrentan?

Valeria Coronel: En este momento se ha complejizado el terreno de los sujetos portadores de comunidades de pertenencia emancipadora. La existencia del movimiento feminista o un movimiento feminista que atraviesa ahora varias generaciones y es también popular; atraviesa varios movimientos sociales y creo que eso es fundamental. Pienso que, para referirme a esto de los sujetos

portadores de comunidades políticas de pertenencia, no me restringiría solamente al problema étnico, por eso mencioné el movimiento feminista.

Quisiera plantear “la paradoja del movimiento obrero”. El movimiento obrero es un sujeto portador de pertenencia. Identifica el concepto de clase como una caracterización que es a la vez universal, porque es la humanidad en su sentido más amplio, pero también es relativamente particular. Es la idea de los desposeídos de la sociedad. Eso es un poco teórico, pero en términos de la formación histórica del movimiento obrero en el Ecuador, existe, es un sujeto de pertenencia y es indispensable dentro de todo proceso emancipatorio.

La paradoja del movimiento obrero es que surge de una manera muy interesante. Inicialmente se constituye como un movimiento sindical y luego como federación dentro del ámbito político de las izquierdas a largo plazo. Sin embargo, si se analiza su representación, al mismo tiempo que siempre se asume como legítima, no se trata de un sindicalismo perseguido. Incluso, hay un sindicalismo agrario que logra cierto impacto en procesos redistributivos de la tierra a lo largo del siglo XX, especialmente en las décadas del treinta, sesenta y setenta. Este impacto lo convierte en una fuerza de negociación y, por tanto, una fuerza emancipatoria en la disputa dentro de la misma sociedad de clases. No me imagino un sindicalismo emancipatorio capitalista, ni postnacional, ni postestatal, ni postpolítico. Creo que ese es un tema de otras disciplinas, tal vez.

En la contemporaneidad y en la modernidad de la sociedad de clases, el movimiento obrero, el movimiento de los trabajadores, es históricamente importante en el país y ha logrado garantías significativas. El Estado Nacional ecuatoriano ofrece garantías a la educación pública universal, libre y gratuita, y durante el periodo del progresismo del gobierno de la Revolución Ciudadana, también se incluyó el concepto de calidad. Todo esto forma parte de las emancipaciones en el sentido de garantías y derechos obtenidos por los movimientos y organizaciones emancipatorias, como se les llama

aquí, de clase en este caso. Sin embargo, al mismo tiempo, su legitimidad, su impacto y su éxito han llevado a que tengan representantes y un proceso de organización jerárquico que no necesariamente integra a las mayorías de los trabajadores informales, que en este momento representan una de las mayores crisis nacionales, con más del 63 % de la población.

Entonces, si bien ha sido una fuerza política, no debemos centrarnos únicamente en la intensidad de la identidad étnica. Quise mencionar esto porque son una organización de pertenencia, y la clase es una categoría que también debemos considerar como una categoría de pertenencia, particular en términos de la lucha contra la opresión y la desposesión, y universal en el sentido de que representa a la mayoría de la humanidad. Sin embargo, su legitimidad y su historia política cercana al Estado les han otorgado una representación que, hasta cierto punto, también puede ser restrictiva, ya que no están realmente conectados con las mayorías de los trabajadores desposeídos que son informales, en condiciones en las que es muy difícil que los representen. Entonces ahí hay un alcance de estas organizaciones o comunidades políticas de pertenencia, pero un límite también por el mismo hecho de haber tenido éxito y legitimidad, su desconexión con lo popular a un nivel más estructural y de las grandes mayorías.

En ese sentido, la relación entre los intentos de proceso ha sido algo tensa. Han surgido tensiones políticas significativas, especialmente entre las organizaciones sindicales, como la Central de Trabajadores y el Frente Unitario de Trabajadores en el país, y los gobiernos progresistas. Esto se debe a que los gobiernos progresistas pugnaban por políticas relacionadas con la formalización del trabajo, lo que a veces implicaba pasar por alto a estas dirigencias. Como resultado, las dirigencias percibían esto como un golpe político a la comunidad política organizada del mundo del trabajo. El hecho de que los gobiernos progresistas abordaran directamente el problema laboral sin considerar la representación de las organizaciones sindicales o del Frente Unitario de Trabajadores, dejaba a los

trabajadores informales en una situación complicada. Estaban en el centro de un problema de representación entre las organizaciones sindicales y los Estados progresistas, donde ambos afirmaban no solo representarles, sino también incidir en su vida cotidiana.

Encuentro interesante destacar la tensa relación entre el mundo del trabajo y su organización con las comunidades indígenas de pertenencia, así como con las comunidades afrodescendientes. Aunque pueda sonar contradictorio con las ideas predominantes sobre identidad, considero importante subrayar el aspecto de la identidad de clase. Esto puede parecer irónico, ya que va en contra de la visión tradicional que considera las etnicidades como derivadas de raíces tribales. Sin embargo, las comunidades étnicas no surgen necesariamente de una raíz ancestral o tribal, como sugiere una lectura influenciada por la UNESCO y una etnología imperia lista. De hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) plantea el problema de lo nacional no como un tema de origen tribal, sino como una genealogía en términos políticos. No se identifican genealógicamente, sino como nacionalidades que han luchado por sus derechos. Existe una relación estrecha entre las comunidades nacionales radicales, las cuales se consideran naciones políticas, y las nacionalidades históricas que tienen una identidad propia, no vinculada al poder político y definida por sus costumbres y lenguas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas se considera una confederación de nacionalidades históricas, lo cual no niega la importancia de la cultura, pero resalta su trayectoria de lucha contra la opresión. Han combatido la tiranía, la exclusión gubernamental y el racismo, buscando gobernar democráticamente. Sus organizaciones no tienen liderazgos genealógicos hereditarios, sino que funcionan como experimentos democráticos fundamentales en el país. Realizan elecciones, debates amplios e involucran tanto a hombres como a mujeres en sus procesos democráticos. Se construyen desde una perspectiva de lucha contra la opresión, tanto étnica como popular, identificándose como nacionalidades

históricas en una disputa continua. La democracia es un elemento constitutivo fundamental en sus prácticas, diferenciándose entre las comunidades de la sierra andina y las que se han forjado en territorios dominados por transnacionales, mineras, petroleras y programas conservacionistas en la Amazonía.

En estas zonas también existen organizaciones étnicas de diversos tipos, que en cierto momento mantenían una relación menos estrecha con el Estado nacional y mostraban tendencias más autonomistas. Esta diferencia es importante de destacar entre los componentes del movimiento indígena del Ecuador. En las regiones andinas, como hemos mencionado anteriormente, hay una disputa entre tradiciones más clasistas y nacional-populares, mientras que en la Amazonía la trayectoria es diferente debido a su historia de concesiones territoriales y negociaciones con el Estado nacional. Durante un tiempo, estas comunidades negociaban más con las empresas petroleras que con el Estado, pero en períodos más recientes han adoptado un enfoque más radical en favor de programas populares en lugar de negociaciones autonomistas territoriales.

Tercer Interrogante: ¿Cuáles han sido los modos bajo los que se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia, en lo económico, político, cultural, ambiental y por escalas de actuación (local, nacional, internacional-global)?

Valeria Coronel: Para responder esta pregunta quisiera pensar un poco en el campo de fuerzas desde una perspectiva más estratégica. Creo que el modo en que se interroga aquí, sale un poco de la perspectiva más culturalista del problema, de los movimientos étnicos o de los movimientos sociales y les reconectan con la pregunta de la transición histórica contemporánea sobre el problema del Estado, que normalmente pareciera, digamos ideológicamente, que se les separa. Aquí, en estas preguntas, se integra la relación entre políticas populares y políticas de reconocimiento y Estado. Se nos exige pensar un campo de fuerzas más integral para ver

dónde suman estas luchas. Una agenda política, o sea un análisis político, no se hace leyendo el pliego de peticiones o el discurso, porque cada discurso puede ser el uno más bello que el otro, sino que hay que analizar dónde suma en fuerzas dentro de una disputa, en una transición histórica, un determinado movimiento. Es decir, no leer si es más utópico o más radical en su visión de futuro, sino ver dónde suma en el momento de movilizar fuerzas sociales e incluso discursos, en la contienda sobre una coyuntura política o una transición histórica a más largo plazo. Y en este momento estamos en el mundo y en Ecuador.

Mientras intento reflexionar desde Ecuador sobre una situación que afecta a todos los países, nos encontramos en una transición histórica muy seria. Se podría pensar en una transición democrática hacia una crisis, o bien en una profundización de una transición autoritaria hacia una crisis. Desde una perspectiva histórica, me recuerda a la década del treinta, e incluso a los años veinte y treinta, el período entreguerras en el que el mundo podría haber tomado un rumbo fascista debido a la crisis mundial, o bien un camino de reformas, expansión del Estado de bienestar, politización popular, organización y crecimiento político de los partidos, como ocurrió más en América Latina y menos en Europa en aquel momento. Hoy en día, nos encontramos en una situación similar, y especialmente en Ecuador, donde estamos inmersos en un proceso de juicio político que está determinando las fuerzas partidistas y los equilibrios dentro de ellas.

Es realmente interesante ver cómo en Ecuador existe un partido político que, en su fundación, se denominó como el brazo político del Movimiento Indígena del Ecuador. Este partido, la CONAIE, representa al movimiento indígena, y Pachakutik era su brazo político. En este contexto, cuando hablamos del cruce entre ambas realidades, observamos que, en esta coyuntura de transición, se debate si se continuará con una orientación neoliberal, lo que implica salvar el sistema bancario, desregular las normas del capital y del trabajo, privatizar funciones estatales y garantías, entre otros

aspectos propios de la apuesta neoliberal. Además, en un contexto de expansión de la economía informal y del narcotráfico, se plantea desregularlo todo, dismantelar el sistema público y abrir los canales no para la inversión extranjera, minera y petrolera, sino abrir aún más los senderos para la expansión del narcotráfico. Este programa se enfrenta a otro que, aunque tenso y lleno de conflictos y negociaciones inconclusas, podría considerarse teóricamente como un programa de hegemonía, basado en la negociación, el conflicto, la opresión y el avance en sistemas democráticos.

La sociedad busca tomar decisiones soberanas sobre sí misma, regular el capital y reconocer las economías populares, así como los derechos reclamados en varios ámbitos. Estamos inmersos en una disputa de transición de modelos desde 2019 o incluso antes, mucho antes. El neoliberalismo impactó en Ecuador en los años ochenta. En los noventa, el movimiento indígena del país demostró su importancia como actor político organizado en múltiples niveles. Defendía las condiciones de vida campesina, cruciales para la supervivencia urbana, y abogaba por derechos políticos en contra del dismantelamiento nacional.

Después de los eventos más recientes, quiero mencionar al menos una vez los estallidos de octubre de 2019. En ese momento estábamos inmersos en un contexto de un giro hacia el neoliberalismo como política pública y con un serio dismantelamiento de la institucionalidad. A pesar de que las tensiones entre Correa y el movimiento indígena se habían desplazado relativamente, en la propaganda neoliberal persistía el tema de la intolerancia política, tratando de desviar la atención del verdadero problema. Sin embargo, ya había indicios de que la crisis había afectado de otras maneras. Se produjo un movimiento importante, acompañado siempre por organizaciones populares urbanas, el movimiento de mujeres, la teología de la liberación y organizaciones históricamente solidarias, así como la movilización de barrios. Durante varios días, se llevó a cabo un levantamiento significativo para condicionar y detener en cierta medida el ajuste fiscal impulsado por el FMI y

el gobierno de Lenín Moreno. Después vino la pandemia y, en ese escenario, se implementaron una serie de medidas antipopulares. Mientras el cuerpo social sufría, la nación indígena mestiza, en su estética ecuatoriana, reflejaba una especie de nostalgia por el dolor del pueblo. Este dolor era real, era una crisis palpable. Todos vimos la mortandad, la necropolítica, la situación dramática del Ecuador. Y justo en ese contexto, se tomaron medidas neoliberales para flexibilizar el trabajo. Es decir, bajo el pretexto de una mal llamada “ley humanitaria”, los empresarios tenían la facultad de despedir, por “derecho”. Estoy hablando de esa corriente que la gente podría identificar.

El gobierno contemporáneo de Guillermo Lasso, que ha seguido la línea del neoliberalismo radical, ha perdido toda popularidad. Apenas cuenta con un 12 % de aceptación nacional y está enfrentando un juicio por peculado. Hay mucha información sobre redes de corrupción, pero no profundizaré en eso. Hubo un movimiento para condicionar, para contener, para rechazar esta política. Podríamos llamarlo un “estallido”, ocurrido en junio de este año. Luego vinieron las elecciones seccionales, donde se produjo una pérdida brutal para el proyecto neoliberal en términos de resultados electorales, cambiando por completo el mapa político.

En este contexto, nos encontramos ante un juicio político, donde nuevamente emergen, digamos, fuerzas en juego entre coyunturas y procesos de mediano plazo, como los estallidos y los cambios en el modelo de gobierno y Estado. Este es un momento en el que nos preguntamos: ¿cómo contribuyen las comunidades políticas de pertenencia en agendas de disputa geopolítica y nacional? Es decir, el problema del neoliberalismo autoritario o la ruta fascista, que ahora también está presente en América Latina, o una ruta de recomposición democrática de derechos, pero también ecologista, feminista y de política de reconocimiento. Estas tres dimensiones deben sumarse a las viejas trayectorias de la lucha popular y los proyectos nacional-populares. Ese es el compromiso que debemos exigir, ya que está en disputa en este momento. El juicio político en

la Asamblea Nacional del Ecuador es una representación microscópica, pero muy relevante, de esta disputa global.

Bajo esta coyuntura, podemos observar fracturas dentro del movimiento indígena. Principalmente, el movimiento indígena busca oponerse al programa neoliberal y al gobierno de Lasso. Sin embargo, un sector del liderazgo dentro del movimiento propone una postura negociadora. Aunque reclaman negociaciones sustanciales y no solo migajas, su enfoque está en obtener buenos ministerios y otros beneficios. Este enfoque particular, que fortalece la comunidad política de pertenencia ligada al Partido Indígena, puede ser progresista y democratizante o puede perjudicar al conjunto del pueblo ecuatoriano al enfocarse en negociaciones específicas. Eso es lo que quería destacar.

Debate

Pregunta: Me gustaría saber cómo es el papel del sector de los indígenas y también de los afroecuatorianos. ¿Cómo ves tú esa posibilidad más allá de la Revolución Ciudadana, sino del Frente Amplio, que sería posible? ¿Tú crees que pueda abarcar líderes afros e indígenas para conquistar el poder? Una cosa es quizás el poder a través de las urnas y mantener la presión en la calle.

Otro tema es la violencia y el crimen organizado. Para 2011 había cinco muertos por cada 100 mil habitantes debido a la violencia, ahora son 25. Se ha aumentado por cinco debido al narco mexicano. La respuesta a la crisis social es poner narcos por todos lados y crear un estado de terror para que se mantenga el neoliberalismo. ¿Cómo sobrevivimos dentro de la violencia?

Valeria Coronel: Efectivamente, estamos en una crisis sin precedentes. Es decir, la violencia ha aumentado porque, como dices, ahora hay 25 muertos por cada 100 mil habitantes, lo cual es un incremento brutal. Están desmantelados todos los servicios públicos.

Para darte un indicio que para otros podría parecer frívolo, pero para el trabajo en educación es importante: ¿has intentado ir a la Biblioteca Nacional del Ecuador y pedir servicio para los estudiantes? Estamos cerrados desde la pandemia. Hace año y medio en todo el mundo ya se están abriendo las cosas y todo está volviendo a la normalidad. Aquí todo sigue cerrado y lo único que está abierto son los canales para la negociación minera y las rutas del narcotráfico, como en Colombia. Colombia no ha sido desalojada por el narcotráfico, pero existe un gobierno que está implementando políticas territoriales y políticas con las comunidades. Está reconstituyendo la relación entre el Estado y el tejido social que ha sobrevivido en resistencia.

En este contexto de complejidades, el lavado de dinero del narcotráfico se arraiga en los puertos informales y la pobreza, exacerbando el abandono social. Esto ha dado lugar a la aparición de niños sicarios, algo que antes no se veía, y a una falta de experiencia para abordar el problema. Además, persisten los estereotipos más tradicionales y cómodos de una sociedad que solía considerarse relativamente segura, como una isla de paz y democracia en contraste con la guerra en Colombia y los procesos autoritarios en Perú.

Ecuador solía estar arraigado en la tradición de la revolución alfarista, con una marcada tendencia hacia la socialdemocracia o la izquierda. Sin embargo, hoy en día, los términos habituales parecen insuficientes para describir el horror que enfrentamos. Este cambio se intensificó durante la pandemia, lo que supuso un golpe brutal. Ahora, ¿qué perspectivas se abren ante nosotros? Lo más destacado es la posibilidad de una articulación de las fuerzas de izquierda en Ecuador. La tragedia del país radica en la persistente brecha entre estas fuerzas. No es que falte una trayectoria en el movimiento, ya que el movimiento indígena tiene un alcance y una movilización nacional, respaldado en las calles y en momentos cruciales que han condicionado el poder, en alianza con la Revolución Ciudadana tanto en las calles como en la Asamblea, donde tienen un importante bloque parlamentario. Han respaldado proyectos

de ley y han mantenido posiciones convergentes en diversos frentes junto al movimiento indígena. Sin embargo, al mismo tiempo, persiste una distancia y una negativa a negociar, lo que refleja un discurso de rechazo a la formación de un frente conjunto, a pesar de compartir objetivos comunes.

En la movilización, se actúa de manera conjunta y de repente nos encontramos en este juicio político, que no es un asunto menor. De pronto, no se discute la posibilidad de no articularse o de no votar del mismo lado. De hecho, para algunos dirigentes indígenas, la razón por la que se oponen al gobierno de Lasso es porque representaría una victoria contra el representante del neoliberalismo más destructivo en ese momento. Lasso está acusado de diversas irregularidades y su modelo es considerado tan destructivo que ni siquiera la misma derecha lo identifica como un modelo de derecha, sino más bien como un modelo de cártel o de un grupo en particular. Como se lo cuestionó en las calles, se lo cuestionó en el voto, se lo cuestionó en dos o tres levantamientos importantes. Como se le cuestiona en todos lados, pero cuestionarlo a nivel del voto.

Se dice que los dirigentes indígenas que promueven no votar por la destitución de Lasso argumentan que destituirlo sería otorgarle una victoria a la Revolución Ciudadana, facilitar su retorno. La campaña de Yaku Pérez también se enfocó en esa dirección. Es decir, el reformismo y el progresismo son percibidos como enemigos acérrimos, incluso más que la derecha, porque con ellos se puede negociar, pero no con la banca, no con el dictador. La idea de que la radicalización, la democratización y la intervención del Estado en la economía son equiparadas a la dictadura, es un discurso tradicional de la derecha, el conservadurismo y el neoliberalismo. Ese es también el discurso predominante. No estoy negando que haya habido conflictos importantes y creo que uno de ellos fue crucial y un límite.

Creo que uno de los puntos más graves que afectaron al movimiento de la Revolución Ciudadana y al gobierno de Rafael Correa fue el intento de promover la minería en territorios étnicos

sin tener en cuenta los habitantes de estos territorios. No estoy diciendo que no se necesitaran recursos energéticos, ni que debamos desatender la industrialización en algunas áreas a costa de una ecología desprovista de personas. Esa no podía ser una política soberana. Se intentó incluso negociar una política ecológica a nivel mundial, pero no obtuvo respaldo. En este país pequeño tampoco estamos dispuestos a sacrificar nuestras tierras para preservar el medio ambiente. Sin embargo, no se podía imponer la minería en los territorios de manera coercitiva como se intentó. Siempre el líder tiene que integrar las demandas y representaciones de manera justa. Ahí fue donde se presentó un grave conflicto en la relación entre el movimiento indígena y el gobierno de Correa. Pero eso ocurrió hace más de una década. Es decir, eso sucedió antes, mucho antes.

No se puede culpar a eso por todo lo que está ocurriendo ahora, que es un programa neoliberal en las calles y en las urnas. Y todos celebraron que una parte del apoyo fue para el movimiento indígena y otra para la Revolución Ciudadana, y que la derecha retrocedió en Guayaquil y en Guayas, que era su bastión natural, y que retrocedió a pesar de tener el control del gobierno en toda la Sierra Central. La derecha y los partidos de derecha retrocedieron notablemente en las elecciones. Estamos juntos en la calle, estamos juntos en los programas de reformas del Estado, pero sobre todo para impedir la reforma.

Por ejemplo, la entrada de un instrumento clave que podría comprometer la soberanía en términos de seguridad, como lo es la extradición. Saben que esto podría llevar a la implementación de un “Plan Ecuador” diseñado fundamentalmente desde el exterior, con control de la información y del territorio desde fuera. Lasso perdió el plebiscito por un voto mayoritario y masivo, impulsado por la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. Todos estamos de acuerdo en esto, pero en el momento de tomar la decisión definitiva, en este momento crucial, se retrocede, porque eso podría

facilitar que uno de los dos partidos, que es el mayoritario, tome la delantera.

Entonces, la tragedia del Ecuador radica precisamente en el largo plazo de nuestras tradiciones de izquierda. El hecho de que todas son fuertes y provienen de distintos estilos de negociación, generando rencillas internas y tensiones no resueltas que obstaculizan la unidad. Aunque la oligarquía, por así llamarla y rescatando el lenguaje histórico de América Latina, sea más inepta para hacer pactos y construir un Estado coherente, se ve inmersa en disputas internas similares a cárteles, sin lograr una unificación. Su fuerza no radica en mantener un programa unificado. Tal vez cuenten con apoyo transnacional, pero entre ellos mismos no pueden consolidar un Estado coherente. Más bien, desmantelan lo que pueden y se enfrentan entre ellos, exponiendo sus diferencias públicamente. Por eso se exponen sus conflictos. No es su fortaleza lo que los mantiene en pie, sino la incapacidad hasta ahora de construir un frente popular, un frente amplio que proporcione una salida viable para esta nación.

Pregunta: Siempre me ha parecido que Ecuador es un país que ofrece momentos políticos interesantes para entenderlo desde una perspectiva comparada. Sin embargo, ahora ha vuelto a una cierta inestabilidad y a una mayor polarización política, especialmente evidente durante los últimos años, sobre todo en tiempos de pandemia. Bajo ese contexto tengo tres consultas muy concretas que quizás tengan cierta sinergia.

Primero, quiero abordar el problema de la seguridad y la gobernanza en ese ámbito. Ecuador no estaba inserto en las redes de criminalidad como en Colombia y Perú, donde estas redes están instaladas por el narcotráfico. Me sorprendió y preocupó mucho que, de un momento a otro, estallara toda esta ola de violencia en la costa ecuatoriana. ¿Qué tanto crees que este nuevo problema público se acentúa en la agenda gubernamental? ¿Crees que Ecuador vaya hacia un enfoque más centrado en el manejo de este problema

público que parece estar escapándose de las manos del Estado debido a la inestabilidad política y las fuerzas encontradas?

El segundo tema es el aspecto económico. Ecuador está entrando en una situación de riesgo país, justo en un momento en que se discute el tema de Bolivia. Esta preocupación, sobre todo por el impacto que puede tener, podría llevar nuevamente a un ciclo de ajustes económicos y reducción del gasto público. ¿Cómo crees que esto pueda generar algún tipo de estallido social, considerando que Ecuador es muy propenso a esto en momentos de crisis económicas?

Finalmente, me interesa conocer cómo se concibe ahora el rol de la ciudadanía en Ecuador, sobre todo teniendo en cuenta los aspectos de mayor preocupación como la economía y la seguridad. ¿Cómo percibe la ciudadanía esta situación actualmente, especialmente después del proceso electoral donde el movimiento Alianza País logró cierto retorno al poder? ¿Crees que el correísmo pueda regresar al poder y cómo podría influir esto en la dinámica política del país?

Valeria Coronel: No voy a extenderme demasiado, pero considero problemático pensar que la sociedad está interpelando, cuestionando, deslegitimando y sometiendo a juicio al gobierno de Lasso porque no puede controlar el narcotráfico. Esa no sería la razón principal. Más bien, la sociedad está cuestionando la imposibilidad y la falta de voluntad del gobierno no solo para controlar el narcotráfico, sino también debido a indicios y acusaciones de peculado. Junto con el tema del peculado, se han presentado una serie de documentos importantes que están en manos de la Fiscalía, aunque esta también está relativamente influenciada. Si bien las estrategias actuales son diferentes a las de los años setenta, existe un control del Poder Judicial que, sin embargo, revela una complicidad en lugar de una falta de control.

Por otro lado, hay complicidad con una parte del negocio del narcotráfico, no con la totalidad, ya que esto no es un Estado o un

Imperio, sino más bien un conflicto entre cárteles. Hay guerras entre cárteles en las cárceles, lo que ha cobrado más vidas que nunca en la historia de Ecuador. Semanalmente, hay muertes en las cárceles debido a estas disputas entre cárteles. La situación de la policía y las fuerzas represivas es muy compleja. Durante al menos dos años, la Policía ha estado involucrada en escándalos por femicidios, corrupción y narcotráfico. La propia policía forma parte del problema y, además, está desabastecida en ciertos aspectos. A pesar de que hay fondos disponibles, no se han utilizado para modernizar y equipar a la policía. En cambio, la policía se ve afectada por su conexión con el narcotráfico, la corrupción y condiciones de autoritarismo. Por otro lado, parte de la policía tiene demasiado poder.

En fin, están tratando de desplegar a los militares en las calles. Actualmente, tienen una política que declara como terrorismo cualquier acto de protesta. De hecho, hay una amenaza casi directa de que si surge una nueva movilización social, que es un recurso histórico en Ecuador, la respuesta no será solucionar las necesidades básicas de la población, sino reprimirla. Las movilizaciones sociales no ocurren por hambre únicamente, sino que también son un instrumento político. El hambre está presente hoy más que nunca.

Pero no es que hoy vaya a haber más movimientos porque hay más hambre, pienso yo. Es un instrumento político de la organización popular, reconocido por los Estados. Es parte de nuestro repertorio y va a volver, pero hoy ya existe la amenaza de que cualquier movilización sea declarada como terrorismo, como si fuera parte de la situación de inseguridad privada. Esto es una transformación que está ocurriendo. El gobierno decreta considerar como terrorismo cualquier situación que amenace la seguridad, tratándola como parte de las guerras del narcotráfico, que están afectando más bien a la misma sociedad civil, y eso es precisamente parte del rechazo que se va a expresar en la movilización.

Esto ocurre en medio de un juicio político, en medio de la más alta deslegitimación y violencia, con rencillas entre ciertos liderazgos de izquierda. El Gobierno emite un decreto para declarar

terrorista cualquier movilización y anticipa su respuesta. En este sentido, ¿cómo operaría contra cualquier delincuencia? Estamos ante un problema donde la gente no está cuestionando al gobierno y por eso este no sabe cómo actuar contra la inseguridad.

Habrán nuevos estallidos. La crisis grave tiende a generar más estallidos. A veces, son más que simples estallidos. Incluso diría que son instrumentos políticos acordados democráticamente, desde el nivel micro del movimiento indígena hasta el movimiento nacional. El movimiento indígena nacional está rechazando el gobierno de Lasso, está a favor del juicio político y hay un sector de ellos, del Pachakutik, que piensa apoyar a Lasso y que ha declarado que así lo va a hacer para que no pase el correísmo. Pero yo creo que el movimiento indígena sí está viendo la crisis de una manera más integral y estratégica, y muchos sectores del pueblo ecuatoriano acompañan los movimientos cuando esto sucede. Creo que con esto me voy a quedar. Hay una conjugación de distintos tipos de instrumentos de participación, y el movimiento y la movilización son uno de ellos.

El voto se ha ejercido ya para plantear que, en las últimas elecciones, en las principales ciudades del país tienen alcaldías por izquierdas, es decir, han tenido antineoliberales más que nada progresistas, otras tienen liderazgos. Del movimiento indígena también, precisamente por su compromiso y su raigambre democrático popular desde abajo y sus programas en torno a asuntos de interés colectivo y comunitario de la economía popular también y temas de representación histórica de ese de ese movimiento.

Las prefecturas clásicas de la derecha también han experimentado transformaciones. El ejercicio del voto es muy activo, y la ciudadanía participa de manera significativa en la política a través de él. Aquí la gente no es indiferente a la política. Entiendo que los frentes populares, cuando están compuestos por una amalgama de liderazgos clásicos, pueden obstaculizar la movilización subalterna y el control del poder fáctico que se siente en el país. Sin embargo, si las izquierdas representan fuerzas sociales, como sucede en

Ecuador, considerando al progresismo y al movimiento indígena como las principales fuerzas movilizadoras, es imprescindible que haya una negociación y un frente común para enfrentar la crisis en la que nos encontramos.

Haití

Jefferson Junior Pierrelus

■ Doi: 10.54871/ca25es6b

Primer interrogante: ¿Qué procesos sociopolíticos convergen en la formación de las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno y en el Estado nacional y en los procesos comunitarios instituyentes?

Jefferson Junior Pierrelus: Los procesos sociales en Haití siempre han girado en torno a varios elementos importantes. Uno de ellos es la ocupación de Haití por Estados Unidos, que duró más de veinticinco años y ha debilitado significativamente al Estado haitiano. Además, la dictadura de Duvalier, que se prolongó durante prácticamente treinta años, marcó un periodo en el que las luchas sociales y políticas estuvieron orientadas hacia la democratización del Estado. Sin embargo, desde el asesinato de Jean-Jacques Dessalines, el Estado haitiano ha enfrentado dificultades para consolidarse debido a razones geopolíticas, económicas y otros factores. Tras la salida de Duvalier, se esperaba que se estableciera la democracia y una Constitución en Haití, pero en realidad se dio una democracia dirigida desde Washington, lo que allanó el camino para lo que conocemos como el famoso Consenso de Washington.

Entonces, ese proceso democrático se limita únicamente a la democracia electoral, sin consolidarse realmente en Haití. Esta democracia electoral siempre ha estado marcada por la intervención

de los tres países principales: Estados Unidos, Francia y Canadá, supuestos amigos del país. Los procesos sociales en Haití involucran a la clase campesina, a los estudiantes universitarios y, en menor medida, a los sindicatos, que hoy en día prácticamente han desaparecido. En cambio, son los jóvenes y otros ciudadanos hastiados quienes están organizándose para enfrentar la violencia, los secuestros y los asesinatos que están plagando al país.

Los procesos que tienen lugar en Haití son una lucha por la supervivencia en todos los aspectos: físico, biológico, emocional, psicoafectivo, económico y político. No es una lucha por la supervivencia como Estado nación, ya que existe un profundo desencanto con lo que los países supuestamente amigos ofrecen, lo cual no ha solucionado los problemas del país. Al contrario, parece que cuanto peor está la situación, más se legitima la presencia de estos países en Haití.

Segundo interrogante: ¿Cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras en el contexto de Haití? Desde el terremoto de 2010, que devastó al país cuando apenas se estaba recuperando, hasta el autoritarismo y la violencia que persisten incluso después de la salida de la misión de la ONU, el contexto haitiano es extremadamente duro. En este escenario, ¿qué sueño de emancipación puede haber cuando la prioridad es sobrevivir día a día?

Jefferson Junior Pierrelus: Bueno, el sueño de emancipación es prácticamente “sálvese quien pueda”. El pueblo haitiano se da cuenta de que no se ve representado en ningún partido político. Desde que Michel Martelly no ganó las elecciones y los grupos que lo hicieron, Estados Unidos impuso a Martelly. Hay un desencanto similar al de toda América Latina con los partidos tradicionales en el poder. ¿Quiénes promueven algo entonces? Nos quedamos prácticamente con algunas organizaciones del pueblo, no tanto con organismos internacionales. Además, los grupos estudiantiles están

haciendo presión sobre el gobierno y la gente común coloca barricadas, empujando para una mayor participación y la realización de elecciones. Los grupos que pueden impulsar esta agenda incluyen a grupos estudiantiles, algunos académicos y sobre todo a los movimientos campesinos que buscan no ser ahogados por los productos importados. República Dominicana desplazó a Estados Unidos como primer socio comercial, lo que muestra una dependencia económica. En el caso de Haití, el pueblo y las organizaciones barriales, los universitarios y los defensores de los derechos humanos luchan por aminorar la miseria material y psicológica del pueblo. Haití no es un Estado débil, sino prácticamente inexistente de facto. El gobierno interino está totalmente ausente. Es una situación complicada y compleja que requiere un marco conceptual diferente, fuera de la sociología clásica, con todo respeto.

Tercer interrogante: Si consideramos que Haití fue el país que recibió a Simón Bolívar y permitió la independencia de América del Sur, que también se acercó a Venezuela en un momento dado con el programa Petrocaribe, que facilitaba el acceso al petróleo a precios subsidiados. Sin embargo, este programa se vio afectado por el escándalo de Petrocaribe, el cual fue desbordado totalmente por Jovenel Moïse. Este escándalo fue manipulado desde Estados Unidos para denunciar la relación entre Venezuela y Haití. Entonces, por un lado, Haití estuvo cerca en un momento dado de Cuba, Venezuela e incluso Rusia -porque al final de su mandato Moïse se acercó a Rusia cuando vio que ya los Estados Unidos no lo querían-, y, por otro lado, Moïse terminó siendo asesinado por mercenarios colombianos financiados desde Estados Unidos. ¿Qué margen le queda a Haití? Y finalmente, ¿cómo llega Haití a ser un punto de lucha entre bloques? ¿Qué opinarías tú en esa dimensión geopolítica?

Jefferson Junior Pierrelus: En términos geopolíticos observamos los últimos acontecimientos. El asesinato de Jovenel Moïse se debe

a una toma de conciencia tardía, al darse cuenta de que estaba rodeado de adversarios, tanto del expresidente, bufón y cantante Martelly, como de la oligarquía. Esta oligarquía, es importante señalarlo, vivía y sigue viviendo del presupuesto nacional. Al intentar distanciarse de ellos, le costó caro, ya que, frente al pueblo, él era percibido como un servidor de este grupo, lo identificaban como uno de ellos. Por lo tanto, cuando el presidente empezaba a acercarse a Turquía, como también se aproximaba a Rusia –y actualmente la gente está solicitando la presencia de Rusia en Haití– se enfrentó a obstáculos. Haití es el único país que no puede tener una embajada rusa en su territorio. ¿Tenía Moïse alguien en quien confiar? Sí. Su asesinato no estaba predestinado.

¿Qué ocurre geopolíticamente hablando? Sabemos que Haití está a menos de una hora de Miami, convirtiéndolo en el patio trasero de Estados Unidos, como otros países. Y más aún, siendo un país con la característica de Haití, donde Estados Unidos ha estado presente durante muchos años. Desde 1914 hasta 1928. Después de Afganistán, Haití es donde Estados Unidos ha permanecido por más tiempo. El único amigo real que podría tener Haití es Venezuela, que lo coloca en un papel sobresaliente. Sin embargo, este proceso en Venezuela, como mencionaste, implica tomar este dinero, desperdiciarlo y que nada llegue al pueblo, lo que convierte la situación económica y petrolera de Haití en un rompecabezas, más que un simple dolor de cabeza para el país.

Geopolíticamente, Haití es un país controlado. Es importante reconocer que es mejor enfrentar una verdadera tristeza que aferrarse a una falsa alegría. Haití es un Estado inexistente o muy débil. ¿Es una nación que ha construido la identidad nacional pero no ha podido desarrollar el Estado? Sí. Y geopolíticamente, es un país dependiente de Estados Unidos, Francia y Canadá, así como del Banco Mundial, con una élite apátrida vinculada a los pandilleros, los gánsteres financiados y armados por los supuestos amigos de Haití. En ese sentido, Haití está aislado geopolíticamente. Está solo. A pesar de que fue solidario con toda América Latina y fue

considerado el hermano mayor del continente, prácticamente lo dejaron morir solo. Es evidente que carecemos de conocimiento histórico sobre Haití. Además, muy poca gente conoce la realidad de Haití. Sabemos más sobre Mickey Mouse, como dijo Fidel Castro, que sobre Haití, a pesar de ser considerado el hermano mayor del continente. Geoeconómicamente, Haití es un país dependiente de las remesas, la ayuda internacional y las migajas que caen de la mesa de las potencias.

Debate

Pregunta: Haití está dividido en dos, con un poder central urbano descendiente de la conquista y el otro en el campo, que se organiza de manera horizontal en colectivos que toman decisiones colegiadamente. ¿En qué medida esta forma de autonomía, que también implica una forma de emancipación, sigue siendo relevante en el contexto actual de Haití? Sabemos que la agricultura está siendo dominada por productos importados de Santo Domingo. Entonces, ¿dónde queda la autonomía y la emancipación en este modelo rural?

Jefferson Junior Pierrelus: La soberanía alimentaria prácticamente puede darse en las provincias de autoconsumo y no tanto para la producción internacional como el café, el cacao y muchos productos que antes Haití exportaba. Entonces, aquí, de hecho, muchos productos se venden para el mercado internacional, en este caso, Alemania, Francia. Solo productos primarios, es decir, que salen de la tierra misma, financiando una soberanía alimentaria casi nula. Esta dependencia alimentaria ronda arriba del 60 % y más. Estamos hablando de algo patético, del grupo de élite económica del país que nunca se había identificado con él. Sí, aunque nacieron ahí y vienen de varias partes del mundo, alemanes, franceses, griegos, sobre todo musulmanes de Libia. Son ellos después de

Duvalier, los que se van a hacer con el poder. Y usan el país, pero sin sentirse parte de él; una suerte de “élite política apátrida”. De allí sacan su dinero, son millonarios, pero no invierten ni diez centavos en el país. Por lo tanto, no se vislumbra un cambio por parte de esa clase política económica que se beneficia de esa situación.

Pregunta: Me gustaría que hablara un poco sobre el tema de la oligarquía, esos grupos apátridas. Hay muchos migrantes que llegaron para enriquecerse en Haití, pero lo que me interesa es un tema que últimamente se está discutiendo más: el colorismo, es decir, las diferentes tonalidades de la negrura, que también ha tenido un impacto en lo social. Me interesaría saber si en Haití también se está dando esta dinámica en la que la clase está afectada transversalmente por el tono de la negrura.

Jefferson Junior Pierrelus: Interesante pregunta. Sí, efectivamente. La discriminación étnica ha permeado todo el continente, por no decir el mundo, y Haití no es la excepción. De hecho, se dice que pobre es igual a negro, mientras que rico es igual a blanco. Es decir, ¿hasta qué punto se cruza el poder económico con el color de la piel y se impone esa situación? Hasta con Duvalier hubo toda una corriente de la negritud en Haití. En la literatura y el arte, la negritud se instaló como un modelo prácticamente hasta entrado el siglo XX, con varios autores y políticos, donde la negritud tuvo un papel importante. Entonces, ¿esta situación ha estado presente en Haití, donde el color de la piel determina tu clase social? Haití no es la excepción, aunque la gran mayoría de la población, entre el 85 % y el 92 %, es negra, mientras que entre 3 % y 4 % son mulatos y apenas un 1 % es blanco. Pero es una minoría ínfima.

Pregunta: Además de los tonos de piel, me pregunto si en estos estallidos sociales la diferenciación por género también está presente o si se borra en una situación de supervivencia como la que se está viviendo.

Jefferson Junior Pierrelus: La situación de las mujeres en este caso es un poco diferente. En Haití, las mujeres están muy empoderadas, aunque también existe el machismo. No estoy diciendo que sea un país exento de machismo, ya que el patriarcado y el machismo están presentes. Hay casos donde los hombres tienen una esposa y dos o tres hijos con otra mujer. A pesar de esto, las mujeres, ya sean negras o haitianas, son muy decididas y no permiten ciertas cosas, como que su pareja tenga otra familia aparte. La situación de las mujeres en esta lucha es notable. Se observa un mayor protagonismo, especialmente en las grandes ciudades, donde lideran la lucha contra los asesinatos y violaciones, principalmente de niñas y adolescentes. Aunque no aparezcan como líderes, desempeñan un papel fundamental para mantener a sus familias seguras y proporcionar algo de estabilidad. En cuanto a la agenda de género en Haití, ha permeado y se ha encontrado con mujeres que ya estaban despiertas y sabían defenderse. En resumen, la lucha de género en Haití se centra en evitar la violencia y el abandono, más que en preocuparse por la existencia de una concubina o no. Las mujeres haitianas son muy combativas, no se doblegan.

Pregunta: El estallido de 2019 fue en cierta medida detonado por la situación dramática que mencionas, especialmente en torno a los precios de la gasolina y temas como las pensiones y la Seguridad Social. Veo que alrededor de esto giran dos fenómenos principales. Por un lado, la configuración de un sistema de partidos que ha tenido dificultades para representar un polo de unidad popular, aunque aún persiste. Por otro lado, está la cuestión de la conflictividad, especialmente urbana. ¿Persiste en Haití una tendencia hacia la formación de un polo partidista popular? Asociado a esto, hay diversas formas de conflicto, especialmente en las zonas urbanas, incluidas las pandillas en la capital, que a menudo son criminalizadas.

Jefferson Junior Pierrelus: Bueno, la situación con la seguridad social es preocupante. El dinero destinado a ese fin simplemente

desapareció, dejando a muchas personas en una lucha constante por reclamar lo que les corresponde. Se logró llegar a un cierto arreglo, pero la situación en el Caribe fue un factor crucial. El dinero proveniente de Venezuela, otorgado por Hugo Chávez y luego por Maduro, para paliar los efectos del precio del petróleo en Haití, se esfumó. Este hecho fue la gota que colmó el vaso, llevando al pueblo a sentirse completamente abandonado. Haití no tiene recursos petroleros y la asistencia social también se estaba desvaneciendo. Todo estaba preparado para el estallido social, dada la poca sensibilidad de los políticos haitianos hacia la situación del pueblo. Viven en otro mundo, alejados de la realidad, y el panorama político popular tiende a ser más demagógico que a plantear un verdadero proyecto de nación. Como decimos en Haití, “cuando los zancudos vuelan, no sabes quién es macho y quién es hembra”. Es un dicho que refleja la complejidad de la situación en Haití, donde es difícil discernir quiénes son los verdaderos líderes políticos, ya que algunos están financiados por el FMI, Washington y la CIA, mientras fingen ser socialistas, demócratas o nacionalistas.

Puerto Rico

Liliana Cotto Morales

■ Doi: 10.54871/ca25es7b

Primera interrogante: ¿cuáles son estos procesos sociopolíticos que convergen en la formación de comunidades políticas de pertenencia instituidos por el gobierno y el Estado nación o en los procesos comunitarios instituyentes?

Liliana Cotto-Morales: Dividí mi presentación en varios temas para señalar algunas áreas que deseo abordar. Estos temas incluyen el momento actual de movilizaciones, el papel de las redes sociales, la corrupción, el narcotráfico, la necesidad de la ética, los desastres naturales y los casos judiciales preparados. Son aspectos fundamentales tanto en la movilización como en la desmovilización y creo que sería valioso discutirlos.

Pero antes, voy a proporcionar algunos datos de contexto. Puerto Rico no tiene un Estado nacional, lo que significa que no podemos hablar de un Estado nacional debido a que todas las soberanías, desde el punto de vista jurídico (aunque no necesariamente desde el punto de vista social y cultural), están en manos del Congreso y del Gobierno de los Estados Unidos. Esta situación explica por qué Puerto Rico no tiene representación en las Naciones Unidas.

Este tema tiene un impacto significativo tanto en la construcción de sujetos sociales como en su politización. En el caso de Puerto Rico, el tema de los independentistas es una cuestión de militancia

importante, que no se ve en otros países con estados nacionales establecidos, ya que la construcción de un Estado nacional no es una opción. Sin embargo, a partir de 1952, en plena Guerra Fría, llegó al poder un heredero de lo que en el siglo XIX Martí y Ramón Emeterio Betances llamaban autonomistas: Luis Muñoz Marín. Este creó un gobierno liderado por el Partido Popular Democrático, que implementó la Operación Manos a la Obra a nivel industrial y económico, y estableció el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que ni es Estado ni es libre ni es asociado.

En ese momento, en el contexto de la Guerra Fría, el gobierno colonial y los Estados Unidos lograron presentar un caso convincente ante las Naciones Unidas. Argumentaron que, si bien Puerto Rico tenía una excelente Constitución redactada por los puertorriqueños, esta no fue aprobada hasta que el Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley 600, que establecía la aprobación de la Constitución de Puerto Rico. Esto significaba que, si bien la Constitución fue redactada por los puertorriqueños, su aprobación estaba en manos del Congreso estadounidense, el cual eliminó varios artículos, incluido el reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Por lo tanto, el Estado Libre Asociado se presentó internacionalmente como un modelo de autonomía, aunque en realidad estaba sujeto a la influencia y control de los Estados Unidos. Este panorama se intensificó durante la Guerra Fría, especialmente con el triunfo de la Revolución Cubana, pues presentaba una alternativa democrática al comunismo. Eso le da muchísimo poder de regateo y juego de pie al gobierno colonial.

En el 2005, el gobierno de los Estados Unidos declaró oficialmente que Puerto Rico seguía siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos, según lo definido por la Ley Jones de 1901. Esto significaba que los Estados Unidos tenían plena autoridad para tomar decisiones sobre Puerto Rico, incluida la posibilidad de regalar, vender o realizar cualquier trámite con el territorio, ya que la soberanía residía en los Estados Unidos. Esta declaración marcó

el comienzo del fin del Estado Libre Asociado, el sistema de gobierno que actualmente tenemos en la isla.

Otro aspecto que quiero resaltar es el impacto de eventos como la Operación Manos a la Obra y las crisis más recientes, como las causadas por el huracán María, los terremotos, la pandemia y la corrupción. Estos eventos han provocado un gran éxodo de puertorriqueños hacia los Estados Unidos, tanto que actualmente hay más puertorriqueños viviendo en los Estados Unidos que en la propia isla de Puerto Rico. Además, los niveles de natalidad han disminuido drásticamente, alcanzando un 1,1 %, uno de los más bajos del mundo. Estos factores han contribuido significativamente a la transformación de la realidad demográfica y socioeconómica de Puerto Rico.

Quiero destacar que la categoría de sujetos sociales y políticos independentistas, que ha sido fundamental en la lucha por la soberanía, estuvo centrada durante muchos años en el periodo que considero como el de las acciones colectivas y los movimientos sociales tradicionales en Puerto Rico, que yo sitúo hasta la mitad del siglo XX. En ese tiempo, el enfoque estaba principalmente en la soberanía jurídica. Sin embargo, recientemente, y como parte de los procesos que llevaron al verano de 2019, pasando por 2011 y también influenciados por las luchas de los indignados de ese año, el concepto de soberanía ha sido redefinido por algunos grupos, aunque no por toda la población. Ahora se habla de soberanías que no son otorgadas, sino que se ejercen. Estas incluyen la soberanía alimentaria, educativa, espiritual, urbana, ambiental, entre otras. Estas múltiples soberanías permiten canalizar las acciones de muchos sujetos sociales que están emergiendo como actores políticos, y que van más allá del debate tradicional sobre el estatus político. Ya no se trata únicamente de ser independentistas, estadistas o defensores del estatus actual de Estado Libre Asociado. Este debate se está volviendo más complejo y diverso en el presente.

Después de este planteamiento, también quiero introducir un breve enfoque teórico que tiene que ver con el concepto de

colonialidad. No entraré en todos los debates al respecto, pero quiero resaltar la utilidad del concepto de colonialidad para comprender la situación de Puerto Rico dentro de su contexto. Aníbal Quijano, un destacado teórico de la colonialidad, fue un gran amigo de Puerto Rico y vivió en la isla en varias ocasiones. Permítanme tomar la libertad de leer una breve estrofa del poeta nacionalista, Luis Lloréns Torres, de mediados del siglo XX:

Cisne azul la raza hispana puso un huevo, ciega y sorda, en el nido de la gorda pata norteamericana. Y ya, desde mi ventana, los nortños patos veo, de hosco pico fariseo, que, al cisne de Puerto Rico, de azul pluma y rojo pico lo llaman patito feo.

El poeta nos indica al final que:

Ya surgieron de la espuma los veinte cisnes azules en cuyos picos de gules se deshiela la bruma. A ellos su plumaje suma el cisne de mi relato. Porque ha visto su retrato en los veinte cisnes bellos. Porque quiere estar con ellos, porque no quiere ser pato.

Este poema encapsula la lucha de identidad y resistencia de Puerto Rico en el contexto de la colonialidad, mostrando cómo la isla ha sido percibida como un “patito feo” por aquellos que ejercen el poder colonial, pero que aspira a ser reconocida como un “cisne bello” junto a otros pueblos que luchan por su liberación y autonomía.

El sector independentista ha planteado constantemente que Puerto Rico forma parte de la comunidad latinoamericana, en lugar de la comunidad americana. El tema de la colonialidad me parece sumamente interesante, ya que proporciona herramientas analíticas para distinguir entre los elementos propios de Puerto Rico relacionados con su condición de colonia tradicional, el colonialismo, y aquellos aspectos que reflejan la influencia de la cultura de la colonialidad, adaptada a su contexto específico. De esta manera, podemos estudiar la isla no como el “patito feo”, sino como otro de los ejemplos con características distintivas en el ámbito de la colonialidad, que también se manifiesta en otras repúblicas,

incluyendo Cuba. Acabo de regresar de Cuba y estamos observando que también allí se encuentran efectos culturales, económicos y sociales derivados de lo que denominamos colonialidad. Desde un punto de vista analítico, considero que este tema es extremadamente útil.

Mi enfoque se centra en el verano de 2019, a partir del cual retrocedemos en el tiempo. Durante ese verano, destacaron diversos sectores: estudiantes, sindicatos, ambientalistas, mujeres, personas LGTB, pensionistas, maestras de escuelas públicas y de la Universidad de Puerto Rico, así como sujetos políticos defensores de la soberanía en diversas formas. Sin embargo, una característica única de esta movilización fue su origen en un escándalo: un chat en el que el gobernador y sus allegados conversaban sobre Puerto Rico, insultando a una gran cantidad de personas en el proceso, desde mujeres hasta prostitutas, personas con sobrepeso, aquellas consideradas poco atractivas y las que son percibidas como bellas. Todos fueron objeto de insultos en el chat.

Durante el verano de 2019, una amplia gama de actores sociales tomó las calles, convirtiendo el mes en un período en el que todos estos grupos se transformaron en sujetos políticos. Los estudiantes universitarios, que a menudo eran menospreciados por algunos como “los pelus”, junto con los ambientalistas, considerados uno de los sectores militantes más activos en Puerto Rico, y las mujeres, cuyos movimientos surgieron a mediados del siglo XX como parte de lo que se conoce como los nuevos movimientos sociales, se unieron en un clamor unánime para exigir la renuncia del gobernador. Todos estos grupos se sintieron agraviados por los insultos del chat, cuyos participantes se ha descubierto que estaban inmersos en corrupción. Por lo tanto, el tema de la corrupción se vuelve central en este contexto.

Hay una distinción clave en esa movilización. No la consideraría una revolución, a pesar de que algunos sectores con inclinaciones más anarquistas y/o desde las artes, lo hayan planteado así. Desde mi perspectiva, fue más bien una gran movilización, caracterizada

por el hecho de que todos los actores involucrados se convirtieron en sujetos políticos internos. Es decir, nadie estaba respaldando a nadie, ya que todos tenían reclamos propios.

No así otros movimientos sociales, como los movimientos sociales del siglo XX en Puerto Rico. Uno de ellos está relacionado con la problemática urbana y los desplazamientos, mientras que el otro aborda el tema del imperialismo estadounidense. Respecto al primero, en los años setenta y hasta finales del siglo, surgió lo que se conoció como el movimiento de rescate de terrenos. Este movimiento consistió en la toma de tierras por parte de sectores empobrecidos que no tenían acceso a terrenos y decidieron ocuparlos para construir sus propias viviendas. A diferencia de otros países donde este tipo de movimientos involucra principalmente a campesinos, como en Perú, México, Cuba o Chile, en Puerto Rico se trató de ciudadanos urbanos, segunda generación de campesinos desplazados por los procesos de industrialización y la creación del Estado Libre Asociado. Al no encontrar soluciones habitacionales en las ciudades, se vieron obligados a establecerse en las afueras, lo que yo llamo una forma popular de suburbanización.

El otro movimiento es el de paz para Vieques. La Marina de Guerra de los Estados Unidos ocupaba el territorio de dos islas municipales de Puerto Rico, Culebra y Vieques, esta última ocupando una gran porción de la isla. Un incidente trágico ocurrió cuando la Marina mató accidentalmente a un habitante de Vieques, lo que desencadenó un estallido social y culminó en un movimiento de gran envergadura. Aunque ya desde los años setenta, ochenta y noventa se habían registrado acciones colectivas de protesta contra la presencia militar en Vieques, fue en este momento cuando se convirtió en un verdadero movimiento social. Considero que un movimiento social implica acciones colectivas que se expanden en tiempo y espacio, y en el caso de Vieques, llegaron a involucrar desde las relaciones internacionales hasta las escuelas elementales.

Estamos hablando de un estallido, una movilización que tiene una peculiaridad única, la cual es crucial explorar para entender

cómo pasamos de la “digna rabia”, como la denominan los zapatistas, a una rabia organizada en términos de estructura y estrategia. Es importante destacar que esta movilización se caracterizó por ser descentralizada. La ocupación de espacios se llevó a cabo en lugares sorprendentes, desde plazas y cascos urbanos hasta centros comerciales, puentes, carreteras, aeropuertos y ríos, mediante una amplia variedad de acciones. Estas incluían desde sesiones de yoga en parques hasta travesías en bote por la bahía de San Juan, viajes a caballo desde el centro de la isla hasta San Juan, el uso de motocicletas y el famoso “perreo”, un estilo de baile combativo que se llevó a cabo frente a la Catedral Católica.

Esto es relevante porque todas estas formas de acción fueron muy atrevidas incluso alarmantes para muchos dentro de la izquierda tradicional. Sin embargo, es importante destacar que hubo una diversidad de manifestaciones y una multiplicidad de activismos que condujeron a dos resultados principales. En primer lugar, se observa cómo se integraron las organizaciones existentes que movilizaron sujetos políticos y cómo se integraron personas que participaban por primera vez en las luchas políticas desde una protesta social. Los análisis convencionales a menudo tienden a etiquetar este tipo de acciones como efímeras, como un estallido que luego se desvanece. Lo que se enseña a los estudiantes se enfoca en abordar las consecuencias de estos movimientos desde la perspectiva del gobierno, las instituciones estatales y el mundo corporativo, sin considerar adecuadamente las secuencias de movimientos, movilizaciones y acciones colectivas, algunas de las cuales han evolucionado hacia verdaderos movimientos sociales.

En 2016, tras haber afirmado en 2005 que se podría llevar a cabo cualquier acción con respecto a Puerto Rico, el gobierno de los Estados Unidos, con el respaldo de numerosos actores locales en las legislaturas tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, así como en el ejecutivo del gobierno colonial de Puerto Rico, promulgó la Ley PROMESA. La mayor decepción para nosotros fue que esta ley fuera firmada por Obama, quien en su momento había despertado

expectativas. La Ley PROMESA estableció una Junta de Control Fiscal que en la actualidad ejerce una influencia considerable en el gobierno, superando incluso a todos los gobernantes electos en Puerto Rico. Esta Junta de Control Fiscal se ha encargado de implementar lo que ellos denominan como la política de ajuste.

Esa política de ajuste ha identificado a la Universidad de Puerto Rico, el núcleo del pensamiento crítico del país, como su principal oponente. Más de la mitad de su presupuesto ha sido recortado como resultado. Por tanto, otro actor político importante en este escenario es el estudiantado, que ha estado movilizándose desde los años setenta, ochenta, noventa hasta 2005, 2010, 2017 y posteriormente enfrentaron el embate del huracán María. Este movimiento estudiantil ha sido crucial en la lucha por configurar el tipo de democracia que queremos, manifestándose a través de asambleas y otras formas de participación. Además, han sido firmes en su resistencia contra la Junta de Control Fiscal y su presión sobre la Universidad de Puerto Rico.

Por eso, en el verano de 2019, la consigna era clara: “Ricky, renuncia y llévate la junta”. Esta consigna reflejaba una de las principales luchas en contra de la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, lamentablemente, al final, cuando se empezó a hablar de soluciones, el pueblo movilizado quedó al margen. En las elecciones del 2020 ocurrieron una serie de cambios que influyeron en la composición de la legislatura, pero no en el ejecutivo. El Ejecutivo permaneció en manos del mismo partido de Ricardo Rosselló, con las mismas caras y la misma corrupción persistiendo después de los terremotos que ocurrieron tras el huracán María. La isla, devastada por la pandemia, los recortes de austeridad impuestos por la Junta de Control Fiscal, los bajos salarios, el acoso a los sindicatos laborales y los continuos casos de corrupción, sigue enfrentando los mismos problemas que llevaron a las calles a los ciudadanos en 2019.

Hoy, los maestros y maestras del sistema público están en las calles, y su movimiento ha inspirado a otros empleados públicos a unirse. Los pensionados también nos hemos unido a las protestas,

especialmente aquellos con pensiones más robustas, ya que la Junta de Control Fiscal busca eliminar los sistemas de pensiones que garantizan la seguridad social vitalicia.

Los grupos y organizaciones no electorales, tanto los ya existentes como los surgidos durante las movilizaciones, han fortalecido objetivos innovadores mediante agendas y prácticas democratizadoras. Su meta es crear nuevas formas de gobernanza. Un ejemplo son las treinta y ocho asambleas de pueblo que se unieron para formar una red, con el propósito de establecer y mantener herramientas y mecanismos de participación que generen poder social, en línea con el concepto de Eugenio María de Hostos. De manera paralela, Victoria Ciudadana surgió como un nuevo partido político, adoptando una concepción organizativa innovadora llamada “estructura de red de redes”. Esto resalta el papel crucial de las redes en el contexto actual. Además, existe otra organización llamada Vamos Puerto Rico, cuyo nombre está inspirado en el movimiento Podemos de 2011 en España. Al igual que Victoria Ciudadana, se plantea como una organización política con el objetivo de generar soberanía en diversas instancias y establecer alianzas, pero sin tener un enfoque exclusivamente electoral. Este enfoque refleja un cambio en el vocabulario y la práctica política.

Otras organizaciones como el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano y el Partido Independentista Puertorriqueño desempeñaron un papel fundamental en aspectos organizativos tales como brindar apoyo en transporte, seguridad, iluminación y otros temas relevantes. Su capacidad en estas áreas es importante y merece ser destacada.

Finalmente, un grupo focal de militantes de organizaciones políticas participantes en el estallido social del verano del 2019 identificaron cambios en las mismas. Algunas de ellas, principalmente Vamos y Victoria Ciudadana, tuvieron cambios interesantes en su concepto de gobernanza. Otras como el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano cambiaron, como dicen sus miembros, el discurso, pero su

estructura interna no cambió grandemente, como pasó en Vamos y en Victoria Ciudadana.

Es importante mencionar las organizaciones que iniciaron el estadillo. Estas fueron: Se Acabaron las Promesas que surgió como organización de denuncia contra la Junta de Control Fiscal y la Colectiva Feminista en Construcción. Su lema “Se acabaron las promesas” refleja su postura confrontacional y su análisis. La Colectiva Feminista, influenciada por el feminismo negro en Estados Unidos y con vínculos con el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil, tuvo un papel destacado en el inicio de la movilización.

Por supuesto, además de los mencionados, en Puerto Rico existen otras organizaciones significativas. Por ejemplo, JunteGente surgió tras la visita de Naomi Klein, quien identificó a Puerto Rico como un caso destacado para ilustrar el capitalismo del desastre. El movimiento Una Sola Voz, dirigido por un sacerdote, resalta el papel de los cristianos en la movilización social. Acceso Legal, formado por mujeres abogadas, también juega un papel importante.

El problema de los desplazamientos y la gentrificación relacionados con la Ley 60 convierte a Puerto Rico en un paraíso fiscal para inversionistas extranjeros mayormente estadounidenses. En este momento, la toma de edificios como estrategia ha reemplazado a la ocupación de tierras ya que los activistas, conscientes del medio ambiente, entienden que no es apropiado ocupar las escasas tierras, ya sea para pobres o para ricos. La tendencia ahora es ocupar edificios vacíos y abandonados, incluyendo muchas escuelas cerradas por la secretaria de educación estadounidense, quien luego fue encarcelada por corrupción.

Creo que esta sería la primera parte de nuestra discusión. He mencionado los sujetos sociales, tanto los reconocidos como los no reconocidos. Por ejemplo, hasta ahora, estos sectores de protesta solo han tenido acceso a la Legislatura y a eventos multitudinarios, a veces en alianza y otras veces no. Por último, quiero destacar algo sobre el programa neoliberal. No entraré en detalles, pero es

importante señalar que el programa neoliberal es precisamente el que impulsa la Junta de Control Fiscal. Las disputas en esta transición surgen porque estamos en un momento en el que se busca cambiar el sistema bipartidista, una herencia de la influencia de Estados Unidos en Puerto Rico, donde dos partidos se alternan en el poder y, en última instancia, comparten intereses similares.

Segundo interrogante: ¿Podría enfocarse en algunos de los sujetos clave de las comunidades políticas emancipadoras? Hay varios aspectos que podríamos abordar en este sentido. En cualquier caso, podríamos discutir sobre el anticapitalismo, la resistencia contra el Estado centralizado, la democracia y la participación electoral en estas comunidades políticas establecidas, la violencia sistémica, los procesos de paz, la lucha contra el patriarcado, el antirracismo y la lucha contra la discriminación.

Liliana Cotto Morales: En el segundo tema quiero resaltar algunas características de estos grupos. Cuando hablamos de los sujetos, me refiero a los sujetos sociales que se convierten en actores políticos. También me gustaría destacar que uno de los aspectos actuales es la mayor incorporación de sectores de la población que previamente no estaban afiliados a ninguna organización tradicional.

Las organizaciones tradicionales, como el estudiantado universitario con su histórica tradición de huelgas, desempeñan un papel crucial. Han establecido el modelo de asambleas y el concepto de democracia participativa. También debemos mencionar el movimiento obrero, que en Puerto Rico tiene una historia peculiar. Aunque ha sido un actor protagonista, su trayectoria difiere en cierta medida debido a la influencia de las uniones estadounidenses, como el Movimiento Unido e Independiente, que han generado tensiones en el movimiento obrero local. En los últimos años, hemos observado una recesión en el impacto del movimiento obrero organizado, especialmente debido a los procesos de privatización. La mayoría de los trabajadores sindicalizados en Puerto Rico pertenecen al

sector público, ya que el sector privado tiene restricciones significativas para la formación de sindicatos. Con el desmantelamiento del sistema público, también se desmantelan los sindicatos. Sin embargo, el movimiento sigue siendo vocal y militante.

Por otro lado, el movimiento de mujeres contemporáneo, que ha evolucionado desde los tiempos del movimiento de rescates hasta las luchas en Vieques, sigue siendo una fuerza importante y militante en la actualidad. De hecho, hay un programa de radio dedicado a las mujeres en el movimiento en Vieques en este momento. Es evidente que el movimiento de mujeres sigue siendo una fuerza influyente y activa.

¿Qué significa todo esto en relación con esta nueva ciudadanía? Es una ciudadanía que no muestra interés en los partidos ni las ONG tradicionales, por lo que la política institucionalizada le resulta bastante indiferente. Esto también tiene un impacto significativo. Es decir, mientras discutimos cómo han sido afectadas las organizaciones políticas existentes o las emergentes a partir del verano de 2019, debemos tener en cuenta que hay toda una población, especialmente jóvenes, que se han involucrado en esta crítica al sistema pero que ahora están llenos de rabia, frustración e indignación. Están molestos y listos para pelear. Creo que la transición que debemos abordar implica trabajar en la canalización de esta energía. Algunas iniciativas, ofrecen un espacio organizativo donde la gente puede discutir, pero también pueden desarrollar proyectos económicos y comunitarios de manera autónoma.

Entonces, este tipo de canalización de la rabia está en una etapa incipiente. Podríamos decir que estamos en otra transición. Si una de las transiciones es salir del bipartidismo, ese es un debate que está teniendo lugar tanto en Victoria Ciudadana, el nuevo partido que prácticamente ganó la alcaldía de la capital, como en el Partido Nuevo Progresista, que aboga por el estatus de Estado para Puerto Rico y que, prácticamente, robó esa elección. Esto es un debate a nivel electoral. Pero a nivel organizativo, hay un sector no organizado que está planteando que ya no podemos confiar en las instituciones

existentes, que no valen la pena. Algunos todavía están llenos de rabia, mientras que otros están proponiendo alternativas organizativas. En Puerto Rico, lo que sorprendió a muchos no debería haber sido una sorpresa, porque esto es el resultado de muchos años de luchas sociales, de diversas latencias y procesos que, a través de acciones colectivas de diferentes naturalezas, estaban latentes. Hubo una diversidad de movilizaciones previas impulsadas por diversos sectores sociales, todos presentes en ese momento. Pero también había nuevos actores sociales emergiendo durante el verano de 2019.

Tercer interrogante: ¿Cuáles son los modos bajo los cuales se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia, en lo económico, político, cultural, ambiental y por escalas de actuación (local, nacional, internacional-global)?

Liliana Cotto Morales: Uno de los aspectos que considero crucial para avanzar en este proceso es aprovechar la sólida conciencia social que existe en Puerto Rico, respaldada por un gran nivel de organización comunitaria. Después del huracán y los terremotos, fueron las comunidades, tanto organizadas como no organizadas, las que se movilizaron para abordar las necesidades urgentes. En Puerto Rico, lamentablemente, hemos sido testigos de cómo los gobernantes corruptos manejan grandes sumas de dinero provenientes del gobierno federal, supuestamente destinadas a la asistencia. Sin embargo, este dinero se malgasta de tal manera que rara vez llega a la población necesitada, sino más bien a los allegados del poder, a los llamados “amigos del alma”. Por ejemplo, vemos cómo se utilizan fondos federales para reparar el techo de un pastor pentecostal fundamentalista, mientras que muchos puertorriqueños, desde el huracán María en 2017, siguen sin un techo digno. Este tipo de situaciones son lamentablemente comunes en Puerto Rico.

Antes de abordar mi interpretación de la tercera pregunta, quiero destacar la necesidad de trabajar en tres niveles. En primer

lugar, el nivel de servicio para satisfacer las necesidades básicas. Históricamente, en Puerto Rico, algunos grupos marxistas-leninistas mostraron cierto desdén hacia estas necesidades básicas, enfocándose principalmente en la lucha de clases a nivel macro. Creo que es importante reconocer y abordar estas necesidades básicas como punto de partida, pero también es crucial trabajar en lo que yo llamo la construcción de resistencias. Esto se logra a través del fomento del pensamiento crítico y el uso de metodologías como la educación popular, de la cual soy una firme defensora.

Además, en un segundo nivel, es esencial adoptar enfoques comprometidos, como la filosofía y teología de la liberación, así como la educación popular centrada en los pobres, quienes representan la mayoría en nuestros países. Debemos aprender a comunicarnos y establecer relaciones interculturales entre los pobres y otros grupos que, aunque no son tan pobres, han optado por solidarizarse con los menos privilegiados. Este proceso de desarrollo del pensamiento crítico permite que una mujer negra de un barrio en Puerto Rico se dé cuenta de algo sorprendente: cada vez que hay un huracán, su comunidad es la más afectada, dejándola sin techo. Esta situación no ocurre de manera aleatoria; es sistemática y afecta de forma desproporcionada a los sectores populares afrodescendientes y empobrecidos. En mi opinión, esta toma de conciencia es fundamental para la resistencia.

Finalmente, el tercer nivel es lo que yo denomino como la insurgencia. Esta etapa implica una toma de conciencia y participación activa en el análisis de la situación. A partir de esta comprensión más profunda, surgen nuevos proyectos que pueden ser antisistémicos. Aquellas personas comprometidas con la transformación antisistémica deben prestar atención a estos nuevos desarrollos, ya que probablemente haya mucho por aprender y enseñar en este ámbito. Por lo tanto, estos tres niveles representan una progresión: servicio, resistencia e insurgencia.

He organizado las variantes que nos presentaron, considerando cuán receptiva está la población puertorriqueña en general, no solo

las izquierdas. Me centré en sujetos sociales y políticos, en sujetos críticos, dejando de lado a los de derecha, cuyas posturas no suelen ser dialogantes. Por un lado, destaco el tema de la violencia sistémica y los procesos de deliberación. En este sentido, hemos observado ciertos esfuerzos institucionalizados, como la Cátedra UNESCO que existe en la Universidad de Puerto Rico desde hace más de veinte años. Esta cátedra ha generado un impacto significativo y su trabajo está disponible en línea a través de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la Universidad de Puerto Rico. Esta cátedra representa una institucionalización de los movimientos de paz que surgieron en los años noventa, los cuales contaron con el apoyo de la Teología de la Liberación y destacados teólogos como Samuel Silva Gotay y Luis Rivera Pagán, quienes son contemporáneos y colegas de figuras como Gutiérrez y Enrique Dussel en otros lugares del mundo.

Por otro lado, en América Latina, la agenda antipatriarcal ha tenido un gran impacto, especialmente en términos de los grupos de mujeres y feministas. Es importante señalar que, en algunos casos, se distingue entre grupos de mujeres y grupos feministas. Por ejemplo, durante la lucha en Vieques, el grupo que inició la Alianza de Mujeres Viequenses era feminista. Sin embargo, en ese momento histórico, se percibió que organizar a las mujeres en Vieques bajo el nombre de Alianza de Feministas de Vieques podía generar cierta resistencia. Por ello, se decidió nombrarla Alianza de Mujeres de Vieques. Esta sensibilidad respecto a la nomenclatura utilizada refleja la importancia de considerar con quiénes estamos trabajando y qué términos son más apropiados en cada contexto.

Lamentablemente, ha surgido en Puerto Rico un movimiento de derecha que hereda muchos discursos latinoamericanos y que promueve la eliminación de lo que denominan “ideología de género”, considerándola un disparate teórico. Este movimiento ha logrado una fuerte presencia en la Legislatura y ha desatado un intenso debate sobre temas como el aborto, que es particularmente relevante en Puerto Rico. De hecho, considero que el movimiento de

mujeres en Puerto Rico es un tema que puede estudiarse desde la perspectiva de la colonialidad. A pesar de la influencia conservadora, Puerto Rico ha logrado avances significativos en el ámbito de los derechos de las mujeres, superando a veces a las repúblicas nacionales de América Latina. Esto se debe en parte al contacto directo con el mundo estadounidense, donde las leyes, como la legalización del aborto, tienen un impacto directo en Puerto Rico. Sin embargo, también estamos experimentando la influencia del movimiento conservador antiaborto de Estados Unidos. Incluso ha habido propuestas para criminalizar el aborto y encarcelar a mujeres que lo practiquen. A pesar de estas posturas extremas, este movimiento conservador cuenta con una considerable simpatía pública en Puerto Rico.

Otro aspecto destacable es que tanto el movimiento de mujeres como el ambientalista lograron establecer instituciones en el Estado alrededor de los años 2000 y 2004. Por un lado, se creó la Procuraduría de la Mujer, aunque lamentablemente en la actualidad este gobierno está desmantelándola. Por otro lado, se estableció un área de defensa de los recursos naturales. En la actualidad, el movimiento ambiental enfrenta fuertes embates debido a políticas neoliberales y a una ley que otorga paraísos fiscales a corporaciones estadounidenses que no pagan impuestos en Puerto Rico. Estas corporaciones compran grandes extensiones de terreno, playas y comunidades, lo que resulta en el desplazamiento de la población local. Esta problemática del desplazamiento, junto con las preocupaciones ambientales, ha generado una gran militancia entre los sujetos sociales, quienes están emergiendo como sujetos políticos.

El segundo tema en términos de prioridad es la democracia y los procesos electorales. Aquí surge una tensión dentro de la misma izquierda, ya que hay sectores de sujetos políticos de izquierda que no confían en las elecciones, mientras que otros creen que es crucial avanzar en la instauración de principios y prácticas democráticas. Personalmente, considero que los movimientos estudiantiles y las huelgas universitarias han sido ejemplos sobresalientes en este

aspecto a lo largo de los años. Por lo tanto, este tema es de relevancia constante y continua.

El tema de la violencia también es crucial, ya que el Estado, al igual que en Chile, reprime a los manifestantes. Sin embargo, también es importante abordar la violencia estructural y la violencia institucionalizada, que son aspectos fundamentales que requieren atención

El tercer tema es la lucha contra el racismo, que ha cobrado una importancia significativa en los últimos años, especialmente a raíz del Decenio de las Naciones Unidas y del Decenio de la Afrodescendencia. Personalmente, he participado en la organización de varios congresos afrodescendientes. Los primeros tres congresos fueron realizados con recursos limitados, buscando financiamiento aquí y allá. Sin embargo, los dos últimos congresos han sido multitudinarios gracias al apoyo de la Fundación Mellon en Estados Unidos. Aunque esta fundación tiene sus raíces en la derecha política, actualmente está financiando proyectos relacionados con la lucha afrodescendiente. En Puerto Rico, como colonia, enfrentamos desafíos adicionales para acceder a fondos internacionales, lo que nos coloca en una posición desventajosa en comparación con otros movimientos de países independientes. También contamos con una organización de larga data llamada Colectivo Ilé, que ha estado profundamente comprometida con la concienciación sobre la negritud. Tienen incluso un programa de radio llamado “Negras”, donde no solo abordan el tema de la negritud, sino también discuten sobre alternativas y opciones sexuales, desde lo binario hasta lo no binario, entre otros aspectos

En última instancia, creo que las dos luchas más poderosas y que deben ser más generalizadas son la lucha contra el enfoque estado céntrico y el anticapitalismo. La resistencia al neoliberalismo también está en la agenda, aunque se enfrenta a limitaciones debido al acceso limitado que tienen los grupos a los recursos y los medios de comunicación. Como descubrí en mi investigación, y como los jóvenes militantes han señalado, sin dinero no hay acceso a los medios

de comunicación, por lo que todo se reduce a las redes sociales. Por lo tanto, parte de nuestra tarea es desarrollar un pensamiento crítico y una insurgencia a través de proyectos alternativos que sean anticapitalistas, mientras simultáneamente nos involucramos en acciones de servicio y resistencia.

Este es uno de los elementos clave para avanzar en Puerto Rico, donde los diversos sujetos sociales luchan por sobrevivir en medio del asedio de la Junta de Control Fiscal y de los financieros estadounidenses. La población se está empobreciendo cada vez más debido a la privatización acelerada de servicios básicos como la energía eléctrica y la educación pública. Además, se está buscando privatizar el suministro de agua. A pesar de las constantes manifestaciones y marchas que se realizan desde el año 2019 en contra de la privatización de diversos servicios, aún no hemos logrado consolidar un movimiento lo suficientemente grande como para representar una amenaza para aquellos que actualmente controlan la política en Puerto Rico, al menos en el ámbito tradicional.

Debate

Pregunta: En primer lugar, sería importante si nos pudiera recordar el contexto del chat que ocurrió con el gobernador. Segundo, me gustaría discutir el hecho de que Obama liberó a Oscar López, un líder independentista puertorriqueño que había estado encarcelado durante décadas, al mismo tiempo que se implementaba la ley de control fiscal en Puerto Rico, lo cual puede parecer contradictorio.

Liliana Cotto Morales: El chat es un tema de gran importancia. El gobernador de Puerto Rico, siendo relativamente joven, llenó el gobierno colonial de Puerto Rico con miembros de su partido, quienes comparten algunas características comunes: son jóvenes que se mueven en el mundo financiero, se identifican como estadounidenses y están involucrados en actos de corrupción. Este grupo

de amigos cometió el error de mantener un chat privado. En ese chat, se expresaron comentarios despectivos y misóginos, como referirse a la alcaldesa de San Juan con términos desagradables y expresar deseos de su muerte. También se burlaron de personas con sobrepeso y entre otros, de Ricky Martin por ser homosexual. Es importante destacar que la diáspora puertorriqueña es un elemento crucial en la lucha por Puerto Rico en la actualidad. Cuando hablamos de los puertorriqueños, debemos incluir a la diáspora, ya que hay más puertorriqueños fuera de la isla que en ella.

Fueron 180 páginas de conversaciones de ese tipo entre amigos. El “chat” fue divulgado por la periodista Sandra Rodríguez Cotto y por El Centro de Periodismo Investigativo. Estos recibieron el documento digital de uno de los participantes del “chat” que había caído en desgracia con el gobierno. Cuando salió a la luz, desató toda esta situación que comparto con ustedes. Fue un escándalo que no solo afectó a los independentistas o a la comunidad LGBTQ+, sino que también afectó a diversas situaciones sociales que fueron degradadas y ridiculizadas. Por eso, al principio mencioné que el tema de la ética es fundamental, ya que estas conversaciones revelaron un ataque brutal y personal a diversos sectores de la sociedad.

Este escándalo generó una gran indignación. Es importante destacar que este estallido social no estuvo compuesto solo por personas mayores, sino que contó con una gran cantidad de jóvenes. La Colectiva Feminista en Construcción lideró protestas para denunciar lo que llamaron la falta de vergüenza del chat, y así comenzaron a convocar a más personas. Algunos llegaron a caballo, otros en motocicleta, y otros se unieron con sus grupos de yoga. Esta movilización también estuvo influenciada por la situación de los fallecidos durante el huracán María. Cuando Trump visitó Puerto Rico, el entonces gobernador le informó que habían fallecido solo sesenta y tres personas, pero un estudio de Harvard reveló que la cifra era casi 4,445. Este dato, junto con los letreros que mostraban más de 4,445 muertos, contribuyó a las manifestaciones durante el verano de 2019, destacando la importancia de recordar a todas las víctimas

de esta tragedia. Mucha de la gente estaba ofendida por la manera que se trató a los muertos.

Hubo una especie de provocación generalizada, distinta a lo que ocurrió durante la lucha en Vieques, que también fue bastante masiva y en la que estuve bastante involucrada. De hecho, formamos un grupo para crear unas guías de desarrollo sostenible para Vieques, las cuales se integraron al plan gubernamental de la isla, aunque lamentablemente ningún alcalde las cumplió. Ahora mismo, la gentrificación está devastando la pobre isla de Vieques, que ni siquiera tiene un hospital. Pero, bueno, esas son las consecuencias de tener gobiernos corruptos. En esa lucha, a diferencia de lo que sucedió en Vieques, donde personas ajenas a la isla apoyaban desde fuera, y contrario a las ocupaciones de tierra, nosotros, los que no estábamos participando directamente en la toma de tierras, estábamos respaldando la movilización del 2019. Creo que lo interesante de esta situación es que todos éramos actores, sujetos políticos agraviados por el sistema. Por eso tuvimos 38 asambleas por el pueblo, pero luego llegó la pandemia y detuvo todo.

Con respecto al carácter contradictorio de la figura de Obama, también sucedió lo mismo en Cuba. Aunque su política logró restablecer las relaciones políticas y comerciales con Cuba no creo que comprendiera la naturaleza de los procesos comunitarios y de autogestión en ese país. En Cuba encontramos a nivel de sociedad civil, grupos que enfrentan situaciones similares a las que se viven en Puerto Rico. Tales como: sistema electoral, la educación, el envejecimiento, la migración y la salud, entre otros. Y para concluir, quiero recordarles la frase del padre de la patria puertorriqueña Ramón Emeterio Betances: “Sí, América para los americanos, pero las Antillas para los antillanos.

Las caravanas migrantes

Daniel Villafuerte

■ Doi: 10.54871/ca25es8b

Primer interrogante: ¿Qué procesos sociopolíticos cuestionan a las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno y los Estados nacionales, y qué aportaciones instituyentes refuerzan políticas de pertenencia comunitarias?

Daniel Villafuerte: Abordar el contexto de las caravanas es un tema sumamente específico y complejo, con varias dimensiones a considerar. Primeramente, nos referiremos al contexto centroamericano, en particular a las caravanas centroamericanas, aunque actualmente observamos una diversificación en este fenómeno. La migración ha experimentado un notable incremento en tiempos de paz neoliberal, superando incluso los niveles registrados durante la época de guerra en Centroamérica. Este crecimiento plantea una serie de interrogantes, vinculadas a la dinámica y la estructura económica extractivista que define a los países centroamericanos, incluyendo las maquiladoras. Esta estructura se caracteriza por una concentración del ingreso, una pobreza aguda, altos índices de desempleo y subempleo, así como una falta de políticas sociales estatales. Además, la región se enfrenta a problemas como la corrupción, el narcotráfico, las pandillas y elevadas tasas de extorsión y homicidios, lo que la sitúa como una de las zonas más peligrosas del mundo.

Otros elementos que contribuyen a esta dinámica de movilidad humana incluyen desastres naturales como el huracán Mitch de 1998, que causó una devastación considerable en varios países, especialmente en Honduras. Asimismo, los terremotos de 2001 en El Salvador, que resultaron igualmente catastróficos, dejaron un saldo de alrededor de 2.000 muertos, miles de heridos, 200 mil viviendas destruidas, más de 1 millón de damnificados y afectaron a 1500 escuelas, con pérdidas económicas estimadas en más de 1 mil millones de dólares. Además, en medio de la pandemia, en noviembre de 2020, dos tormentas devastadoras afectaron a 11 millones de personas, causando 200 muertos y dejando decenas de desaparecidos y desplazados, así como una destrucción masiva de infraestructura. Se estima que estas tormentas generaron pérdidas económicas de alrededor de 10 mil millones de dólares en Honduras.

Además de lo mencionado, existen otros factores estructurales significativos en la región, como el Corredor Seco Centroamericano, una zona donde las lluvias son escasas y que alberga a aproximadamente tres millones de campesinos que enfrentan la falta de precipitaciones, especialmente en la porción de Guatemala de esta franja. Durante el periodo actual, de abril a agosto de 2023, se le conoce como la “estación del hambre” debido a que solo el 30 % de las tierras son fértiles, lo que resulta en escasez de trabajo y falta de demanda de jornaleros. Como consecuencia, muchas personas se ven obligadas a migrar internamente dentro del país o hacia el extranjero, especialmente a México o Estados Unidos. En el año 2020, un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reveló que aproximadamente 1.2 millones de personas hondureñas se encontraban en situación de crisis de seguridad alimentaria.

Junto con el contexto centroamericano, existe otro contexto que podría considerarse como la respuesta desafiante a todas estas corrientes migratorias, estos flujos migratorios que comenzaron a ocurrir después del proceso de pacificación. Un punto de inflexión importante en este sentido fueron los atentados del 11 de septiembre

de 2001 en Estados Unidos, los cuales provocaron una reestructuración en los planteamientos de seguridad no solo en Estados Unidos, sino a nivel hemisférico y global. Este evento condujo a la creación del Departamento de Seguridad Nacional y de varias instituciones destinadas a proteger las fronteras. Se produjo un desplazamiento de la atención de la frontera norte a la frontera sur, desde el río Bravo hasta el río Suchiate. En este contexto, se planteó una agenda de seguridad que retrataba a los migrantes como una amenaza o peligro. Este planteamiento coincidió con los esfuerzos que se venían realizando desde el inicio de la administración del presidente Fox en México, donde se estaba negociando una reforma migratoria integral conocida como la “enchilada completa”, que incluía la posibilidad de obtener la ciudadanía para los migrantes que ya se encontraban en Estados Unidos.

Esto, por supuesto, se ve interrumpido cuando México decide no condenar a los supuestos terroristas implicados en los ataques a las Torres Gemelas, lo que lleva a una serie de repercusiones. En respuesta a las presiones de Estados Unidos, el presidente Fox comienza a ceder y se establece en México una plataforma para el registro de migrantes, que incluye registros biométricos compartidos con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Más adelante, durante el mandato de Calderón, se implementa la llamada Iniciativa Mérida, que refuerza las políticas antimigrantes y, en particular, las políticas destinadas a contener el flujo migratorio proveniente de Centroamérica. Además, esta situación se complica aún más con la llegada de muchos migrantes extracontinentales de África, Asia y la parte Sur de América Latina.

Pasamos de la iniciativa Mérida, con Calderón y Peña Nieto, al Acuerdo Bicentenario con el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Básicamente, aunque hay algunas modalidades diferentes, en términos sustantivos, se mantiene esta cooperación muy estrecha del gobierno de la 4T con el aparato de seguridad de Estados Unidos. En medio de estas dos iniciativas, la Iniciativa Mérida y el Acuerdo Bicentenario, nos encontramos con una administración

como la de Donald Trump, que tuvo un discurso extremadamente agresivo hacia las personas migrantes, con amenazas muy claras hacia el gobierno de Peña Nieto en su última fase, cuando ya comenzaban las caravanas.

Con el gobierno de la 4T, se planteó la necesidad de atacar las condiciones estructurales que generan la migración, un enfoque muy interesante. Sin embargo, este planteamiento nunca llegó a cuajar en el periodo de Donald Trump. Por el contrario, las amenazas aumentaron y obligaron al gobierno de López Obrador a instituir medidas de seguridad para contener los flujos migratorios. Así es como se firmó un acuerdo, aunque de manera velada, considerando a los migrantes como portadores del mal, del narcotráfico. Incluso hoy, en la discusión más reciente, hay acusaciones de que trafican con fentanilo. Esto genera un mayor control del proceso migratorio, donde la llamada “industria de la migración”, particularmente los coyotes y los polleros, están haciendo un negocio muy jugoso, estimado entre 2.500 y 5.000 millones de dólares al año.

En medio de todo esto vamos a ver, justamente, el surgimiento de las migraciones masivas, como la Gran Migración de octubre del 2018. Esa es, digamos, la culminación de una serie de caravanas pequeñas, incluyendo las caravanas de madres de migrantes desaparecidos. En octubre será explosivo, muy visible. Curiosamente, coincide en el contexto internacional con la aprobación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, conocido también como el Pacto de Marrakech en diciembre de 2018. En términos generales, este va a ser el contexto en el cual se inscribe esta caravana que emerge en octubre de 2018 con una intención muy clara: llegar a Estados Unidos. También vale la pena decir que un poco antes comienza a registrarse un fenómeno muy interesante en México, que es justamente la solicitud de refugio. Esta solicitud de refugio empieza a crecer de manera extraordinaria en los años subsecuentes, de manera que, en los últimos tres años, 2021, 2022 y 2023, vamos a tener un crecimiento extraordinario. En 2021 tuvimos un registro de 129.751 solicitudes. En 2022, tuvimos una caída

leve con 118 mil solicitudes y en lo que va del 2023, ya hasta el mes de abril, alrededor de 49 mil solicitudes.

Es importante señalar que de este monto global de solicitudes de asilo hay una composición bien interesante. Por ejemplo, en el 2021, de este volumen de solicitudes, el 39 % correspondió a la población haitiana y el 27 % a población hondureña. En el 2000, hay que recordar que, en términos numéricos, fue la gran explosión de la movilidad haitiana con alrededor de 50 mil solicitudes. En el 2022, tenemos que Honduras representó alrededor del 26 % de todas las solicitudes, y aquí aparece Cuba con el 15 % y Haití con el 14 %. Es decir, hubo una baja muy importante con respecto al 2021. Pero ya en el 2023, en estos meses que llevamos del 2023, tenemos una población solicitante de refugio, haitiana, que representa el 38 % y Honduras el 22 %. Si sumamos la población solicitante de refugio del 2021 y 2023 son muy cercanas a las 300 mil solicitudes.

Esto tiene implicaciones, porque hay un sobrepasamiento de las capacidades del Estado mexicano para atender el procesamiento de las solicitudes. Por otro lado, hay un desbordamiento de la frontera sur y una serie de contradicciones que se van dando en Tapachula, porque ese es el epicentro donde se va a concentrar la mayor parte de las solicitudes de refugio. Esto sería más o menos el contexto general. Vemos pues que en 2018 hay una irrupción de esa invisibilidad que caracterizaba la migración. Era una migración clandestina, por decirlo de alguna manera, y hace suyo el derecho de migrar. Y esto ocurre también en medio del recrudescimiento de las medidas de control y de la violencia que se va a observar justamente en todos los países centroamericanos, particularmente en El Salvador y Honduras. Obviamente, frente a esta avalancha, esta ola migratoria, esta gran caravana, pues el Estado mexicano, las autoridades de ese momento, se ven rebasadas. Hay un esfuerzo de contención, barricadas, uso de gas lacrimógeno. Las imágenes del puente internacional Rodolfo Robles, que comunica a México con Guatemala, muestran migrantes que se arrojan al río Suchiate para evadir los ataques de la policía.

Segundo interrogante: ¿Cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras y a qué reacciones se enfrentan?

Daniel Villafuerte: Toda esta organización de la caravana va a configurar justamente un contrapoder organizativo desde el campo de lo social, frente a todo el marco democrático constitucional que instituye el derecho internacional de los derechos humanos. Se podría decir que estas caravanas no constituyen un movimiento social en su sentido clásico. Aunque hay todo un repertorio muy interesante. Constituyen una estrategia de decisión individual de migrar con alcances identitarios que son frenados por la relación que se establece con las autoridades, es decir, el procesamiento. Por ejemplo, las solicitudes de refugio se hacen de manera individual y no colectiva. Esta caravana, esta gran cantidad de gente, evidentemente no aspira a un cambio en el sistema, sino más bien su aspiración es insertarse en el mercado laboral, tener una opción. Y ahí una de las grandes contradicciones es cómo finalmente la migración sigue al capital.

¿Y aquí hay una paradoja, cierto? Donde, desde la perspectiva del pensamiento crítico, se decía que el movimiento obrero era contra la explotación. Pero aquí se sigue al capital, porque lo que conviene es tener un empleo y ser explotado. Esta es una de las grandes paradojas y el migrante va a sufrir una superexplotación, desde que sale. Si sale con un pollero, ya tiene que pagar la cuota del pollero, entonces ya hay una explotación. Luego, todo lo que ocurre en el camino: el secuestro, la extorsión, las autoridades migratorias o del crimen organizado. Y luego, cuando llega al lugar de destino, también se somete a una explotación. Es decir, hay una triple explotación de los migrantes en este marco de este capitalismo neoliberal salvaje.

Tercer interrogante: ¿Cuáles han sido los modos bajo los que se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas

de pertenencia, en lo económico, político, cultural, ambiental y por escalas de actuación (local, nacional, internacional-global)?

Daniel Villafuerte: Estas caravanas también van a definir sus alcances y limitaciones en un marco político normativo de naturaleza extraterritorial. Hay que considerar todo este ámbito de lo que constituye el proceso de tránsito. Desde Centroamérica, pasando por México y Estados Unidos. ¿Por qué ocurre esto? Porque al fin de cuentas son poblaciones móviles. No pertenecen exactamente a un territorio determinado y abarcan un espectro muy amplio de lo que se ha llamado el espacio social transnacional. Esta movilidad humana establece un campo de batalla muy interesante, también en lo discursivo. ¿Dónde se va a articular lo político y la política? Hoy lo vemos, por ejemplo, en cómo se ha exacerbado este campo, cómo gobernadores como el de Texas y Florida han radicalizado su postura contra los migrantes, porque estamos finalmente en un contexto político preelectoral, como ocurrió también en administraciones pasadas. Acordémonos de lo que ocurrió con Barack Obama, que utilizó el tema migratorio para su campaña y para ganar votos con la promesa de una reforma migratoria. Tuvo una actuación contradictoria, calificado como el deportador en jefe y jugando este doble discurso a favor de una reforma migratoria.

Entonces, las caravanas podrían considerarse un movimiento intermitente, una acción social que irrumpe en ciertos momentos con un propósito muy específico. No tiene una estructura duradera; en su contenido, hay un proyecto aspirativo individual o familiar. Además, los instrumentos jurídicos instituidos se aplican de manera casuística, otorgando visas humanitarias de manera individual y visas temporales por 45 días para transitar por el país. En todo este repertorio de movilización, hay cuestiones importantes a señalar en ese campo de batalla.

Primero, hay un cuestionamiento muy fuerte hacia las fronteras, un proceso de desfronterización y una presión hacia el gobierno federal de México y el gobierno de Estados Unidos. Un hecho

interesante es que en 2019 se formó la Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas en Tapachula, integrada por 3.000 afiliados de varios países de África. Comenzaron a presionar fuertemente, realizando un plantón frente a la estación migratoria Siglo XXI –la más grande de América Latina–, exigiendo el paso libre y la tarjeta de residencia en México. Lograron su propósito en una negociación con las autoridades migratorias.

En 2019, también se produjo un mitin en el interior de las instalaciones de Siglo XXI, debido al hacinamiento y las condiciones precarias de los migrantes. Hubo un sobrecupo significativo, con 3.200 personas, cuando la capacidad era para 900. También se recurrió a mecanismos legales, como el amparo de más de 800 migrantes para evitar su detención por parte de las autoridades mexicanas en su tránsito hacia Estados Unidos.

En los últimos tiempos, se han organizado numerosas caravanas desde Tapachula, con demandas que incluyen servicios médicos, empleo, educación, vivienda y apoyos gubernamentales. En julio de 2022 se organizó una de las caravanas más numerosas, integrada por 15 mil miembros, que intentaba romper el cerco hacia la capital mexicana y Estados Unidos. Este año se observó una segunda caravana, denominada “Viacrucis Migrante 2023”, integrada por entre 3.000 y 4.000 miembros, con una variedad de perfiles, incluyendo familias, adolescentes, adultos solos y niñas y niños, algunos de ellos no acompañados. Estos elementos constituyen el proceso de formación de las caravanas y el repertorio de demandas que plantean hacia el gobierno federal.

Debate

Pregunta: A pesar de tener lineamientos y tratados internacionales que teóricamente deberían proteger a las personas en movilidad humana, seguimos vinculando la migración con la economía, lo cual genera procesos de securitización en la región. ¿En qué

medida, en otros espacios académicos o incluso desde el discurso gubernamental, ya sea a través de Donald Trump o en la actualidad con la 4T, se reduce el fenómeno social de la movilización y se resta la agencia de las personas migrantes al señalar factores exógenos que las manipulan? Me refiero al discurso que implica la participación de George Soros y otros poderes económicos y políticos detrás de estas movilizaciones, lo cual, desde mi perspectiva y la de otros activistas y académicos, despoja de su agencia a quienes buscan mejorar su vida en contextos precarizados, como en sus países de origen o durante su tránsito por México.

Daniel Villafuerte: Creo que este tema es sumamente relevante. En medio de la politización de la migración y del fenómeno migratorio en general, en 2018 se especuló sobre la posible injerencia de actores externos, especialmente de Pueblo Sin Fronteras. Se mencionó que este grupo recibía financiamiento del magnate Soros con la clara intención de influir en las elecciones intermedias de noviembre de 2018 en Estados Unidos. En ese momento se jugaban varios elementos importantes, incluida la posible reelección de Donald Trump, que finalmente no ocurrió. He escuchado y leído afirmaciones contundentes al respecto, especialmente por parte de personas cercanas a los migrantes como el padre Solalinde, quien asegura que detrás de Pueblo Sin Fronteras hay intereses oscuros apoyando la agenda de la Secretaría de Seguridad. En ese momento, esta institución también planteaba la existencia de intereses oscuros que estaban agitando el ambiente político en Estados Unidos.

Creo que efectivamente se trata de una especie de teoría de conspiración. Después de las elecciones intermedias, las caravanas migratorias continuaron su curso. Incluso se llegó a intervenir desde la Unidad de Inteligencia Financiera. Se bloquearon algunas cuentas bancarias debido a la observación de que estaban recibiendo financiamiento para las caravanas. Recuerdo que incluso detuvieron a Irineo Mujica por un tiempo, pero luego lo liberaron al no encontrar nada con qué acusarlo. Él ha sido un activista comprometido

con estos procesos de movilización desde siempre. Por lo tanto, creo que esta perspectiva de la teoría de conspiración es bastante discutible, ya que hay una realidad muy cruda que se puede ver y palpar en los países centroamericanos. Con esto, creo que estoy ampliando el panorama, especialmente en la parte final.

He notado que se ha producido mucha literatura sobre las caravanas, pero aún quedan preguntas abiertas en cuanto a la posibilidad de elaborar conceptos sólidos al respecto. Sería interesante abordar este episodio de las caravanas desde una perspectiva más amplia y comprensiva, incluyendo un análisis geopolítico, aspecto que, a mi parecer, ha sido subestimado en gran medida hasta ahora a pesar de la amplia visibilidad que han tenido las caravanas y su impacto mediático e internacional, con la presencia de corresponsales de importantes agencias de noticias francesas, rusas, estadounidenses, entre otras, aquí en Tapachula, observando el movimiento de las caravanas, los migrantes y los solicitantes de refugio.

A pesar de todos estos elementos, considero que es necesario examinar con más detenimiento la dinámica y los posibles horizontes futuros de estas movilizaciones. Hasta el momento, no disponemos de suficientes elementos para contemplar la conformación de una agenda que desafíe el orden instituido. Se apela, en gran medida, a los derechos humanos como una de las banderas más importantes, dado que existe una violación recurrente y sistemática de los mismos, aunque en el discurso oficial se presente otra perspectiva y se cuestione la política migratoria y las medidas de contención.

Las caravanas han proporcionado diversos aprendizajes. Uno de ellos es la toma de conciencia de su realidad, que trasciende las fronteras de sus países de origen. Otro aspecto relevante es la resistencia mostrada por muchos de los participantes, quienes han intentado llegar a la frontera norte de Estados Unidos en repetidas ocasiones. Algunos testimonios de miembros de las caravanas relatan sus múltiples intentos, lo que refleja una notable resistencia para permanecer en su lucha. Además, han comprendido que

viajar en caravana les ofrece una posibilidad de minimizar riesgos y costos, ya que los coyotes –intermediarios en el proceso migratorio– cobran tarifas considerables, que oscilan entre los dos mil y quince mil dólares, dependiendo de diversos factores.

Otro aprendizaje importante es que la presión ejercida sobre el Estado ha dado resultados significativos, suavizando de alguna manera las medidas represivas ya que, desde el punto de vista político, se cuida la imagen del gobierno. Por ejemplo, en la última marcha de abril del 2023, se impidió su avance solo hasta 40 kilómetros, tras lo cual se iniciaron negociaciones que condujeron a la concesión de visas temporales y humanitarias. Esto evidencia una estrategia de negociación y un logro parcial de los objetivos planteados.

Es fundamental reconocer que este proceso también visibiliza una realidad compleja en la que se expulsan migrantes de manera constante desde los países de origen. Aunque se destaque el discurso heroico en torno a los migrantes, en realidad, detrás de esto se encuentra el flujo masivo de remesas que constituyen una parte significativa del ingreso en México y Centroamérica, representando hasta el 20 % del Producto Interno Bruto en algunos casos. Sin embargo, los gobiernos de la región muestran una contradicción al bloquear la movilidad de sus ciudadanos mediante acuerdos como el de tercer país seguro, que limita su tránsito incluso en la propia región centroamericana.

En un escenario crítico como el actual, donde se anuncia la eliminación del Título 42, utilizado como pretexto para expulsar migrantes en la frontera sur de Estados Unidos durante la pandemia, se prevé una respuesta inmediata por parte de las autoridades, como el envío de efectivos militares adicionales para reforzar la seguridad en la frontera. Esto ha generado una avalancha de migrantes intentando cruzar a territorio estadounidense, lo que refleja la urgencia de abordar de manera integral y humanitaria esta compleja situación.

Pregunta: Es muy estimulante pensar en la transición de acciones colectivas a movimientos sociales, sujetos políticos y la formación de comunidades de pertenencia, como mencionas, que suelen ser efímeras y están vinculadas a tránsitos pasajeros, entre otros aspectos. Sin embargo, tengo algunas inquietudes relacionadas con el contexto geopolítico en Centroamérica y México. Se ha hablado –tanto desde el discurso de la 4T como desde el gobierno estadounidense– sobre la necesidad de abordar los factores de expulsión que derivan de contradicciones sociales. En este sentido, se mencionan iniciativas como el Triángulo del Norte y los acuerdos de Tuxtla, que surgieron antes de la era Trump y están relacionados con la prosperidad y la seguridad. ¿Podrías ofrecernos alguna orientación o perspectiva al respecto, Daniel?

Daniel Villafuerte: Es una pregunta muy relevante que considero esencial abordar. Existe un contexto geopolítico que debe incluirse en este análisis. Desde el punto de inflexión que marcó el 11 de septiembre de 2001, se ha observado una preocupación creciente por la necesidad de contener la violencia asociada a la migración, el narcotráfico, entre otros aspectos. El crimen organizado también se ha vuelto parte de la agenda migratoria. Por ejemplo, durante la crisis de los niños migrantes en 2014, Barack Obama presionó a los gobiernos de México y Centroamérica para proponer acciones de contención. Esto llevó a la implementación del programa Frontera Sur o Plan Sur en México, que estableció una serie de retenes formales para inspeccionar vehículos y cargas en puntos estratégicos de la frontera sur, como en Huixtla, muy cercana a Tapachula. En el caso de las Margaritas, en la frontera con Guatemala, y más hacia el norte por Palenque y que colinda con Tabasco, en Playa de Catazajá, se implementó toda una estrategia de contención, con una visión militar evidente.

El Comando Sur ha estado involucrado en múltiples ocasiones en Tapachula y en esta zona de la frontera sur de México. En cuanto a Centroamérica, se planteó la Iniciativa para la Seguridad y la

Prosperidad de América Central, un programa que resultó ser un fracaso. Aunque Obama había prometido recursos significativos, inicialmente mil millones de dólares para su operación, los gobiernos centroamericanos no contaban con los 15 mil millones de dólares necesarios para hacerlo realmente efectivo. Por lo tanto, la iniciativa para la seguridad y la prosperidad no tuvo éxito y finalmente fracasó.

Si hacemos un recuento de todas las iniciativas que se han implementado, parece que son iniciativas que han fracasado. En la 4T, el Gobierno mexicano ha reiterado la necesidad de abordar las causas estructurales que impulsan la migración. A través de programas como Sembrando Vida, se están destinando recursos significativos para evitar que los jóvenes se vean obligados a migrar. Sin embargo, si comparamos la cantidad de remesas que reciben los países centroamericanos, lo que aporta el gobierno mexicano es insignificante. Además, en términos comparativos, los beneficios que un joven puede obtener a través de un programa como Sembrando Vida no se equiparan con lo que podría ganar trabajando en Estados Unidos. Es evidente que la decisión de migrar sigue siendo tentadora para muchos.

También cabe mencionar otras iniciativas adoptadas por la administración Biden-Harris, como su versión del programa Sembrando Vida, al que llaman Sembrando Oportunidades, agregando recursos adicionales. Sin embargo, la cantidad de recursos asignados resulta irrisoria en comparación con otros compromisos financieros de la administración, como los millonarios aportes en la guerra de Ucrania, que se estiman en quince mil o incluso veinticinco mil millones de dólares. Esta discrepancia plantea interrogantes sobre la gestión de la migración en términos de crisis temporales, ya que los migrantes son una parte fundamental para impulsar procesos de acumulación de capital mediante mano de obra barata. ¿Quién cosecha los campos en California y otros estados de Estados Unidos? Los migrantes. ¿Quiénes trabajan en la industria de la construcción y en numerosos servicios, como

restaurantes, entre otros? Una vez más, los migrantes. Esta realidad no solo refleja la dinámica económica y de acumulación en Estados Unidos, sino que también plantea interrogantes sobre las políticas migratorias y su relación con la mano de obra migrante. Este fenómeno se vuelve aún más relevante al considerar que los migrantes, al ser una mano de obra barata y en muchos casos ilegalizada, no reclaman derechos laborales ni buenas prestaciones, lo que ayuda a mitigar la inflación subyacente y plantea una serie de consideraciones laborales.

Pregunta: ¿Hay alguna forma en que las alianzas entre las caravanas y grupos más o menos organizados, así como los grupos locales, aborden la amplia agenda de las caravanas, que incluye cuestiones nacionales, supranacionales e internacionales, manteniendo una presencia local? Además, solo para aclarar, ¿el viacrucis de 2023 es lo mismo que la Caravana de la Resistencia desde el sur, o son procesos organizativos distintos?

Daniel Villafuerte: Quisiera destacar la importancia de la alianza con las caravanas, especialmente a nivel de ONGs. Ya mencionamos el valioso acompañamiento moral y jurídico proporcionado, por ejemplo, por Pueblos sin Fronteras. Junto con ellas, hay una variedad de otras ONGs, particularmente destacadas en Tapachula, que brindan asesoría y apoyo. Esta colaboración ha facilitado la organización y presentación de una gran cantidad de demandas legales y amparos. Todo esto ha sido posible gracias a la asesoría y dirección de estas ONGs, así como de otras ubicadas en diferentes regiones del país.

FM4, en particular, ha sido una organización muy relevante en el apoyo a los medios. Si bien existe una alianza, no ha sido tan masiva ni contundente como debería ser, dada la magnitud del fenómeno migratorio. Es necesario magnificar este tipo de alianzas y apoyos para elevar la organización de los migrantes a otro nivel.

Pregunta: Mi interés radicaba en identificar, desde la perspectiva mexicana, las organizaciones de derechos humanos que coinciden con la perspectiva más amplia que mencionaba en la pregunta anterior. No solo se trata de la necesidad inmediata derivada de los derechos inherentes a la condición humana, sino también de las alianzas. Me interesa saber si existen en México organizaciones legítimas y activistas de derechos humanos que compartan la perspectiva que usted estaba presentando.

Daniel Villafuerte: Sí, hay otro elemento importante que omití mencionar: el acompañamiento de la Iglesia, en particular de los jesuitas, quienes han desempeñado un papel destacado en este sentido. Sin embargo, tengo la impresión de que en algún momento el protagonismo que tenían los jesuitas en este ámbito disminuyó un poco debido a ciertas directrices desde Roma, del Papa, para impulsar el apoyo y la alianza con los migrantes. Aunque parece que Roma redujo un poco la intensidad de estas directrices, lo que se reflejó incluso a nivel local en Chiapas, los jesuitas siguen realizando un trabajo sumamente importante y relevante, brindando refugio, acompañamiento y asesoramiento. Conozco a algunos colegas jesuitas con quienes he conversado extensamente sobre este tema y sobre la preocupación que expresan diariamente.

Moderador: En México, existen alrededor de 286 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por, para y desde las personas en movilidad humana. Dentro de este panorama, el involucramiento de la Iglesia Católica, a través de congregaciones religiosas y diócesis, es evidente. Aproximadamente un 70 % de estas organizaciones tienen un carácter religioso, mientras que el resto somos laicos. Como mencionó el doctor Villafuerte, existen distintas redes, entre las que destacamos nuestra participación en la Red de Documentación de Defensores de Migrantes (REDODEM). Además, hay redes de casas en el norte y sur del país, donde nos congregamos para brindar atención de manera articulada a esta población.

Quisiera agregar, como punto final, que estos movimientos sociales, incluidas las caravanas, no se originan exclusivamente en la movilización de sur a norte. Observamos cómo los procesos de inmovilidad dentro de México, en el contexto de la securitización y la geopolítica internacional, también desempeñan un papel importante. Este contexto ha generado una diversidad de movilizaciones con objetivos específicos, como el aumento en las solicitudes de condición de refugiado. Por ejemplo, el incremento de solicitudes de refugio llevó a personas a plantarse frente a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado en Ciudad de México, generando presión para obtener respuestas.

Este tipo de movilizaciones, muchas veces invisibilizadas, evidencian cómo los instrumentos jurídicos actúan de manera casuística según los intereses del Estado mexicano en abrir o cerrar la movilidad. En resumen, estas movilizaciones, que se consolidan a través de los movimientos de acuerpamiento de caravanas, están evolucionando y generando nuevas facetas. Es un fenómeno dinámico que merece nuestra atención continua.

Daniel Villafuerte: Es crucial considerar la participación de la sociedad organizada a lo largo del país, con la finalización del título 42 y la implementación del título ocho en una versión más rigurosa. Se anunció que se aplicará de manera estricta con los países aliados para evitar que las personas lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Existe una clara consigna para detener la llegada de personas incluso aquellas que atraviesan el tapón del Darién, donde el año pasado se desbordó con la llegada de más de 240 mil migrantes de diversos países. Esta situación lleva a que el Departamento de Estado y el Comando Sur estén detrás de las reuniones diplomáticas, instando a Colombia, Panamá y los países centroamericanos a evitar el paso. Es evidente que la política migratoria se reduce a una política de contención, sin una separación clara entre ambas. Esta cohesión refleja el enfoque actual hacia la gestión de la migración.

Reflexiones finales

Los estallidos sociales reconfiguran el presente

Jaime Preciado Coronado

■ Doi: 10.54871/ca25es9b

La discusión realizada entre las personas expertas en los seis países y en el caso de las Caravanas Migrantes, con los coordinadores de este libro, fue muy motivante para pensar en el legado que dejan los estallidos sociales analizados en torno del difícil tránsito de la acción colectiva, de los movimientos sociales, hacia comunidades políticas de pertenencia, sean instituidas en los diversos regímenes y sistemas políticos y de partidos, o sean instituyentes, que prefiguran nuevas relaciones entre Estado y Sociedad con sentido comunitario innovador. Aquí se reflexiona sobre el impacto contemporáneo de los estallidos sociales de 2019, actualizando hasta 2024 –la discusión previa a este libro abarcó hasta 2023– los alcances, limitaciones y obstáculos democratizadores para cada uno de los siete casos estudiados.

Nos preguntamos sobre la evidente fractura política que vive el gobierno boliviano, en contraste con el proyecto político de Evo Morales, el rumbo de los conflictos y su impacto sobre un amplio tejido de organizaciones sociales, étnicas y de personas trabajadoras.

En el caso chileno, nos interrogamos sobre la aparente desmovilización y desencanto que invade respecto de la movilización tan

masiva entrañada en el estallido social de 2019, luego de la derrota –¿parcial o total?– que significó la Constituyente pacífica, las luchas de contenido al menos antineoliberales que tanta profundidad tienen en la historia reciente de Chile.

El estallido social colombiano nos preocupa, al estar en juego la prometedor construcción comunitaria que apoya al gobierno progresista de Gustavo Petro-Francia Márquez, tanto en el ámbito de las demandas de cambio económico estructural, de justicia socioambiental, de esfuerzos por darle piso a la Paz Total impulsada por ese gobierno, que fueron nutridas por una amplia gama de actores sociales que buscan un sentido de pertenencia democrática transformadora.

Nos inquieta la brecha que se abrió luego del estallido social de 2019 en Ecuador, entre comunidades políticas de pertenencia que luchan por el Estado progresista, y comunidades con poder instituyente con bases indígenas y populares, que combinan la lucha electoral desde dentro y contra el Estado, o bien por impulsar procesos comunitarios autónomos del Estado. La falta de convergencia entre ambos procesos organizativos da pie a la reproducción del poder oligárquico, al desmantelamiento del Estado social y a la dominación de los poderes fácticos, entre ellos del crimen organizado.

Haití, es un caso dramático que borda la tragedia. Si bien el estallido de 2019 abría esperanzas de reformas económicas estructurales, de controles sociales de la corrupción y de demandas de gobierno capaz de disminuir y evitar la violencia, en 2024 han terminado por imponerse las pandillas territorializadas, el crimen organizado y el colonialismo oligárquico interno. La larga data de intervenciones extranjeras y de acciones multilaterales contra la violencia estructural, por los derechos humanos y por un gobierno popular electo, no cuentan con el respaldo suficiente, interno y externo, para procesar esas demandas.

El caso de Puerto Rico parece esperanzador. Las recientes elecciones generales y presidenciales de noviembre de 2024 hacen

visible un arduo, constante y extendido trabajo organizativo que ha logrado converger en una coalición política entre movimientos sociales de base trabajadora y popular, con añejas luchas por la independencia y la soberanía nacional de ese país. De la que ha resultado un activismo comunitario combinado con la militancia partidista, que está definiendo nuevos términos de lucha para terminar con el carácter “libre y asociado” del Estado puertorriqueño, bajo el impulso de nuevas formas de democracia participativa autónoma frente a Estados Unidos.

Un acierto que reivindicamos en este libro es haber tratado las Caravanas Migrantes, nacidas entre 2018 y 2019, como un estallido social propiciado por movimientos sociales transnacionales, que interpelan las diversas escalas, estatales y no estatales, en que se constituyen comunidades políticas de pertenencia: el espacio local, nacional, supranacional y global. En los lugares por los que transitan comunidades efímeras de personas migrantes, estas desafían cada uno de esos Estados nacionales, particularmente, la “frontera vertical” entre México, y Estados Unidos como lugar al que transitan a lo largo de México y que aspiran llegar a Estados Unidos. Donde, en 2024, se realizaron elecciones presidenciales con una agenda anti migratoria “triunfante”, que seguirá avivando conflictos frente a las Caravanas Migrantes.

A continuación, se presentan, una por una, las tres preguntas generadoras del debate al que convocó este libro, por cada uno de los siete casos estudiados:

1) ¿Qué procesos sociopolíticos convergen en la formación de las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno, en los Estados nacionales, y en los procesos comunitarios instituyentes?

- Políticas de identidad.
- Políticas de reconocimiento.
- Políticas de pueblo (“pueblos en movimiento”).

Bolivia

La fuerte división producida en el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha generado un escenario peligroso de cara al futuro. La rivalidad entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, impacta a la base social organizada. La comunidad política de pertenencia (CPP) ahora dividida, que se había reforzado luego de recuperar el poder nacional en las elecciones de 2020, dio pie a que, en la próxima contienda electoral de 2025, la derecha pudiera hacerse otra vez con el gobierno. Sin embargo, más que una oposición maniquea entre dos liderazgos que compiten, ya lo había señalado el intelectual Rafael Bautista desde el 2018 de modo recurrente, el proceso sociopolítico apunta a un desmoronamiento implosivo dentro del propio partido de gobierno que sufrió el golpe de estado en el 2019. “Porque no se trataba de un golpe al gobierno, lo proyectado de ese golpe era el asalto del estado plurinacional y su carácter indígena y popular”. (Aznares, 2024).

Rafael Bautista, entrevistado por Aznares (2024) señala desajustes entre la estrategia electoral del MAS y la soberanía política que iba ganando el pueblo, pues la candidatura de Luis Arce fue decidida por Evo Morales, sin haber escuchado planteamientos electorales desde

la base del propio movimiento. Así, se ha erigido una burocracia, que se mantuvo aparte en los catorce años del gobierno de Evo, la cual ha servido a intereses particulares y no a la consolidación de un proyecto popular. Simplemente eran intereses partidarios, que tienen que ver con el mantenimiento y la amplificación del poder ya obtenido.

Si el relevo en el gobierno boliviano en 2020 había fortalecido la soberanía política popular de movimientos sociales con políticas de identidad, como los Cocaleros, o de reconocimiento, como los asuntos económicos enfrentados por la Central Obrera Boliviana, la lucha política por el Estado no logra un tránsito fluido entre los movimientos sociales y la CPP instituida. Un dilema típico del progresismo, entre facciones especializadas en políticas de gobierno, y movimientos colectivos politizados con demandas de justicia social que rebasan el plano electoral.

Chile

A cinco años del estallido social, cabe preguntarse si esta enorme movilización desembocó en un conjunto articulado de prácticas transformadoras, o si predomina el desencanto de cara a lo no conquistado, a lo que fue derrotado. Concatti (2024) constata que muchas demandas clave como salud, pensiones y justicia social siguen sin resolverse. Dice que la sensación de estancamiento y la falta de avances concretos generan frustración en las organizaciones populares del pueblo chileno. Además, la conquista del poder de parte de Gabriel Boric y las esperanzas iniciales que suscitó se vieron confrontadas. Sin duda, Chile vivió uno de los eventos más trascendentales de su historia reciente en el estallido social, pero tal movilización masiva que puso en evidencia profundas desigualdades sociales, económicas y políticas que habían estado latentes durante décadas, ¿deja sentidos de pertenencia en las comunidades políticas chilenas?

Concatti (2024) cita datos del Centro de Estudios Públicos (CEP), en diciembre de 2019, cuando un 55 % de los chilenos respaldaba las manifestaciones, lo que evidenciaba el amplio apoyo social que tenía el movimiento. “Entre las demandas más urgentes se encontraban la reforma al sistema de pensiones, la mejora del acceso y calidad de la educación y la salud, así como la redacción de una nueva Constitución que dejara atrás el legado institucional de la dictadura”. El periodista hace notar que, en octubre de 2020, el 78 % de los votantes aprobó en un plebiscito la creación de una nueva Carta Magna. “Sin embargo, el camino hacia la transformación no fue sencillo. A lo largo de los cinco años desde el estallido, Chile experimentó una serie de reveses y desencantos. El rechazo a dos propuestas de nueva Constitución –la primera en septiembre de 2022, con un 62 % de los votos en contra, y la segunda en diciembre de 2023– generó una sensación de frustración en la ciudadanía, que ve cómo los cambios prometidos no terminan de concretarse”.

Colombia

En 2024, se conmemoraron cinco años del primer estallido social en 2019 (Ahumada, 2024). Entonces, el malestar social en Colombia marcó la movilización masiva del 21 de noviembre de 2019, que fue una respuesta a las políticas gubernamentales y las injusticias sociales. En el estallido social de 2019, destacó la falta de diálogo por parte del gobierno y la violenta represión de las protestas, lo que provocó numerosas víctimas y violaciones de los derechos humanos. Los disturbios fueron alimentados por temas profundamente arraigados como las políticas de exclusión y el desprecio del gobierno por los acuerdos de paz. Tal descontento contribuyó al éxito electoral de Gustavo Petro, reflejando un cambio en el panorama político. Particularmente en las constelaciones de comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno, pues el triunfo del progresismo repercutió en la configuración del Estado nacional,

y redefinió relaciones de poder a través de procesos comunitarios instituyentes entre organismos sociales de trabajadores del campo y la ciudad, organismos feministas, colectivos de jóvenes que conquistaron espacios callejeros, y demandas autonómicas de pueblos originarios y afrodescendientes.

En torno de esas constelaciones de actores se detonaron procesos sociopolíticos convergentes en el ámbito electoral, que repercutieron en la formación de alianzas o coaliciones políticas que estuvieron, y, en cierta medida, siguen vinculando movimientos sociales y formas tendenciales comunitarias con sentido de pertenencia. Entre estas coaliciones políticas destaca una creativa práctica democrática que combinó políticas de identidad, cuyo caso más evidente y simbólico fue la participación de Francia Márquez como figura afrodescendiente en la Vicepresidencia colombiana, con políticas de reconocimiento vinculadas con la defensa de derechos de ciudadanía respecto de las pensiones, la salud, la educación e, incluso, el cuidado del ambiente. En los años que van del gobierno de Petro-Márquez, se registran intentos por deslindar al gobierno de la renta extractivista, mediante audaces medidas para disminuir el consumo de energéticos fósiles. No obstante, hay políticas de pueblo (“pueblos en movimiento”), particularmente en torno de conflictos sobre la tierra entre las comunidades indígenas organizadas –los pueblos nasa del Cauca colombiano, entre los principales–, que marcan su distancia frente al proceso instituido gubernamental de Petro. (Más adelante, trataremos el significado de los procesos de paz de cara a sentidos comunitarios de pertenencia).

Ecuador

En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró que Ecuador enfrentaba un “conflicto armado interno” debido al incremento de la violencia y la actividad de grupos criminales organizados, considerados “organizaciones terroristas y actores no estatales

beligerantes“. La Asamblea Nacional respaldó unánimemente esta decisión. Además, se aprobó un referéndum en abril de 2024 que introdujo medidas de seguridad más estrictas.¹ A mediados de 2024, se enfrentan una de las crisis energéticas más severas de las últimas décadas: apagones generalizados que afectaron a gran parte del país. Esta situación exacerbó las tensiones sociales y políticas, generando críticas hacia la gestión gubernamental y su capacidad para garantizar servicios básicos (*France 24*, 2024).

El gobierno de Daniel Noboa enfrentó crisis políticas significativas durante 2024, que desafiaron la cohesión y estabilidad del gobierno: las relaciones conflictivas con la Asamblea Nacional, disputas con la vicepresidenta Verónica Abad y controversias relacionadas con la incursión en la Embajada de México en Quito (*El Universo*, 2024). En febrero de 2024, el presidente lanzó una Consulta Popular que buscaba implementar reformas legales y constitucionales. De las 11 propuestas iniciales, seis fueron aprobadas tras el control de la Corte Constitucional, mientras que otras cuatro, que implicaban cambios a la Carta Magna, superaron un segundo filtro. Esta iniciativa reflejó el interés del gobierno en promover cambios estructurales en la legislación ecuatoriana (*El Telégrafo*, 2024).

El gobierno anunció planes para subastar áreas de la Amazonía ecuatoriana a empresas petroleras, alegando haber obtenido el consentimiento de las comunidades indígenas locales. Sin embargo, organizaciones indígenas, como la comunidad Waorani, negaron haber sido consultadas adecuadamente y expresaron su oposición a la explotación petrolera en sus territorios ancestrales. Este conflicto subrayó las tensiones entre el desarrollo económico y la protección de los derechos indígenas y ambientales (*El País*, 2024).

¹ Esta y todas las referencias en este apartado sobre Ecuador, fueron obtenidas de ChatGPT: ([en.wikipedia.org https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Ecuadorian_conflict?utm_source=chatgpt.com](https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Ecuadorian_conflict?utm_source=chatgpt.com))

El 21 de agosto de 2024, la Coordinación Nacional de las Organizaciones Sociales de la Izquierda y Progresismo del Ecuador, propone un “Pacto Ético de no Agresión, con Diálogo Político”. Un llamado que parece convocar a un momento de unidad en medio de difíciles conversaciones, entre los partidos y movimientos de izquierda, que parece caminar. Si finalmente se logra, dice Paz-y-Miño (2024) “no solo será un paso inédito, sino esperanzador para el país y reforzará las perspectivas de éxito electoral para 2025, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo”.

Haití

Es difícil hablar de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras en Haití, pues el panorama político luego del estallido social de 2019 se caracteriza por la inestabilidad continua y la influencia generalizada de las pandillas, que han socavado significativamente la gobernanza y la seguridad. La situación sigue siendo precaria debido a cuestiones estructurales y dependencia del apoyo internacional. Cabe preguntarse si las pandillas son las responsables del desmantelamiento sistemático del estado haitiano, y si esto reconfigura comunidades políticas de pertenencia con sentido de dominación. “Las bandas criminales –financiadas e instrumentalizadas por los poderes dominantes controlan gran parte de la capital, provocando miedo y desplazamientos de población. En Puerto Príncipe se registran 130 mil desplazados internos” (Observatorio en Comunicación y Democracia, 2024 b). Un dominio que ya abarca la totalidad del territorio nacional.

Es terrible la ambigüedad de la violencia de las pandillas. Ya no se enfrentan entre sí por el control territorial, como lo venían haciendo durante años, ahora, las bandas criminales como el G9 y el Gpèp, las más poderosas que operan en Puerto Príncipe y sus alrededores, acordaron en 2024 un pacto de no agresión para establecer un frente unido contra las autoridades. Aunque su programa

político no es antiautoritario, sus modos de convergencia han variado. Su batalla brutal por la hegemonía utilizando una violencia indiscriminada contra la población civil, incluidas violaciones colectivas de mujeres y menores, las pandillas impulsan una nueva federación ¿una forma comunitaria de pertenencia?, “Viv Ansanm” (“vivir juntos” en creole haitiano), que también ha saqueado e incendiado escuelas, centros de salud, negocios y residencias privadas.

Puerto Rico

La actual crisis económica, exacerbada por las medidas de austeridad presupuestal impuestas por la autoridad fiscal en manos del gobierno estadounidense, sigue provocando un descontento generalizado y protestas que intensifican el conflicto político. Las políticas de reconocimiento se dan en torno del deterioro de la infraestructura eléctrica, aunado a las insuficientes medidas para la reconstrucción de la Isla frente al mal manejo del impacto de los desastres ambientales. Así, las políticas económicas actuales sirven para reforzar la subordinación política y económica al gobierno de Estados Unidos. 2024, marcó el octavo aniversario de la Ley Puertorriqueña de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica (PROMESA) que alienó aún más a los ciudadanos, ya que despojó a la gobernabilidad local de poderes fiscales e impuso medidas de austeridad, frente a la cual se aglutinan demandas que cuestionan al gobierno de Puerto Rico en el proceso de reestructuración de su deuda. Y en sus intentos por llegar a un Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero las partes no estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo.

El estallido social de 2019 decantó una nueva relación entre actores sociales organizados y movimientos sociales que combinan reivindicaciones económicas, políticas y culturales. En las elecciones generales de 2024 se presentó un elemento novedoso (Rumbo Alterno, 2024), “la creación de la Coalición Sindical, un grupo que

reunió a más de 25 sindicatos en el país y presentó un programa político titulado ‘Propuestas para el país que merecemos’”. Un esfuerzo que apoyó al Movimiento Victoria Ciudadana. Además, se creó el primer Comité de Acción Política Sindical en Puerto Rico, con la ayuda del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU).

Puerto Rico ofrece una convergencia plausible entre políticas de identidad y de reconocimiento. En las protestas también se incorporaron expresiones culturales, como la danza y la música, que sirvieron como formas de resistencia y solidaridad comunitaria. La creación cultural abarcó desde las grandes figuras mediáticas como Ricky Martin y Bad Bunny, hasta actividades performativas impulsadas por el feminismo y los grupos LGBTQ+, los jóvenes, los movimientos sociales ambientales y por los derechos humanos. Un activismo cultural que contribuyó a un sentimiento antineoliberal más amplio, vinculando las luchas locales con los movimientos globales por la justicia social.

El estallido social de 2019 sigue influenciando la prefiguración de políticas de pueblo en torno del debate sobre la independencia, la soberanía y la autonomía, desde los partidos políticos hasta nuevos movimientos de base que rehacen las luchas nacionales por la equidad, la justicia y las autonomías comunitarias. Como sucede en otros estallidos sociales, los sentidos políticos de pertenencia comunitaria se contraponen entre los populismos nacionalistas, supremacistas y racistas; entre progresismos con distintos grados de vinculación con los movimientos sociales, y entre luchas comunitarias autónomas que prescinden del Estado. Así se confirmó en las elecciones generales de noviembre de 2024, donde cristalizaron dos coaliciones políticas, además de un intersticio crítico que aún es minoritario.

Caravanas migrantes

Fue un acierto comprender que las caravanas migrantes detonan procesos sociopolíticos muy específicos que convergen en la formación de las comunidades políticas de pertenencia instituidas en el gobierno, en los Estados nacionales y en las instituciones internacionales. Las Caravanas modifican el mapa geopolítico del mundo, de América Latina y el Caribe, en su propia identidad estratégica regional, y en los límites que imponen las migraciones internacionales y nacionales, forzadas o voluntarias, en cada uno de los Estados nacionales por las que transitan y eventualmente residen millones de personas.

No obstante, las personas en movilidad también crean espacios comunitarios instituyentes, y la originalidad de las Caravanas Migrantes reside en la fuerza de la acción colectiva para protegerse en su trayectoria contra el crimen organizado que les asola, además de crear formas de solidaridad comunitaria en sus prácticas cotidianas corporales para alimentarse, resguardarse, cuidar su salud y, eventualmente, de presentar demandas colectivas frente a las autoridades migratorias. Aunque las tácticas de estos movimientos sociales han variado con el tiempo. Cuando surgen las Caravanas, la masividad marcó su estrategia para ser visibilizadas, crear un impacto mediático y reforzar la capacidad de negociación de su estatus de refugiados. Sin embargo, y paradójicamente, la masividad también permitió un control más focalizado por parte de las autoridades migratorias sobre los grupos en movimiento. No obstante, la espontaneidad organizativa de estos colectivos fue capaz de descentralizar su movimiento en grupos pequeños, capaces de adaptarse a enfrentar y resistir de modos particulares, flexibles y manteniéndose en red, el control que ejercen las autoridades migratorias.

Frente a las políticas de identidad nacional, “Las personas migrantes, como epítome de lo extraño que desequilibra una supuesta

cohesión social erigida como mito fundacional de determinado colectivo, nación o ‘identidad’, se ha convertido en la figura a través de la cual canalizar las frustraciones de un mundo en guerra consigo mismo” (Ruiz-Estramil, 2024). Luego del surgimiento de las Caravanas entre 2018 y 2019 las identidades nacionales acotadas por fronteras territoriales implosionan, gracias a la interpelación de estas “comunidades políticas en movimiento”, que desdoblan solidaridades y rechazos. Son conmovedoras las imágenes creadas por la solidaridad al paso de migrantes en refugios y prácticas solidarias contruidos por sociedades locales, a lo largo del paso por esto que se ha llamado “frontera vertical” en México, pero también llegamos a un momento “en el que las fronteras no buscan solamente delinear un territorio, sino también contener, controlar, coartar, pero sobre todo filtrar movilidades entre deseadas, aceptadas e indeseadas. Y es que, sí, los discursos anti migratorios esconden su contradicción en bravuconas consignas, dirigidas solo hacia colectivos ubicados en la subalternidad económica” (Ruiz-Estramil, 2024), o el color de piel, los cuerpos racializados por las políticas de identidad antiinmigrante.

Es muy amplio el abanico de políticas de reconocimiento abiertas por las Caravanas durante sus más de cinco años de existencia; lo notable es que las demandas tradicionales en torno del reconocimiento como refugiados y con derecho al asilo se han reforzado por la acción colectiva, además, han cristalizado sentidos de pertenencia alrededor de la resistencia contra la represión, la exclusión racista y la discriminación. Ello ha impactado naciones y localidades de paso, así como ha recreado vínculos políticos en las naciones que expulsan población. De hecho, la relación entre la política internacional migratoria y el reconocimiento de las raíces estructurales que generan los procesos migrantes ha tenido consecuencias sobre comunidades políticas de pertenencia en organismos multilaterales, como el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador, Honduras) y todos los países de nuestra región, así como han generado nuevos mapas de participación electoral, particularmente en Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2024.

2) ¿Cuáles son los sujetos portadores de comunidades políticas de pertenencia emancipadoras?

- Desde dentro y contra el Estado
- Autonomías comunitarias sin estado

Bolivia

Pese al resultado de un plebiscito que fue ganado por quienes se oponían a la reelección, Morales siguió empeñado en ella. Su revanchismo se mostró cuando llegaron los comicios de 2019 pues buena parte de los movimientos que lo apoyaron ya le daban la espalda y la mayoría de la población seguía rechazando su candidatura. De acuerdo con Zibechi (2024), “Años atrás había dado ‘golpes de Estado’ contra dos de las más importantes organizaciones sociales: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob). En el primer caso, envió a la policía a desalojar a los dirigentes elegidos por las bases, colocando en su lugar a los partidarios de su gobierno”. Ello vulneró la vinculación de los movimientos sociales, como sujetos portadores de CPP, y el espacio político instituido.

Bolivia representa una experiencia muy rica en lo que respecta a las luchas que se dan desde dentro y contra el Estado; sin embargo, el momento de refundación del poder popular y soberano que podría emerger de la mano de los movimientos sociales, no se llegó a cristalizar por la falta de acuerdos políticos para manejar los conflictos entre bases y dirigentes.

Zibechi (2024), propone aprender del pasado al preguntarnos por las razones de semejante deriva que combina autoritarismo con corrupción, violencia sexual (como luego se verá) y apego al poder. Su aprendizaje le lleva a cuestionar las luchas que se centran

en conquistar el poder del Estado. La primera razón es que cuando se coloca en el centro la lucha por el poder, lo demás pasa a segundo plano, incluyendo en lugar destacado la ética y los valores. En segundo lugar, dice que “la historia nos enseña que la toma del Estado ‘termina por pervertir al revolucionario más fiel’, [...] desde el Estado no se puede transformar el mundo [ya que el Estado] es el camino más seguro para reproducir el capitalismo y el orden global...”

Chile

Probablemente, la irrupción de la juventud como portador de comunidad política de pertenencia, sea el factor más característico del estallido social chileno. La presencia de personas independientes del campo instituido del régimen político y de partidos, cuyas acciones, sin embargo, están sometidas al escrutinio público de sus organizaciones y acciones colectivas. A raíz del estallido social se acentúa la brecha entre lo instituido: las elecciones, las políticas públicas; y lo instituyente: las asambleas, las acciones callejeras, la prefiguración de demandas hacia el Estado.

Se acumularon frustraciones dejadas por el campo institucional al no resolver de fondo las demandas planteadas por los movimientos sociales: pocos avances en la exigencia de gratuidad de la educación; severos límites del sistema de pensiones; fracturas sociales que impidieron un nuevo pacto social; falta de reconocimiento de los pueblos originarios, lo que impidió el avance de propuestas interculturales, plurinacionales. Pero, a pesar de ello, lo que se profundizó es una sensación ambigua entre que los cambios deben ser institucionales, aunque sean lentos y cuesten mucho; y que la transformación requiere de mayor velocidad ante la urgencia de las crisis vividas.

En el caso chileno, se presentan nítidamente tres polos alrededor de los cuales giran las luchas por la transformación política: 1) el progresismo y sus afanes por instaurar un Estado renovado,

aunque fuera de la ortodoxia de la primera ola de los gobiernos progresistas, con redistribución de la renta y justicia social; 2) luchas contra y desde dentro del Estado, en donde aumenta la tensión entre movimientos sociales y gobierno, lo cual incluye un momento electoral; y 3) los movimientos de pueblos originarios –particularmente del pueblo mapuche– por conseguir comunidades autónomas desde afuera y al margen del Estado políticamente constituido, saliendo de procesos electorales y de políticas públicas de contención, incluida la redistribución estatal de la renta.

Colombia

Después del estallido social de 2019, los movimientos sociales se vienen vinculando con referentes políticos con sentido de pertenencia. Aunque no hay una sola dirección, ya que los partidos políticos reconfiguran sus estructuras: los partidos tradicionales participan en la oposición y los partidos políticos progresistas participan en la coalición política gobernante con renovadas bases sociales que provienen de los movimientos sociales. Aunque las narrativas públicas hablan de polarización, ni el polo progresista ni el polo opositor responden a un proyecto único. Cada uno de esos proyectos políticos se confronta en la arena pública; el empresariado ejerce fuertes presiones sobre la política económica y social del gobierno, una de cuyas expresiones fue el paro empresarial nacional de transportistas del 1 de septiembre de 2024 en contra del aumento del diésel. “Además de Bogotá, el paro [se sintió] en corredores viales de 23 departamentos, entre ellos Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Meta. De acuerdo con cifras de las autoridades, se [registraron] 153 actividades de protesta y 89 bloqueos permanentes. [...] 38 bloqueos intermitentes y 26 concentraciones, en 142 municipios, de 23 departamentos, con una participación aproximada de 5.577 personas y 1.881 vehículos” (EFE, 2024).

Además de las presiones empresariales contra la política económica de Petro, los proyectos comunitarios emancipadores enfrentan una creciente judicialización de la política, la cual se expresa en numerosos campos. Frente al gobierno de Petro, la alianza entre el Poder Judicial y grupos empresariales vinculados con el uribismo, ha significado el torpedeo sistemático de la lucha anticorrupción, diversos impedimentos de políticas de Estado relativas a la equidad y la justicia social, la complicidad con grupos paramilitares del crimen organizado y con el poder oligárquico en las regiones colombianas, el asesinato sistemático de líderes populares, especialmente de personas participantes en las negociaciones de paz, la obstrucción de la justicia frente a comunidades vulnerables, particularmente de pueblos originarios y afrodescendientes. Se trata de criminalizar la protesta social, descalificar el impacto social de la violencia, escondiendo la racialización y su orientación contra las mujeres.

Ecuador

En los procesos electorales se decantan sujetos que son portadores de transformaciones sociales, en los que se gestan comunidades políticas de pertenencia que luchan desde dentro y contra (d) el Estado y organizaciones comunitarias autónomas que luchan por desaparecer al Estado. En febrero de 2025 Ecuador volverá a las urnas para celebrar elecciones generales, en las cuales se elegirán un binomio presidencial, 151 asambleístas y cinco parlamentarios andinos. César Ulloa (2024) afirma que estamos ante “un ciclo atípico, pues antecede a este proceso la muerte cruzada o disolución de la Asamblea que se produjo por decreto ejecutivo en la administración del expresidente Guillermo Lasso en mayo de 2023 y que adelantó las elecciones para un periodo corto”.

Ecuador cuenta con 290 agrupaciones con registro electoral para inscribir candidaturas locales. Donde el número de aspirantes al

poder excede, vertiginosamente, a los que se eligen para los distintos cargos populares. Esta proliferación de agrupaciones genera dos fenómenos anómalos para una democracia saludable: fragmentación y volatilidad. Para Ulloa (2024) “no hay fidelización ni ideología, más bien se ha exacerbado la personalización política, los outsiders y el populismo. Otro problema que se agudiza es que los partidos seleccionan a sus candidatos por fuera de los partidos [...]”.

Las izquierdas llegan a esta elección más fragmentadas que en ocasiones anteriores, pues algunos disidentes del correísmo corren por cuenta propia. Además, el movimiento indígena va solo con el líder de los dos últimos estallidos de protesta nacional como alternativa, Leónidas Iza. Ulloa (2024), ve que “Para el caso de las derechas, ocurre lo propio, pero sin mayor fragmentación”. Aunque las encuestas favorecen la candidatura anticorreísta del actual presidente de Ecuador, la competencia con al menos otros tres candidatos: la correísta Luisa González, el “centrista” Jean Topic y Leónidas Iza por la CONAIE-Pachakutik, no logra suficiente distancia para que la elección presidencial se resuelva en primera vuelta. De tal manera, que el éxito opositor en la segunda vuelta dependerá de la convergencia entre el correísmo y sus críticos.

Si Daniel Noboa puede presentar su candidatura, sus banderas serán el anticorreísmo, el hecho que representa la nueva generación política y un gobierno de mano dura contra la delincuencia y la corrupción. Frente a ello, (Ulloa, 2024) “se le endilga al actual mandatario improvisación, inexperiencia, una suerte de exceso de juventud para afrontar los problemas más severos y que giran en torno a la inseguridad, el crimen organizado, la narcopolítica y la crisis energética”.

Haití

Las élites haitianas han utilizado durante mucho tiempo grupos armados no estatales como herramientas para imponer su autoridad

política y económica. Sin embargo, es poco probable que se produzca un cambio positivo a largo plazo a menos que se combatan las raíces de la expansión de las pandillas. Como lo señala el Observatorio en Comunicación y Democracia. (2024 b): “Esas élites han proporcionado fondos, armas e impunidad a las pandillas, a cambio de lo cual éstas ayudaban a reprimir protestas, garantizar la victoria de determinados candidatos en las elecciones y proteger territorios para negocios legales e ilegales”. De tal manera que las comunidades políticas de pertenencia antiautoritarias, herederas del estallido social de 2019, enfrentan enormes dificultades para hacer avanzar políticas de reconocimiento y de identidad con sentido democrático popular.

Las CPP no se acotan a una dimensión geopolítica local o nacional. Estados Unidos y Canadá han tratado de romper los lazos entre las pandillas y las élites haitianas, pero estas medidas no son eficaces, pese a imponer sanciones a algunos de los políticos más influyentes y poderosos empresarios, incluidos dos ex presidentes, dos ex primeros ministros y varios ex senadores acusados de haber apoyado directa o indirectamente a las pandillas. También, Naciones Unidas estableció un régimen especial de sanciones en octubre de 2022 para evitar vínculos entre las pandillas y sus patrocinadores externos. Incluso el despliegue de la misión de seguridad multinacional liderada por Kenia y autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023, supuestamente para ayudar a la policía a enfrentar a las pandillas, y preparar el terreno para las elecciones, se han visto empañadas por discordias internas, frente a las cuales la presencia de unos 400 policías kenianos no ha podido hacer algo significativo (Observatorio en Comunicación y Democracia, 2024 b).

Se espera que el gobierno de transición nombrado en 2024 organice elecciones generales para que las autoridades locales, regionales y nacionales puedan asumir sus cargos en febrero de 2026, casi diez años después de las últimas elecciones. Antes, se debe nombrar un consejo electoral provisional, que organice el sistema de

votación del país. Y, a la par, propicie un proceso de reforma constitucional antes de que se celebren las elecciones. Se puede decir que, en una situación similar a los Acuerdos de Paz en Colombia, la pacificación de Haití pasa por definir negociaciones con todos los grupos involucrados, tanto las comunidades políticas de pertenencia con raíces democráticas, como las CPP de corte autoritario.

En 2024, poco después de que se estableciera el gobierno de transición, Jimmy Chérizier, el portavoz de facto de la coalición Viv Ansanm, propuso que el gobierno y las pandillas se sentaran a hablar (Citado por Segura y Da Rin, 2024): “Necesitamos diálogo hoy, Sr. Primer Ministro. Demuestra al mundo que puedes hacer historia como alguien que... pacifica al país”, dijo Chérizier (más conocido como “Barbacoa”) en un vídeo en línea. Conille respondió diciendo que los bandidos deben “dejar sus armas y reconocer la autoridad del Estado antes que cualquier otro acuerdo”. Se ciernen esperanzas en el Movimiento Nacional por la Libertad y la Igualdad de los Haitianos por la Fraternidad (Mouvement National pour la Liberté et L'égalité des Haïtiens pour la Fraternité, MOLEGHAF) CPP que denuncia: “la élite haitiana utiliza a los paramilitares para aplastar la resistencia popular” con el fin de mantener a Haití bajo la ocupación estadounidense.

Puerto Rico

Los principales impulsores del conflicto político en Puerto Rico durante 2024 provienen de una compleja constelación de actores que sustentan el estatus colonial, que debaten sobre la identidad cultural boricua contra identidades subordinadas por la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos; aunque la falta de consenso sobre las opciones de estatus (estatalidad, independencia o autonomía reforzada) exacerba las tensiones entre las comunidades políticas de pertenencia, entre los partidos políticos y la población, o en los temas de identidad y nacionalismo puertorriqueños

que influyen en las percepciones de ciudadanía, comunidad y pertenencia dentro del marco colonial. El impacto de la crisis económica ligada con la dependencia de Estados Unidos en el marco de un colonialismo interno, y la persistente violencia política –terror estatal colonial– por parte de las autoridades estadounidenses y puertorriqueñas, que sirve para reprimir la disidencia y mantener el control. Esta violencia contribuye a un clima de miedo y resistencia, que complica el panorama político y alimenta el conflicto. Estos factores, ya resaltados en la arena pública por los estallidos sociales de 2019, contribuyen a los debates en curso sobre el posible rol emancipador de las comunidades políticas de pertenencia, en torno de la ciudadanía y la gobernabilidad democrática.

Los estallidos sociales de 2019 se proyectan hasta la actualidad (2024) en el acentuamiento del difícil tránsito de los movimientos sociales hacia comunidades políticas de pertenencia. En el caso de Puerto Rico, el balance es positivo, ya que las luchas por democratizar al Estado, tomando en cuenta las particularidades nacionales y del contexto geopolítico internacional, van ganando terreno. Las elecciones de noviembre de 2024 muestran que el estallido desembocó en el fortalecimiento de opciones decoloniales, independentistas con una autonomía reforzada, en la vinculación de demandas antineoliberales, antipatriarcales, por la justicia socioambiental, en contra del extractivismo, por una justicia redistributiva del ingreso, y por una adecuación fiscal contraria a la austeridad y al régimen privatizador que impulsan las oligarquías locales aliadas con el poder gubernamental estadounidense.

Desde dentro y contra el Estado es una lucha que debate sobre el progresismo en la complejidad de una lucha por la independencia y la autonomía. En la medida que el progresismo puertorriqueño no ha gobernado ese país, y que hay una coalición política electoral, fortalecida por el estallido social de 2019, Puerto Rico registra experiencias organizativas exitosas que comprenden una opción electoral, pero que es rebasada por procesos instituyentes de conformación de comunidades políticas de pertenencia que cuentan

con lazos orgánicos con el movimiento sindical y por numerosas acciones colectivas que desembocan en el plano de la política y del poder nacional, local y que presenta desafíos a la estructura instituida de la Unión Americana.

Algunos comunistas con nexos con pares políticos en Estados Unidos apoyaron críticamente la Alianza de País. Ellos, como el grupo Rumbo Alternativo (2024), reconocieron que “la Alianza ofrecía la posibilidad de lograr el objetivo importante y necesario de romper con el sistema bipartidista tradicional, pero que esto no era suficiente para satisfacer los intereses de la clase trabajadora. Para que esto suceda, es necesario que la clase trabajadora tenga su propia organización política, su propio partido de los trabajadores revolucionarios”. Aquí tenemos una muestra de lo que acontece alrededor de la tensión entre movimientos sociales portadores de sentido comunitarista y procesos progresistas que conquistaron un gobierno nacional, o que están batallando por conformar una propuesta progresista para ganar al gobierno de un país, en este caso, Puerto Rico.

Caravanas migrantes

Este libro abre interrogantes, muchas de las cuales merecen ser investigadas posteriormente. Entre ellas destaca lo que se refiere a políticas de pueblo (“pueblos en movimiento”), pues, aunque la literatura estudiosa del fenómeno migratorio colectivo organizado ha crecido junto con las Caravanas Migrantes, hace falta sistematizar el contenido anticapitalista que encierran esas acciones colectivas, contra el despojo, contra las herencias coloniales y patriarcales, contra los efectos ambientales, como es el caso de la migración climática, pues las sequías, tormentas e inundaciones han desplazado a miles de personas. Y ello ha impulsado formatos comunitarios organizados, en aquellos casos donde se vinculan luchas locales y agendas supranacionales o globales, en donde existe un tejido

comunitario previo. Así, las migraciones contemporáneas han trastocado redes y espacios de sociabilidad entre migrantes y residentes nacionales en el ámbito de políticas públicas migratorias y en el espacio de las relaciones de poder territorializadas, particularmente dentro de los procesos electorales de la región y, particularmente, en Estados Unidos. Pues el destino buscado por las Caravanas es refugiarse en ese país.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 se debe en gran medida al paquete antimigratorio de su campaña electoral: el fin de las políticas de regularización, el endurecimiento de la frontera con México, y ¡la mayor deportación masiva en la historia de la humanidad!: “La guerra contra los migrantes es un fenómeno en ascenso que contempla modalidades de deshumanización política y jurídica frente a los claroscuros de la ‘no ciudadanía’, y la expansión de un régimen de apartheid con diques fronterizos que operan como agujeros negros de los (muy postergados) derechos universales” (NODAL, 2025). De tal manera, que crece la brecha entre las expectativas de las personas migrantes que se han organizado colectivamente en las Caravanas Migrantes y la falta de reivindicaciones relativas a su derecho humano al refugio en el país de su destino.

Una parte nodal de la extrema derecha en el mundo es la agenda antiinmigrante; así se expresa en lo que será el gobierno de Donald Trump que prevé suspender “tres de las políticas de regulación migratoria más importantes: la *Parole in Place*, que concede la residencia a las parejas de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses con más de diez años de permanencia en el país; la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y las visas de trabajo H-1B (NODAL, 2025).

Sin embargo, durante los últimos meses de 2024, ha habido actitudes de resistencia por parte de comunidades políticas de pertenencia instituidas en América Latina y el Caribe, con el fin de contrarrestar la necropolítica antiinmigrante de la potencia mundial, quien criminaliza a la población migrante calificándola como

una “amenaza para la salud pública” que transmite diversas enfermedades contagiosas, como delincuentes del crimen común y organizado, como desquiciados mentales –come mascotas– que atentan contra la cultura e identidad nacional estadounidense. Contra esa postura, los gobiernos progresistas de nuestra región buscan convergencias político-diplomáticas. Gustavo Petro criticó el impulso de una política de terror basada en el racismo y la xenofobia que expone gravemente a la comunidad migrante; Claudia Sheinbaum está convocando a reuniones presidenciales entre los países afectados por la deportación-expulsión de migrantes; Xiomara Castro, prevé eliminar la concesión de bases militares en Honduras, puesto que población hondureña se verá afectada por esas expulsiones. Varios gobiernos afectados por la deportación coinciden en la necesidad de definir políticas nacionales e internacionales que aborden las causas raigales de la migración internacional forzada.

3) Modos bajo los que se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia.

- Anticapitalismo que cuestiona el orden internacional, nacional y “glocal”.
- Lucha contra el enfoque estadocéntrico desde movimientos sociales “politizados”.
- Democracia y procesos electorales en torno de las comunidades políticas instituidas; tensiones entre gobiernos progresistas e izquierda social.
- Violencia sistémica, procesos de paz, derechos humanos, agenda antipatriarcal.
- Luchas contra el racismo y diversas formas de discriminación de las minorías y de las disidencias.

Bolivia

La complejidad del estallido social de 2019 hizo emerger la importancia de la CPP en el ámbito geopolítico, pues luego de la pandemia del COVID-19, el litio y el gas bolivianos reforzaron el rol estratégico del Estado en la renta obtenida por vías extractivistas. De tal manera que los cuestionamientos anticapitalistas provenientes de movimientos politizados chocaron con las alianzas intergubernamentales planteadas por el gobierno de Luis Arce en el marco del Triángulo del Litio (Argentina-Bolivia-Chile). Asimismo, la lucha contra el enfoque público estatal estadocéntrico creó ciertas brechas entre los organismos sociales indígenas y campesinos con el gobierno boliviano.

Algo importante a destacar es que el estallido social de 2019 fortaleció el espacio electoral alrededor del cual las CPP disputaron el espacio político constituido, y que ello ya no es fuente de conflicto entre los contrincantes electorales. En contraste, la agenda anti patriarcal se encuadra dentro de las disputas entre Evo Morales y Luis Arce. Zibechi (2024) señala que el actual gobierno “ventila y amplifica las violaciones de mujeres cometidas por Morales, quien tuvo un hijo con una chica de 15 años y se le conocen unos cuantos casos de relaciones sexuales con menores cuando era presidente. [Morales] cometió ‘estupro’ continuo a lo largo de todos sus gobiernos”. No obstante, es inquietante que no sea la justicia la que anime las prácticas de unos y otros, sino la revancha y el ataque político entre ambos bandos.

También hay que destacar que la fuerza ganada por los movimientos sociales feministas y en contra del racismo se fortaleció luego de 2019 en la medida que el gobierno de Arce ha acotado los impulsos racistas de la derecha y ultraderecha en las regiones bolivianas donde cuenta con una base social racista y patriarcal.² A pe-

² Además de movimientos interseccionales feministas autónomas, es importante destacar algunas de las organizaciones de mujeres politizadas, como la Confederación

sar de ello, las raíces excluyentes y discriminadoras reaccionarias siguen convocando sentidos de pertenencia que conforman una base electoral que acecha al poder estatal.

Chile

La conformación de las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia, tuvo repercusiones en las políticas financieras de ajuste y austeridad globales, al menos al cuestionar los treinta años recientes de neoliberalismo a la chilena. La lucha contra el incremento de la tarifa del Metro fue percibida como el símbolo de un sistema económico y político que favorecía a las élites a expensas de la mayoría. Concatti (2024) señala que, según el informe World Inequality Report de 2022, el 1 % más rico de Chile concentra el 49,6 % de la riqueza total del país.

A través de redes sociales, los jóvenes coordinaron acciones, organizaron manifestaciones y documentaron la represión policial. Se combinaron la lucha contra la desigualdad social y contra la concentración de la riqueza y la lucha contra la injusticia y por revalorizar la memoria. Sin embargo, esas luchas sociales no se sincronizaron con la demanda de una constituyente pacífica que ordenara nuevos pactos y contratos sociales. En una encuesta del CEP en 2019, el 80 % de los jóvenes de entre 18 y 29 años veía en las manifestaciones una expresión legítima del descontento social, sin embargo, en octubre de 2024, solo el 23 % de los chilenos apoyaba las movilizaciones que impulsaron el proceso constituyente, una caída significativa respecto al 55 % registrado en 2019.

Si bien el primer gran paso hacia la redacción de una nueva Constitución se dio en octubre de 2020, cuando el 78 % de los chilenos

Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas “Bartolina Sisa”, La Subcentral de Mujeres Indígenas del Tipnis, o la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra.

votó a favor de iniciar el proceso constituyente en un plebiscito histórico, fue en mayo de 2021 que se eligieron a los 155 miembros de la Convención Constitucional encargada de redactar la nueva Carta Magna. Como reflejo de la diversidad social y política de Chile, se registró una fuerte presencia de independientes y representantes de movimientos sociales, además de ser paritaria en términos de género. No obstante, que se rechazó el proyecto constituyente de 2021, el proceso continuó. En 2023, se lanzó un segundo intento de Constitución, pero esta vez el panorama cambió significativamente, pues la elección de los redactores representó una victoria para miembros de partidos de derecha y sectores conservadores.

Ante ambos fracasos constituyentes, el gobierno de Boric tuvo que resignarse a la preservación de la Constitución aprobada en 1980, tratando de rescatar las reformas progresistas logradas en su devenir. Al respecto, Concatti (2024), dice que “A cinco años del estallido social que exigió un cambio profundo en el modelo político y económico, el camino hacia las reformas estructurales sigue sin materializarse de manera significativa, mientras que la desconfianza en las instituciones continúa creciendo”. A finales de 2024, el 50 % de los chilenos considera que el estallido social fue “muy malo o malo” para el país, lo que sugiere un cambio de percepción sobre el impacto del movimiento.

Colombia

El proyecto gubernamental emancipador de “Paz Total” enfrenta obstáculos que reproducen la apuesta neoliberal, y la campaña conservadora que judicializa la política. Si bien el objetivo inicial de los Acuerdos de Paz fue involucrar a todos los grupos armados, la narrativa conservadora pretende descalificar el sentido incluyente de los Acuerdos: “los delincuentes no tienen derechos”, “mano dura contra la guerrilla”, “a los vándalos no se les protege, se les extermina”. Eduardo Restrepo (2023), argumenta que la desigualdad y

violencia en Colombia están arraigadas en un orden moral jerarquizado que produce existencias “dispensables” marcadas por el desprecio y la indiferencia.

A la oposición conservadora de cara a los Acuerdos de Paz, se suman las fuertes diferencias entre el gobierno y el ELN. En 2024, tras un violento ataque del Ejército de Liberación Nacional, las negociaciones se suspendieron, sin que ello haya significado un cambio de objetivos maximalistas a acuerdos más pragmáticos e incrementales. El ELN como comunidad política de pertenencia tiene divisiones internas. En abril de 2024, el gobierno colombiano sofocó una rebelión encabezada por el frente Comuneros del Sur, en Nariño. Además, la grave situación que afrontan las poblaciones en departamentos como Arauca, Chocó y Nariño, entranpan las negociaciones nacionales confrontadas a los espacios locales. El apoyo público al proceso de paz está menguando, lo que requiere mejoras visibles en la seguridad para restablecer la confianza en el diálogo. De acuerdo con Insuasty (2024) “Las tensiones en los diálogos de paz reflejan desacuerdos internos en el Gobierno de Petro y dudas sobre el enfoque utilizado que evidencia en últimas seguir priorizando el Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) como objetivo, sin avanzar hacia transformaciones estructurales que solucionen las causas profundas del conflicto”.

En noviembre de 2024 se conmemoraron los cinco años del estallido social que detonó grandes transformaciones de la constelación de actores sociales que convergen en la transformación sociopolítica colombiana. Para conmemorarlo, las centrales obreras colombianas protagonizaron una movilización popular en las principales ciudades del país en respaldo a las reformas sociales, promoviendo la paz y la unidad. La marcha respaldó, además, la democracia y la línea de gobierno seguida por el presidente Gustavo Petro, basada en el respeto a los derechos humanos, la soberanía y la paz. Asimismo, el pueblo alzó su voz contra los intentos desestabilizadores y de golpe blando que llevan a cabo los sectores opositores del país. En Colombia, el estallido social de 2019 y las

subsecuentes movilizaciones populares, muestran que hay un tejido novedoso de comunidades políticas de pertenencia con sentido emancipador.

Ecuador

De acuerdo con el Observatorio en Comunicación y Democracia (2024), “El gobierno de Noboa se ha caracterizado por la sociedad del espectáculo, el Estado policial, la militarización del territorio, y la crisis humanitaria en las cárceles con una frontal deshumanización de la población carcelaria. [...] Ecuador es el país más violento de toda América Latina: los asesinatos aumentaron en un 600 % desde 2019”. Se impone así un Estado punitivo de la mano dura, contrario a la satisfacción de las demandas detonadas luego del estallido social de 2019.

La declaración del Conflicto Armado Interno (CAI) el 9 de enero de 2024, le dio al gobierno de Noboa un paraguas institucional, para ejecutar tres acciones fundamentales para la transformación de las funciones de los aparatos represivos del Estado: primero el impulso de una militarización del espacio público a nivel nacional, con especial énfasis en sectores periurbanos pauperizados y zonas rurales; en segundo lugar, la estrategia de vigilancia y control de la Policía Nacional, que ha mutado de la relativa pasividad a la agresión directa como mecanismo de coerción; y, en tercer lugar, la militarización de las cárceles y centros de privación de libertad del país, con carta blanca para cualquier tipo de abuso (Observatorio en Comunicación y Democracia, 2024).

Al declarar que el conflicto interno se encuadra en acciones terroristas, Noboa pretende cambiar la actual Constitución ecuatoriana, en la que no se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Lo cual requiere de una reforma parcial

que, según la misma Constitución, se debe hacer vía referéndum. Noboa trata de revivir la presencia militar estadounidense, ya no en Manta, donde Correa evitó el establecimiento de una base militar, sino en las Islas Galápagos, por su potencial geopolítico de contribuir a la seguridad de Estados Unidos, y no tanto, de combatir al narcotráfico en la plataforma continental ecuatoriana.

Además de la crisis autoinducida en el sector energético, lo que ha hecho Noboa es “incrementar el IVA al 15 %, subir el precio de las gasolinas extra y Ecopaís, invertir lo mínimo en el Plan Anual de Inversiones, promover las alianzas público-privadas para la concesión (privatización) de las empresas del Estado, profundizar el extractivismo, favorecer a la empresa privada” (Observatorio en Comunicación y Democracia, 2024). Ello ha implicado una ola de despidos que incrementan el desempleo, la descomposición de la producción agropecuaria pequeña y mediana, la expulsión de más de 200 mil personas del país, vía migraciones forzadas. El Observatorio en Comunicación y Democracia, concluye que: “Entre el racismo institucionalizado, la deshumanización de los presos, y la persecución y criminalización de la organización y los sectores populares, el Estado policial sigue cobrando vidas en los sectores populares. La generación del consenso ha sido exitosa en el país, no solo logró justificar esta transición hacia un estado de control estatal más elevado, sino que distorsionó en la opinión pública el concepto de crimen organizado”.

Haití

De acuerdo con Heine (2024), “Este es un país sumido en la violencia, con un Estado fallido por excelencia, donde las pandillas han asesinado a unos 12 mil haitianos desde 2021, alcanzando la cifra de 600 mil desplazados (en un país de 11 millones de habitantes). A lo anterior se suman cinco niños muertos o heridos a bala a la semana y a una ciudad capital, Puerto Príncipe, controlada en un

80 % por las pandillas”. Frente al fenómeno de los desplazamientos internos forzados, causados por el poder de las pandillas, se dificulta el tránsito de las acciones colectivas hacia comunidades políticas de pertenencia, en función de la violencia ejercida por los grupos pandilleros.

La migración internacional representa un desafío cuya agudeza produce una destrucción del tejido social nacional. En primer lugar, la difícil convivencia de la migración haitiana con la población de República Dominicana. Según la Dirección General de Migración de República Dominicana, en el primer semestre [de 2024] se deportó a sus países a 67.844 extranjeros, de ellos la inmensa mayoría haitianos (66.227). Paralelamente, “el Gobierno de Haití denunció [el martes 8 de octubre de 2024] en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que República Dominicana está llevando a cabo una estrategia de ‘limpieza étnica’ con su política de deportaciones masivas de migrantes haitianos” (Korn, 2024).

En este contexto, afirma Korn (2024), que la Canciller de Haití, Dominique Dupuy alertó a las autoridades internacionales pertinentes sobre “las brutales escenas de redadas y deportaciones” que, según denunció, se registran en la República Dominicana contra sus compatriotas. Asimismo, anunció próximas reuniones con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en la zona fronteriza para definir una estrategia de apoyo a las personas afectadas. La migración internacional haitiana enfrenta dificultades para conformar una agenda multilateral. Por una parte, el gobierno de R. Dominicana se rehúsa a tratar esos temas cuando se rebase la relación bilateral y, por otro lado, las migraciones hacia Estados Unidos, una buena parte de ellas a través de México y en alguna medida participando en las caravanas migrantes organizadas, tampoco encuentran espacios de tratamiento de carácter multilateral.

Como lo asienta Heine (2024) “Según el Banco Mundial, Haití no solo es el país más pobre de las Américas, sino que de los más

pobres del mundo. Un 87 % de la población vive bajo la línea de la pobreza y un 30 % bajo la de la extrema pobreza. La expectativa de vida es de apenas 63 años, versus 72 años en América Latina y el Caribe en su conjunto, y 81 años en Chile”. Sin embargo, lejos de considerar las causas sistémicas estructurales que causan la migración, a la población haitiana migrante se le discrimina por su estatuto racial, económico y nacional. Colomé (2024) nos recuerda que Donald Trump le estampó una risa trágica al tema de la emigración en el debate presidencial ese año, pues él “Aseguró que, en Springfield, una pequeña ciudad que ha acogido a casi 20 mil inmigrantes en los últimos cuatro años, muchos de ellos haitianos, ‘la gente que ha llegado se está comiendo a los gatos, se está comiendo a los perros, se está comiendo a las mascotas de la gente que vive ahí’”. Las cifras apuntan a que una sexta parte de los haitianos vive fuera de su país. Siguiendo con Colomé (2024): “En 2023, la diáspora haitiana en Estados Unidos sumaba más de 731 mil personas, la quinta población más numerosa nacida en el extranjero, que representa el 16 % de los 4,6 millones de inmigrantes caribeños, el mayor número después de los cubanos, los dominicanos y los jamaicanos”.

Puerto Rico

Podemos distinguir dos modos bajo los que se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia. Coss (2023), evidencia que las agendas políticas progresistas transformadoras son, como siempre, acosadas por los medios corporativos, que “intentan invisibilizar al liderato del MVC y el PIP e inculcar que se trata de una alianza ‘comunista, terrorista, independentista y subversiva’, recurriendo a su arma principal que ha sido el miedo”. Bajo una segunda modalidad, están las agendas (geo) políticas neoliberales: las fuerzas políticas que han vivido de robarle al erario público y que se han organizado a través del PNP-PPD. Propone Coss (2023) que “En esencia, son dos empresas neoliberales y

corruptas, pues se dedican al robo del presupuesto gubernamental, privatizando los servicios públicos y manejando para su beneficio, los fondos federales de USA. No hay ningún compromiso social de servir, sino de servirse”.

La coalición progresista independentista arroja una agenda anticapitalista que cuestiona el orden internacional, nacional y “glocal”. Para la coalición derechista *La democracia es prosperidad*, el MVC representaba el socialismo y el comunismo, vinculados con Cuba y Venezuela. Según Rumbo Alterno (2024) “es por lo que toda la propaganda se centró en desacreditar y demonizar al MVC y no al PIP. Para hacer esto, estas corporaciones invirtieron más de dos millones de dólares (en radio, televisión, prensa y redes sociales) y presionaron a sus respectivos empleados para que votaran en contra de la Alianza”.

Aún es temprano para situar una lucha contra el enfoque estadocéntrico en el que incurren los gobiernos progresistas, quienes son cuestionados desde movimientos sociales “politizados” que no están insertos dentro de la estructura gubernamental. Si acaso, la experiencia progresista de gobernar San Juan, la capital nacional, muestra que se está construyendo una nueva narrativa de gobierno, que redefine los cánones democráticos liberales, mediante prácticas innovadores de buen gobierno, de consultas plebiscitarias en torno del estatuto político de Puerto Rico, y de espacios de convergencia entre las demandas producto de la movilización social y los tres poderes de gobierno.

Si bien es cierto que se desplazó al PPD a un tercer lugar en cuanto a los votos para la gobernación se refiere, esa institución continúa teniendo control de una mayoría de las alcaldías, y además aumentó dicho control de 40 a 45 pueblos de la isla. El PPD seguirá teniendo control sobre una destacada parte de la administración pública del país. Además, el PPD obtuvo la candidatura nacional más votada en la figura de Pablo José Hernández como comisionado residente con un 45 % de los votos (Coss, 2023).

“Hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Creo que se llama Puerto Rico”, palabras pronunciadas por el comediante Tony Hinchcliffe durante un acto de campaña de Donald Trump en Nueva York (27 de octubre de 2024), que desataron una ola de indignación entre los puertorriqueños, tanto dentro como fuera de la isla. Faltaba poco más de una semana para las elecciones presidenciales en EE. UU., en las que más de 5 millones de personas de origen puertorriqueño tienen derecho a voto. (BBC News Mundo, 28 de octubre de 2024). Una narrativa bendecida por el trumpismo, que penetra en el racismo y colonialismo interno puertorriqueño. Frente a lo cual hay contranarrativas críticas, como la de Bad Bunny, quien crea sus canciones tejiéndolas con movimientos sociales o con perspectivas proindependentistas, antirracistas y feministas actualmente.

Caravanas migrantes

La constelación de redes y actores que participan en movimientos sociales transnacionales como las Caravanas Migrantes desafían por su complejidad y novedad los modos bajo los que se conforman las agendas (geo)políticas en las comunidades políticas de pertenencia. Esta obra apunta algunos rasgos y tendencias que influyen en la institucionalidad de los regímenes políticos y del Estado, tanto como en los procesos instituyentes que, desde la esfera social, étnica, comunitaria, por género, configuran lo que denominamos “otra política”, destacando los proyectos emancipatorios. Estamos ante una línea de investigación cuya complejidad desborda los alcances presentados en este libro. Pese a la imposibilidad de dar cuenta de la totalidad conceptual y empírica del fenómeno, esta obra colectiva se arriesga a establecer ciertas constataciones que contribuyan a situar un análisis tan complejo en su estructuración y con tan amplias repercusiones en la política como arena de conflictos y, a la vez, como espacio de posibles convivencias humanas.

Una primera conclusión es que las poblaciones en movimiento reconfiguran el espacio geopolítico local, de manera directa, en el tránsito de las Caravanas por comunidades de pertenencias territoriales. El carácter transfronterizo de estos movimientos modifica el mapa social de lo local y las relaciones entre Estado y sociedad a través de múltiples vías. Una de las principales es la encarnación del racismo en la política de los cuerpos, de las personas. Un racismo que crea adeptos, que aglutina odios, que moviliza al electorado, en torno de una necropolítica normalizada con chivos expiatorios a la medida de las campañas electorales. Para responder a estos interrogantes, coincidimos con Ruiz-Estramil (2024) en que pensar las migraciones quizá sea un buen ejercicio para analizar las relaciones de poder que se están fraguando entre los Estados y las personas. Es sobresaliente pensar en sistemas complejos de actores-red, en las constelaciones que se forman debido a la acción colectiva y su impacto en la organización política frente a la trama de Estados nacionales, sus instituciones orientadas hacia el control de la migración y los soportes electorales tan cambiantes en cada coyuntura nacional y en el entramado internacional.

¿Qué tanto y cómo pesan las caravanas migratorias en la conformación de una agenda anticapitalista que cuestiona el orden internacional, nacional y “glocal”? Parte del problema es que la atomización de las demandas reivindicatorias, relativas a colectivos migrantes, impide ver cierta unificación de expectativas en un programa comúnmente asumido. Dificultad que se acentúa por el carácter transnacional y transfronterizo de los conflictos que se abordan, temas como el derecho internacional a migrar se unen a reivindicaciones de estatutos migratorios incluyentes en los países de tránsito y de llegada de las personas migrantes. O cambios en las legislaciones nacionales que abran sus ordenamientos hacia la doble nacionalidad, o figuras transitorias adaptadas a la movilidad y paso junto con derechos a obtener la nacionalidad en países de destino de la población migrante.

Ganar la narrativa sobre los aportes de las personas migrantes al crecimiento económico de los países receptores es crucial para entender la migración como base laboral de una economía de explotación, que requiere ser contrapesada: “Según la Fundación Nacional para la Política Estadounidense (NFAP, por sus siglas en inglés), la migración es responsable del 88 % del aumento de la fuerza laboral de los Estados Unidos desde el 2019. [...] En el 2022, un informe del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) demostró que 10.9 millones de migrantes indocumentados contribuyeron con 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. De esa monumental cantidad, por lo menos 59.400 millones fueron recaudados por el Gobierno federal. [...] el aporte fiscal de la fuerza laboral migrante indocumentada es mucho mayor que el de los aportantes nativos” (NODAL, 2025). De aquí que el análisis de las Caravanas Migrantes contribuye a una mejor comprensión del potencial aporte en la lucha contra el enfoque estado céntrico desde movimientos sociales “politizados”, que están creciendo, aunque todavía no encuentren una cristalización en formas coordinadas en comunidades políticas de pertenencia con fuerza instituyente para modificar a las CPP instituidas.

En resumen, entre 2023 y 2024, las caravanas migrantes fueron un reflejo de una crisis estructural en América Central, el Caribe e incluso Suramérica, y un desafío político para los gobiernos de la región, Estados Unidos y México. Las políticas migratorias en Norteamérica y nuestra región, se mantuvieron en constante evolución, y aunque hubo esfuerzos para mejorar las condiciones de vida en los países de origen y proteger los derechos de los migrantes, el fenómeno de las caravanas no cesó, continuando como un importante tema en la agenda política, humanitaria y social de la región.

Bibliografía

Ahumada, Consuelo (26 de noviembre de 2024). Colombia: Memoria del estallido social. *Las 2 Orillas*. https://www.las2orillas.co/memoria-del-estallido-social/#google_vignette

Aznarez, Carlos (12 de noviembre de 2024). Rafael Bautista y la grave crisis en Bolivia. *Telesur*. https://www.telesurtv.net/blogs/rafael-bautista-y-la-grave-crisis-...m=NewsletterEspañol&utm_campaign=NewsletterEspañol&utm_content=36

BBC News (28 de octubre de 2024). La furia por el comediante que durante un evento de Trump llamó a Puerto Rico “isla de basura” y se burló de los latinos. *BBC News Redacción*. <https://www.bbc.com/mundo/articles/c5yx8656qj6o>

Colomé, Carla Gloria (13 de septiembre de 2024). Ni perros, ni gatos: la situación real de los migrantes haitianos en Estados Unidos. *El País*. <https://elpais.com/us/migracion/2024-09-14/ni-perros-ni-gatos-la-situacion-real-de-los-migrantes-haitianos-en-estados-unidos.html>

Concatti, Lisandro (18 de octubre de 2024). A cinco años del estallido social en Chile: ¿transformación o desencanto? *El Salto*.

Coss, José (Papo) (31 de marzo de 2023). Los movimientos sociales y las elecciones de Puerto Rico 2024. *Rebelión. América Latina y Caribe*. <https://rebelion.org/los-movimientos-sociales-y-las-elecciones-de-puerto-rico-2024/>

EFE, Agencia de Noticias (6 de septiembre de 2024). El Gobierno colombiano dice que llegó “hasta el límite” para levantar el paro camionero. <https://efe.com/mundo/2024-09-06/gobierno-colombiano-dice-llegar-hasta-el-limite-para-levantar-paro/>

Harmony, Princess (2 de diciembre de 2024). La heroica resistencia armada en Puerto Rico. *Mundo Obrero. Workers World*. <https://www.workers.org/2024/12/82246/>

Insuasty Rodríguez, Alfonso (22 de septiembre de 2024). Crisis y oportunidades en los diálogos de paz con el ELN. *Telesur*, , disponible en: https://www.telesurtv.net/opinion/crisis-y-oportunidades-en-los-d...=NewsletterEspañol&utm_campaign=NewsletterEspañol&utm_content=44

Korn, Victoria (10 de octubre de 2024). ¿Limpieza étnica? Dominicana y la deportación masiva de haitianos. *Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico* (CLAE). <https://estrategia.la/2024/10/09/limpieza-etnica-dominicana-y-la-deportacion-masiva-de-haitianos/>

NODAL (2025). América Latina y el Caribe enfrentan la guerra contra la migración. Editorial Radio Red. *Nodal, Agencia Informativa*. <https://www.nodal.am/2025/01/america-latina-y-el-caribe-enfrentan-la-guerra-contra-la-migracion/>

Observatorio en Comunicación y Democracia (2024). Ecuador: Noboa y las lógicas del narcoestado. *Fundación para la Integración Latinoamericana*. <https://www.nodal.am/fundacion-para-la-integracion-latinoamericana/>

Observatorio en Comunicación y Democracia (23 de octubre de 2024 b). Haití, ahora bajo el imperio de las pandillas. *Fundación para la Integración Latinoamericana*. <https://estrategia.la/2024/10/23/haiti-ahora-bajo-el-imperio-de-las-pandillas/>

Paz-y-Miño Cepeda, Juan J. (31 de agosto de 2024). Ecuador: unidad de las izquierdas. Revista *Con Nuestra América*, AUNA-Costa Rica. <https://connuestraamerica.blogspot.com/2024/08/ecuador-unidad-de-las-izquierdas.html>

Restrepo, Eduardo (2023). *Desprecios que matan. Desigualdad, racismo y violencia en Colombia*. Guadalajara: CALAS/Editorial Universidad de Guadalajara.

Ruiz-Estramil, Ivana Belén (18 de diciembre de 2024). Las migraciones en tiempos de odio generalizado. *Blog de pueblos. El Salto Diario*. <https://www.elsaltodiario.com/revista-pueblos/migraciones-tiempos-odio-generalizado>

Rumbo Alterno (2024). Puerto Rico: una mirada crítica a las elecciones de 2024. *Revolutionary Communists of America*. <https://communista.org/puerto-rico-a-critical-look-at-the-2024-elections/>

Segura, Renata y Diego Darin (29 de agosto de 2024). Haiti's Window of Opportunity. What It Will Take to Stop Gang Violence and Promote Stability. *Revista Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/haiti/haitis-window-opportunity>

Telesur (21 de noviembre de 2024). Colombia se moviliza en conmemoración del estallido social de 2019. <https://www.telesurtv.net/colombia-se-moviliza-en-homenaje-a-estallido-social-de-2019/>

Ulloa, César (2024). Un Ecuador fragmentado irá a las urnas. *Revista Latinoamérica21*. <https://latinoamerica21.com/es/un-ecuador-fragmentado-ira-a-las-urnas/>

Zibechi, Raúl (30 de noviembre de 2024). Bolivia, o las miserias del poder. *La Jornada*.

Sobre autores y autoras

Valeria Coronel es doctora en Historia Moderna y contemporánea de América Latina por la Universidad de Nueva York y profesora titular e investigadora en FLACSO Ecuador. Además, es catedrática del departamento de sociología y estudios de género, del doctorado en Historia Andina y miembro del coloquio de investigación en sociología política. Su investigación principal ha dado cuenta de la transición del estado oligárquico al estado nacional social en la región andina, formas de movilización e integración del campesinado indígena en los partidos políticos (siglos XIX y XX). Es miembro del consejo científico de CALAS-Andes.

Liliana Cotto Morales es socióloga urbana y de movimientos sociales comprometida en teoría y práctica con los sectores menos privilegiados, la educación liberadora, la independencia nacional, las soberanías y la de-colonización de Puerto Rico (Borikén). Posee un BA en sociología, filosofía y literatura de la Universidad de Puerto Rico; una MA en teoría social de la New School for Social Research y un doctorado en sociología urbana y política de la Universidad de Rutgers. Fue Catedrática de la Facultad de Estudios Generales y de Ciencias sociales de la Universidad de Puerto Rico de donde se jubiló en 2011.

Jochen Kemner es investigador de la Universidad de Kassel, y director ejecutivo de CALAS en Guadalajara, México. Se doctoró en Historia en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Ha sido profesor visitante en la Universidad de La Habana, la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Guadalajara. Sus áreas de investigación y publicación incluyen la historia del Caribe y de América Latina, la esclavitud, los movimientos sociales transnacionales, libros de textos de historia y la pedagogía de educación global.

Maria Lois es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, donde desempeña su labor docente e investigadora en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas. Su investigación y docencia se inscriben en el área de la Geografía Política, la Geografía Cultural y la Geopolítica, trabajando en cuestiones metodológicas como la perspectiva de Lugar y las geografías políticas y electorales del nacionalismo en Galicia; en la historia del pensamiento geopolítico de las dictaduras ibéricas (España y Portugal); en la geopolítica crítica del cambio climático y, en los últimos años, en Estudios de Fronteras, en particular, en temas patrimonio, turismo y políticas de escala en las fronteras interestatales de Europa y América Latina.

Jefferson Pierrelus Francois es profesor en el Centro de Formación Humana del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Sus temas de investigación abarcan migración, discriminación, exclusión social y negación de derechos, migración empleo y políticas migratorias.

Jaime Preciado Coronado es profesor-investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (DEILA) de la Universidad de Guadalajara. Ha sido coordinador del doctorado en Ciencia Política en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma Universidad. Cuenta con un doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de París III. Sus

líneas de investigación abarcan la geopolítica de la globalización e integración regional, geografía del poder –local, nacional, supranacional– y la democracia. Desde 2025 es director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS).

Axel Rojas Martínez es profesor titular del Departamento de Antropología en la Universidad del Cauca, Colombia, y estudiante del doctorado en Sociedad, Política y Cultura de la Universidad del País Vasco. Ha acompañado procesos de investigación colaborativa con organizaciones sociales afrodescendientes e indígenas en el suroccidente colombiano. Algunos de sus intereses giran en torno a las dinámicas de organización social en la región, los extractivismos, las políticas interculturales y otras formas de multiculturalismo.

Daniel Villafuerte es maestro en Desarrollo Rural y doctor en Ciencias Sociales, por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Actualmente trabaja en el CESMECA, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica en Chiapas. Es miembro del SNI, nivel III y Perfil PRODEP-SEP. Sus líneas de investigación abarcan la política, la globalización y el cambio socio-cultural. Entre sus publicaciones destacan *Tiempo de fronteras: una visión geopolítica de la frontera sur de México* (2017) y el libro coordinado *Migrantes en tránsito a Estados Unidos: vulnerabilidades, riesgos y resiliencia*.

Claudia Zapata Silva es doctora en Historia, con mención en Etnohistoria, por la Universidad de Chile. Profesora titular de la Universidad de Chile, adscrita al Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de esa casa de estudios. Se ha especializado en historia contemporánea de América Latina, en movimientos indígenas y en pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. En el año 2015, recibió el Premio Ezequiel Martínez Estrada de Casa de las Américas (Cuba) por el volumen *Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile. Diferencia, colonialismo y anticolonialismo*.

En este segundo volumen del estudio sobre los estallidos sociales que sacudieron a América Latina y el Caribe a partir de 2019, se reflexiona sobre su impacto contemporáneo y se actualizan, hasta 2024, los alcances, limitaciones y obstáculos de los procesos democratizadores que emergieron en cada uno de los siete casos analizados: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Puerto Rico y las caravanas migrantes. La discusión planteada por las personas expertas invitadas a compartir aquí sus análisis se centra en los contextos más amplios y en los legados que dejan los estallidos sociales examinados. El eje del debate reside en el difícil tránsito de la acción colectiva y de los movimientos sociales hacia comunidades políticas de pertenencia: ya sea mediante procesos instituidos en los diversos regímenes, sistemas políticos y de partidos, o bien a través de dinámicas instituyentes que prefiguran nuevas relaciones entre Estado y sociedad con un sentido comunitario innovador.